

L'EUROPE DE L'ÉCOLOGIE .



mientrastanto.e

Número 218 de diciembre de 2022

Notas del mes

La oportunidad del programa de Sumar

Joaquim Sempere

Vivienda y alimentación

Albert Recio Andreu

¿Reglas jurídicas para erradicar la pobreza?

Jordi Bonet Pérez

Los «votos perdidos» de la izquierda alternativa en nuestro sistema electoral

Miguel Guillén Burguillos

El futuro es aterrador

Joan M. Girona

De líderes, procesos y confluencias

Albert Recio Andreu

Ensayo

Ideas para orientar una agenda política en la próxima década

Joan Benach

Sumar en la encrucijada

Antonio Antón

El extremista discreto

Ladran, luego cabalgamos

El Lobo Feroz

Kakademia, III

El Rombo

De otras fuentes

La tumba mediterránea

Sergio Ferrari

El keynesianismo militar ruso

Volodymyr Ishchenko

El éxito chino determina la tensión militar

Rafael Poch de Feliu

Noviembre 2022: el cinismo toca techo

Nacho Casado

Millonarios contra la humanidad

Juan Íñigo Ibáñez

Concertada a la fuerza: la «libertad» de Ayuso

Agustín Moreno

La lucha de clases antifranquista

Antonio Antón

Otros mapas de conflictos sindicales: luchas feministas en los márgenes del trabajo

Julia Taberner, Justa Montero y Eva Muñoz Moreno

Solo sí es sí: violencias sexuales y prisión

Laia Serra

En la pantalla

[Trabajadores fantasma](#)

[Catar: explotación en el emirato](#)

La Biblioteca de Babel

[Salir del armario en la Universidad](#)

...Y la lírica

[Australia 1970](#)

Judith Wright

Joaquim Sempere

La oportunidad del programa de Sumar

El mundo entero y no sólo España vive en una encrucijada importante. Ya muy poca gente duda de la gravedad del cambio climático. La guerra de Ucrania, a su vez, más allá de la tragedia que representa, es un mal síntoma: cuando el reto climático y ecológico exigiría cooperación internacional y un orden geopolítico multipolar, esa guerra expresa unas tensiones creadas sobre todo por el ansia hegemónica de Estados Unidos frente a China, Rusia y cualquier otra potencia emergente.

Un dato que en medio del ruido mediático queda ahogado es que el agotamiento previsible de los combustibles fósiles y el uranio está ya muy cerca: tendrá lugar en la segunda mitad del presente siglo. La crisis de suministros de gas ruso a Europa viene presentada sólo como un efecto de la guerra de Ucrania y desligada de la situación estructural de las reservas del subsuelo a escala mundial, dando la sensación de que, una vez terminada la guerra, será posible volver al *statu quo ante* en materia de suministro energético.

Pero el agotamiento de las fuentes —fósiles y uranio— que han permitido el inmenso y acelerado desarrollo industrial y agrícola de los últimos dos siglos va a suponer una mutación histórica profunda que puede tener efectos sociales de largo alcance. Dado que todas las actividades humanas usan energía —la producción agroalimentaria, la industrial, el transporte, la vida cotidiana, etc.— un salto energético como el que será obligado dar va a afectar a toda la vida social. Todo se verá afectado, como indica la inflación inducida por el precio del gas. Y los cambios adaptativos, difíciles de prever en sus detalles, exigirán revisiones drásticas que en muchos casos serán traumáticas.

Téngase presente, además, que la cuestión de los plazos temporales puede pillarnos desprevenidos si no comprendemos que, aunque el agotamiento de esas fuentes de energía vaya a tener lugar en la segunda mitad del presente siglo, sus efectos se harán sentir bastante antes, pues los depósitos de combustibles del subsuelo de la Tierra empezarán a dar señales de escasez antes de quedar exhaustos, y cualquier reducción de la oferta, por modesta que sea, irá generando escaseces, a ritmos imprevisibles pero inexorables, que dificultarán o impedirán muchas de las actividades esenciales para la reproducción social según los baremos a que estamos acostumbrados. La propia Agencia Internacional de la Energía, organismo de la OCDE, está emitiendo señales de alerta desde hace más de un año sobre los posibles cortes de suministro de crudo, ya en 2025, por falta de inversiones.

Una oferta de energía menor y en declive va a repercutir en todo: producción, transporte, salud, bienestar cotidiano y alimentación. Para hacer frente a esas repercusiones no servirán muchas de las fórmulas socioeconómicas y culturales hoy disponibles. Hará falta un viraje de largo alcance. Tres ejemplos lo ilustran.

Primero, la sustitución del actual modelo energético —con quema de combustibles de *stock* de elevada densidad— por otro renovable, con menos densidad energética, puede permitir conservar muchas de las actividades humanas actuales, pero no todas, ni con la misma intensidad y volumen. La eficiencia y el ahorro de energía seguramente no bastarán: hará falta

también reducir el consumo y el transporte de personas y cosas. Será preciso un cambio cultural hacia formas de vida más frugales.

En segundo lugar, será preciso sustituir todo un aparato de producción y consumo activado por los combustibles actuales por otro activado por energía de fuentes renovables, lo que implica masivas reconversiones industriales y laborales. Y esto deberá hacerse sin que la sociedad se detenga, tratando de evitar el paro masivo, sin que falten alimentos y otros bienes esenciales para vivir.

En tercer lugar, habrá que sustituir el actual modelo agroalimentario por otro más resiliente, basado en agricultura ecológica, regenerativa y de proximidad, más autosuficiente, que dependa lo menos posible del petróleo y el gas, de aportes químicos de síntesis y del comercio a larga distancia. Esto supone redistribuir la población trabajadora más equilibradamente por todo el territorio, porque esa nueva agricultura requerirá más mano de obra: será necesario un retorno a la tierra demográficamente significativo.

En otras palabras: la crisis del modelo energético fosilista-nuclear, primera manifestación del profundo desastre ecológico a que nos ha llevado la civilización industrial capitalista, va a cambiar —está ya cambiando— todo el panorama social, económico y político. Para salir de este atolladero con los mínimos daños para las mayorías populares, sólo una fuerza política audaz, dispuesta a atacar de raíz los problemas, está en condiciones de ofrecer soluciones justas y viables. Las demás fuerzas políticas o no se están planteando estos problemas, o lo hacen ofreciendo fórmulas continuistas —como el “capitalismo verde”— que buscan preservar los intereses y privilegios de los poderosos.

Por eso, la elaboración de unas propuestas entendidas no como simple programa electoral, sino como **proyecto de país o de sociedad**, con un horizonte temporal de 10 años, es una oportunidad para ofrecer a la sociedad, y en primer lugar a las clases populares, un conjunto de propuestas que sean a la vez principios ético-políticos e ideas-fuerza que orienten adecuadamente la actividad política del próximo futuro.

Este proyecto colectivo debe tener la ambición, a mi entender, de ser una respuesta constructiva capaz de atraer a una amplia mayoría, más allá incluso de los y las votantes de izquierda. Debe ambicionar conquistar una hegemonía cultural para unas políticas que puedan ser reconocidas como las más válidas y oportunas en el difícil momento histórico que tenemos delante. Con un proyecto así, puede ocurrir algo parecido a lo que representó el Estado del Bienestar, implantado gracias a la ola de fondo antifascista que siguió a la derrota del nazismo en 1945. Este logro institucional de las izquierdas europeas ha conquistado un consenso tan amplio que nadie osa discutirlo, aunque subrepticamente la derecha intente socavarlo. El proyecto de sociedad que se está elaborando bajo el impulso de Sumar con la participación de equipos de expertos muy competentes debería, según creo yo, asumir esta ambición.

Hay que ser valiente para proponer políticas que tal vez no susciten una adhesión mayoritaria en un primer momento, porque mucha gente sólo aceptará los diagnósticos y los cambios radicales cuando le vea las orejas al lobo. Pero hay que combatir a los falsos profetas que venderán humo y falsas promesas, aunque evitando alarmismos que desmovilicen en lugar de animar a la lucha.

Está ocurriendo algo nuevo que puede dar una oportunidad a las políticas propuestas por lo que

en otros momentos se hubiera considerado una izquierda radical y hoy ya sería simplemente una fuerza política con sentido común y a la altura de los desafíos y retos presentes. El ciclo ultraliberal iniciado en los años setenta empieza a chirriar. La reacción adversa de la Bolsa londinense ante la tentativa de la primera ministra británica de bajar los impuestos a los ricos ha sido el episodio más llamativo de que las fórmulas neoliberales ya no sirven. Pero no es el único. La intervención de los precios de la energía por parte de la Comisión Europea va en la misma línea. El gran capital parece ir comprendiendo que la situación y las perspectivas no podrán resolverse con más libre mercado, sino con más intervencionismo estatal (como ya ocurrió en la crisis de 2008 con los rescates de los bancos), y que para eso hace falta aumentar los impuestos, no reducirlos.

Este cambio de aires no significa que el gran capital pierda poder: las enormes acumulaciones de capital y el aumento correlativo de las desigualdades indican lo contrario. Pero puede dar nuevas oportunidades a la clase trabajadora y a los sectores populares, interesados en que el estado incremente sus instrumentos de intervención pública. Si este proceso antiliberal sigue adelante, puede abrirse una etapa de lucha por controlar las palancas del estado.

Pero ¡cuidado! Esta lucha no está decidida de antemano a favor de unos u otros, y se complica con los avances de la derecha extrema en toda Europa. La derecha extrema es ambigua respecto al uso del poder estatal. Aunque últimamente ha defendido políticas neoliberales, hunde sus raíces ideológicas en tendencias intervencionistas, y puede ser el ariete del gran capital para controlar el poder del estado al servicio de éste.

Una de las causas principales del desencanto popular con “la política” es que la política no se ha enfrentado en estos últimos decenios a la ofensiva contrarrevolucionaria del gran capital contra los derechos y las conquistas de los trabajadores de los años de la prosperidad. Desde los años setenta el neoliberalismo ha hecho retroceder sin tregua a los trabajadores, y ninguna fuerza política significativa ha podido pararle los pies. Tal vez la crisis actual del neoliberalismo puede cambiar las cosas. Pero sólo lo hará si hay quien tenga la audacia necesaria para tomar la iniciativa y pasar a la ofensiva.

Ante todo, hay que reconstruir un sector público poderoso, capaz no sólo de asegurar las prestaciones sociales esenciales ya institucionalizadas (sanidad, educación, protección social), sino capaz también de poner condiciones al sector privado y depender menos del endeudamiento. Esto significa: reforma fiscal valiente, banca pública, sistema ferroviario público, telefonía pública, gran producción energética y redes de distribución públicas, etc. Conviene observar que mucho de esto ya existió en España y en otros países europeos capitalistas antes de la contrarrevolución neoliberal.

En segundo lugar, reglamentación enérgica de dos sectores que satisfacen necesidades básicas y que hoy peligran: vivienda y alimentación. Convendría expropiar las viviendas en manos de los fondos de inversión y establecer reglas estrictas sobre precios y alquileres. El sistema agroalimentario debe ir pasando a formas de agricultura y ganadería ecológicas y regenerativas con la ayuda del estado, cuando sea preciso, para que los productores primarios puedan vivir decentemente y para lograr que aumente la población rural.

En tercer lugar, hay que implantar una planificación económica pública. En una etapa de transición energética y ecológica, la planificación será absolutamente necesaria, porque el

mercado no podrá lograr por sí solo las complejas y urgentes readaptaciones implicadas en el cierre de muchas actividades insostenibles y el desarrollo acelerado de las energías renovables y de la nueva economía verde; readaptaciones que deberán hacerse aceleradamente y con los mínimos costes sociales posibles. *Un proyecto de sociedad a la altura de estos tiempos debería asumir este tipo de objetivos: no debe desaprovecharse la oportunidad.*

Albert Recio Andreu

Vivienda y alimentación

Cuaderno pandémico: 15

I

Vivienda y alimentación constituyen dos de los elementos básicos de la vida humana. Su provisión debería situarse entre las preocupaciones centrales de los gobiernos. En las sociedades modernas representan una parte importante del gasto de la gente común y los problemas de una mala alimentación y un acceso inadecuado a la vivienda influyen directamente en la salud de las personas, en su educación, en su socialización.

II

La vivienda hace años que se ha convertido en un problema esencial para mucha gente. Incluso en la época en que en España se construían más pisos que en ningún lugar, la vivienda, sus precios, ya era uno de los principales problemas sociales. Cuando estalló la burbuja, el endeudamiento excesivo se tradujo en desahucios. Y desde entonces esta situación no se ha revertido. Muchas de las primeras víctimas nunca han vuelto a tener acceso a una vivienda en condiciones, o tuvieron que pasar al mercado de alquiler. Y cuando no pueden pagar, vuelve la rueda de los desahucios. Además, el número de gente sin hogar ha crecido. Y los problemas de vivienda, de su coste, se han visto afectados también por el crecimiento de los precios energéticos. Una vivienda no son sólo cuatro paredes: requiere de consumo energético para iluminación, para alimentos y para calefacción (algunos añadirían refrigeración, pero vistos los efectos perniciosos del aire acondicionado considero que es un tema aparte). Es innegable que, para un sector de población atrapado entre unos salarios paupérrimos y unos alquileres al alza, especialmente para jóvenes, inmigrantes y familias monomaterales, la vivienda se ha convertido en un problema insoluble. Por las dificultades para su acceso y por su elevado coste. Es también, aunque en menor medida, un problema para aquellas administraciones locales, como la de Barcelona, que tratan de paliar el problema y se encuentran con un gasto creciente dedicado a pagar pensiones y otros espacios inadecuados para “colocar” a las familias desahuciadas sin alternativas.

El problema de la vivienda tiene muchas caras. Pero el núcleo de la cuestión sigue radicando en la propiedad del suelo, en cómo se delimita, se protege. Estos días, la lectura del magnífico libro de Ricardo Robledo sobre la reforma agraria en España (*La tierra es vuestra*, Pasado y Presente, Barcelona, 2022) me ha sugerido que el problema de la propiedad del suelo agrario, que fue un elemento crucial del conflicto social en la República, se ha trasladado al suelo urbano. Sobre todo, porque en todo ello subyace un conflicto entre la propiedad entendida como un derecho absoluto al lucro y la necesidad social de acceso a la vida (en el caso actual a la vivienda). Y también porque la dureza, y los argumentos, con que los propietarios defienden su derecho tienen su paralelo en el momento actual.

La ausencia de una verdadera política de vivienda pública está en el centro del problema. Desde la década de 1960 el núcleo de la política de vivienda fue la promoción privada. La mayor

expansión del gasto público se produjo en la década de 1980, justo cuando todos los gobiernos adoptaron políticas neoliberales. Y el Gobierno optó por expandir el gasto en educación y sanidad y dejar caer la política de vivienda. De hecho, la mayor parte del gasto público en vivienda se centró en desgravaciones fiscales a la adquisición de vivienda privada. La recalificación de suelos para favorecer al sector inmobiliario e incluso la venta de suelo público a promotores privados significaron, de hecho, otra forma de “desamortización de bienes públicos” en beneficio del capital privado. Fue también uno de los espacios donde se concentró la corrupción política, descentralizada, a nivel local (aunque casos como la Gürtel indican que también formaba parte de diseños más generales). La burbuja inmobiliaria fue promovida por el sector financiero, otorgando créditos generosos a promotores, quienes adquirirían así suelo a precios elevados y después transferían este elevado coste a los compradores privados. La brutal expansión de los precios de la vivienda pudo soportarse durante cierto tiempo por los moderados tipos de interés y por la técnica de alargar los plazos de amortización, lo que derivaba en cuotas de pago mensual que los hipotecados consideraban soportables. Al final, el crecimiento de los precios, el aumento de los tipos de interés decididos por el BCE (alegando como ahora la lucha contra la inflación) y el crecimiento del paro provocaron la quiebra del modelo. Lo que vino después fue el salvamento público de la banca (es difícil saber el coste real de las ayudas: teniendo en cuenta la evaluación del Tribunal de Cuentas —66.577 millones de euros— y la deuda del Sareb que el estado asume, el monto total se acerca a los 100.000 millones de euros) y la creación de un proceso masivo de desahucios, aún no concluido. Los bancos corrieron a vaciar viviendas para limpiar sus balances. Generaron un grave problema social, agravado además porque han incumplido sus obligaciones con las comunidades de vecinos en las que tienen viviendas vacías (muchas de ellas transferidas a los fondos buitres).

La expulsión de morosos, obligados a pasar al mercado de alquiler, ha generado otra burbuja en este sector con relativa poca oferta. Pero la burbuja del alquiler tiene otros factores que complican la situación. De una parte, la especialización turística del país ha propiciado la transformación de una parte del parque de vivienda de alquiler en vivienda turística (mucho más rentable para sus propietarios), una especie de hoteles de bajo coste. De otra, el cambio en la propia dinámica laboral en ciudades como Barcelona, donde el crecimiento de las actividades “tecnológicas”^[1] atrae una masa de mano de obra internacional bien retribuida, o cuando menos con capacidad de pago de alquileres elevados. Muchos de ellos son trabajadores de paso, de temporada, que alquilan viviendas por estancias cortas y contribuyen a alimentar el crecimiento de precios en beneficio de los propietarios.

Hay una perversa relación entre, por un lado, la dinámica de la oferta de vivienda, que ha encontrado en el sector turístico y en las demandas de sectores de altas rentas una demanda más rentable, y, por otro lado, la dinámica de las economías locales y el mercado laboral. Los nuevos sectores de las TIC, los videojuegos y la investigación generan la creación de puestos de trabajo relativamente bien retribuidos. En parte, atraen una oferta de trabajo internacional, que ve con buenos ojos las condiciones de vida del país (algo obvio en el caso de Barcelona). Por su lado, el turismo y todos los servicios auxiliares generan empleos de baja calidad en cuanto salarios y condiciones de trabajo, agravados en muchos casos por las restricciones de derechos que padecen la población inmigrante. Se genera por tanto una situación en que la vivienda se convierte en un tema imposible para una parte de la población trabajadora.

III

Resolver el problema de la vivienda es complicado. Proliferan las demandas de más vivienda pública. Algo obvio. Pero es sospechoso que también sea el sector empresarial quien lo pide. Lo hace por el interés propio de evitar que en las políticas de vivienda se incluyan regulaciones que afecten a sus jugosas ganancias en el sector inmobiliario. Donde han puesto sus intereses muchos de los que han vendido sus empresas al capital financiero o a alguna multinacional y ahora se dedican a la inversión financiera e inmobiliaria. No quieren que se toquen las prerrogativas de su propiedad y por ello trasladan toda la responsabilidad a lo público.

Invertir en vivienda pública es necesario, tras años de dejación. Pero a corto plazo la capacidad de hacerlo es limitada, por recursos y también por el tiempo que toman las nuevas inversiones. En núcleos urbanos muy densos, como es el caso de Barcelona, hay una obvia carencia de suelo para desarrollar una política de vivienda pública de choque. Por eso todo el mundo se refiere al Área Metropolitana, esto es, a volver a trasladar a la gente con menos ingresos a áreas periféricas.

La crisis habitacional exige una política más global que contemple tanto inversiones públicas directas como cambios en los derechos de propiedad. No sólo introduciendo topes a los alquileres, sino también limitaciones a las formas de uso (por ejemplo, limitando o impidiendo la existencia de apartamentos turísticos). Hay razones sociales y urbanísticas: impedir un vaciamiento de los centros urbanos y su conversión en meros espacios turísticos. Pero no va a ser fácil, pues los defensores del derecho a la propiedad tienen mucho poder, tienen muchos aliados y tienen mucha experiencia en jugar con las retóricas de la reacción para impedir que avancen políticas de transformación.

El problema de la vivienda no termina con los problemas de acceso. Hay muchas viviendas construidas en los años del desarrollismo que tienen graves deficiencias. La necesidad de ahorro energético exige además reformas adicionales. Y, dados los ingresos de una parte de la población, las inversiones necesarias están fuera del alcance de miles de familias. Además, los planes actuales priman las inversiones en mejoras energéticas y olvidan la importancia de patologías de otro tipo. Tal como están diseñados, pueden acabar generando la contradicción de que la gente con más ingresos acabe residiendo en viviendas equipadas con placas solares y adaptadas al calentamiento, mientras que la gente con menores ingresos esté condenada a una existencia en viviendas mal acondicionadas y con graves problemas de habitabilidad.

No hay soluciones que no pasen tanto por restringir los derechos de propiedad como por una ambiciosa política redistributiva. En otras palabras: por una verdadera política pública de vivienda

IV

Ante la gravedad de los problemas de la vivienda, el acceso a la alimentación parece un problema menor. Hasta ahora los alimentos han sido relativamente baratos. Y la pervivencia de una cultura tradicional de raíz cristiana ha hecho que la donación de alimentos a la gente necesitada haya proliferado. Es incluso constatable que las personas con ingresos muy bajos saben que conseguir alimentos es más fácil que cualquier otra partida de gasto y prefieren ir a pedirlos y dedicar sus ingresos al pago de otros gastos. Visto desde una óptica de derechos

humanos, el circuito de las donaciones de alimentos tiene mucho de reaccionario, pues se somete a los pobres a las dietas que sus donantes les dan (cuando no a los excedentes de las empresas), quitándoles su capacidad de decisión y elección. Por esto los profesionales más críticos, incluyendo por ejemplo a instituciones como Cáritas, abogan por eliminar estas políticas y dar renta monetaria para que las personas elijan lo que mejor se adecúa a sus necesidades. No deja de ser notoria la resistencia que estas propuestas tienen entre muchas de las organizaciones que han hecho del reparto de alimentos su motivo de existencia y entre una población socializada dentro de una visión paternalista de la solidaridad.

Si la degradación salarial y el problema de la vivienda ya habían generado problemas en el acceso a la alimentación, la inflación actual añade gravedad. En la inflación de los productos alimenticios hay una parte de elementos coyunturales: la guerra de Ucrania y la crisis de los transportes. Pero existen también problemas de fondo que pueden acabar siendo cruciales. En primer lugar, la crisis climática y su impacto sobre la producción de alimentos. En segundo lugar, el previsible encarecimiento de la energía (o, en el límite, la imposibilidad misma de mantener el actual modelo agroindustrial), que puede no sólo afectar a la producción mundial de alimentos sino también tener efectos puntuales perversos. Como por ejemplo el cierre de las instalaciones más caras energéticamente (los invernaderos de los países de clima frío) y su substitución por importaciones de países más pobres. La desigual capacidad de compra de grupos sociales y países puede generar una crisis alimentaria y agravar las desigualdades.

La alimentación está en el centro de la vida humana. Y si algo está en la diana de la crisis ecológica es la alimentación. La organización global de las cadenas alimenticias y los efectos perversos de la desigualdad global pueden acabar generando una crisis alimentaria crucial. Lo de ahora puede que sólo sea una primera entrega, pero debe tomarse como un aviso de lo que tiene altas probabilidades de acabar ocurriendo.

Enfrentar de cara la crisis habitacional y la alimentaria exige poner en marcha iniciativas muy diversas. Pero estas incluyen, inevitablemente, el cuestionamiento (o la regulación) de derechos de propiedad abusivos; la intervención, regulación o reestructuración del funcionamiento de los mercados; y potentes políticas distributivas o redistributivas que garanticen a todo el mundo un acceso a estos bienes esenciales.

1. De hecho, todas las actividades humanas incorporan algún tipo de tecnología. Considerar tecnológicas a las empresas del sector TIC es una forma de hipervalorar su aportación al bienestar humano, para envolverlas con un cierto halo de superioridad y justificar con ello su innegable poder social. Un sector donde la obsolescencia programada es la norma y donde el abuso de poder es patente. ?

Jordi Bonet Pérez

¿Reglas jurídicas para erradicar la pobreza?

Desde el sistema de las Naciones Unidas, la erradicación de la pobreza siempre ha sido —no con el éxito quizá demandado por los valores y principios subyacentes— uno de los puntos de referencia de las políticas de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas y de los organismos especializados vinculados a sus políticas de cooperación al desarrollo. El siglo XXI ha visto la configuración programática de la lucha contra la pobreza como un objetivo internacionalmente consensuado y, sobre el papel, compartido a partir de los acuerdos adoptados en el seno de la Asamblea General: tanto la Declaración del Milenio (Resolución 55/2, de 8 de septiembre de 2000) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio como la Agenda 2030 (Resolución 70/1, de 15 de septiembre de 2015) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el horizonte respectivo de 2015 y 2030, han establecido metas relacionadas con la lucha contra la pobreza —en cuya consecución se pueden identificar sensibles avances— que han venido constituyendo “un marco metodológico para la creación y la aplicación de políticas públicas y de normas jurídicas internacionales”.^[1] Esta última afirmación permite introducir la utilidad de normas jurídicas internacionales que impulsen y condicionen la lucha contra la pobreza.

El punto de partida puede ser perfectamente la [decisión de admisibilidad del Comité Europeo de Derechos Sociales](#) (desde ahora, CEDS) sobre una reclamación colectiva contra España por la situación existente en La Cañada Real (Madrid),^[2] por el corte de electricidad que existe en esa barriada desde el 20 de octubre de 2020, y del que se responsabiliza al Estado en su condición de regulador, sobre la base de la violación de diversos artículos de la Carta Social Europea Revisada, de 5 de mayo de 1996 (desde ahora, la CSE-R), de la que España es Parte desde el 1 de julio de 2021 —fecha también de la aceptación del mecanismo de reclamaciones colectivas, basado en las competencias del CEDS, ante el que se sustancia esta reclamación colectiva—.

Precisamente, una de las disposiciones presuntamente violadas es el artículo 30 CSE-R, que reconoce el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social:

Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social, las Partes se comprometen:

a) a adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para promover el acceso efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social y médica, de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus familias;

b) revisar estas medidas con vistas a su adaptación, si resulta necesario.

La decisión de admisibilidad subraya que se ha justificado adecuadamente la base jurídica de la reclamación colectiva respecto al artículo 30 CSE-R, sustentada en la idea de que España no ha tomado las medidas adecuadas para promover el efectivo acceso a la electricidad de las personas afectadas, dejando de protegerlas contra la pobreza y la exclusión social (pobreza energética).^[3]

Igualmente relevante, empero, es que el CEDS insta a España a adoptar medidas inmediatas dirigidas a que estas personas tengan acceso a la electricidad y a la calefacción, considerando la

especial situación de los grupos vulnerables, así como a ofrecer alojamiento alternativo cuando el restablecimiento de estos servicios no resulte posible.

El artículo 30 CSE-R es un ejemplo entre las diversas normas jurídicas dentro del Derecho internacional de los derechos humanos que exigen del Estado una acción positiva para luchar contra la pobreza.

A nivel universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ofrece un marco jurídico a tal efecto, sin perjuicio de no reconocer exactamente un derecho humano en los mismos términos que el artículo 30 CSE-R, ya que el conjunto de sus disposiciones puede leerse como un marco regulatorio destinado a que toda persona pueda cuando menos satisfacer sus necesidades básicas (eludiendo la pobreza) y, de modo progresivo, disponer de un mayor nivel de bienestar (por ejemplo, dentro de los parámetros de su artículo 11.1, relativo al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, se señala que un buen gobierno es indispensable “para la realización de los derechos humanos, incluida la eliminación de la pobreza, y para asegurar medios de vida satisfactorios para todos”).^[4] Además, erradicar la pobreza es hoy un objetivo común de los ODS y del PIDESC, tal y como ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano de expertos que se encarga de supervisar la aplicación de este tratado internacional.^[5]

A pesar de su significación universal, lo que aquí se pretende es focalizar el discurso en la particularidad europea derivada de los dos principales tratados internacionales de derechos humanos del Consejo de Europa: la CSE-R y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950) (desde ahora, el CEDH), sin desdeñar por ello la importancia cualitativa —aunque quede fuera del análisis propuesto—, coherente también con el acervo jurídico del Consejo de Europa, del denominado Pilar Europeo de los Derechos Sociales de la Unión Europea, cuyo Plan de Acción destaca la voluntad de contribuir a erradicar la pobreza en Europa en vista de que, antes de la pandemia COVID-19, 91 millones de europeos se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social, el 22,2% de los niños vivían en hogares pobres y 700 mil personas vivían en la calle.^[6]

Tan importante como la disponibilidad de un compromiso jurídico muy concreto como el que se desprende del artículo 30 CSE-R es que el CEDH —órgano de expertos competente para examinar y supervisar el cumplimiento del tratado internacional— ha precisado el alcance de las obligaciones jurídicas estatales derivadas del mismo.

Bajo estos parámetros, de modo resumido, ha considerado lo siguiente:^[7]

- La necesidad de que el Estado Parte realice una aproximación integral y coordinada que combine un marco analítico, un conjunto de prioridades y las medidas correspondientes para prevenir y remover los obstáculos para acceder a los derechos sociales que el propio artículo 30 CSE-R indica, disponiendo, en resumen, de: 1) políticas vinculadas e integradas de manera consistente que demuestren la reducción de la pobreza y la exclusión social; 2) de recursos adecuados; y 3) de mecanismos de monitoreo (por ejemplo, de indicadores).
- El principal indicador para medir la pobreza es el índice de pobreza relativa: el umbral de la pobreza se sitúa por debajo del 60% del salario medio en el Estado.

Es probable que este planteamiento no difiera en exceso del que se desprende de la opinión del

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero tiene la virtud de articularse a partir de una norma jurídica mucho más específica —sin perjuicio de que se exija interrelación con el resto de la CSE-R de modo sistémico e integral— sobre la que se hace pivotar el contenido de las exigencias jurídicas planteadas, al margen del hecho evidente de que tal interpretación se deriva de una disposición convencional de por sí expresiva de un compromiso jurídico particularizado.

Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el CEDH (que básicamente reconoce derechos civiles y políticos) ha abordado de modo directo y sustantivo asuntos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales —en virtud de la relación de efectividad de los problemas relacionados con ellos respecto a los derechos humanos que sí están reconocidos en el Convenio— y ha fijado pautas de mínimos respecto a los compromisos jurídicos frente a la pobreza desde la perspectiva de la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes (artículo 3 CEDH).

Quizá el principal referente de esta jurisprudencia del TEDH sea el *asunto M.S.S. contra Bélgica y Grecia*,^[8] sentencia de la Gran Sala de 21 de enero de 2011, concerniente a un demandante de asilo —un colectivo que el TEDH incluye entre los grupos vulnerables— sometido a una situación de extrema pobreza material, ya que no podía atender por sí mismo sus necesidades básicas de comida e higiene, amén de dormir en la calle, ante la indiferencia omisiva de las autoridades griegas (párrafo 254). El TEDH consideró que ello constituía un trato degradante contrario al artículo 3 CEDH, pues las condiciones de vida en que se encontraba la persona y la incertidumbre prolongada sobre su situación, además de atentar contra su dignidad humana, le generaban miedo, angustia e inferioridad, induciéndole a la desesperación (párrafo 263). De todas formas, la idea de la existencia de un trato contrario al artículo 3 CEDH solo es operativa si los hechos alcanzan un mínimo nivel de gravedad, como se aprecia por ejemplo en dos decisiones de inadmisibilidad del propio TEDH^[9] relativas a demandantes con pensiones de cuantía muy baja pero que, sumadas a los beneficios sociales y a las prestaciones sanitarias proporcionadas por el Estado, podían interpretarse como suficientes para satisfacer las necesidades vitales básicas (alimentación, salud y vivienda) —más aún si se compara con la doctrina relativa al artículo 30 CSE-R—.

La CSE-R y el CEDH, en definitiva, señalan a los Estados Partes el camino de la no indiferencia ante la pobreza y la exclusión social: desde ese piso mínimo (la satisfacción de las necesidades básicas que se vinculan a la dignidad humana) que demanda el TEDH a la exigibilidad de una acción estatal coherente e integrada contemplada expresamente en el artículo 30 CSE-R y clarificada por el CEDH. Y esta vía debe recorrerse con un compromiso activo ante las personas y grupos vulnerables, los más proclives a entrar en el territorio de la pobreza y la exclusión social. Esta aproximación jurídica comporta la necesidad de políticas activas, se articulen como se articulen, para atender a los objetivos de fondo.

La exigibilidad jurídica derivada de la normatividad que caracteriza estos compromisos es un elemento muy positivo: en la medida en que son tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico interno, su contenido es susceptible de ser justiciable —dentro de los parámetros de la extensión y aplicabilidad de la redacción y la interpretación de los textos jurídicos—. Igualmente, esa exigibilidad jurídica tiene también el refuerzo de dos órganos de supervisión internacional, como son el TEDH y el CEDH, sobre todo cuando, como sucede en el

caso español, la entrada en vigor de la CSE-R ha ido acompañada de la aceptación de la competencia del CEDS para conocer de reclamaciones colectivas, como consecuencia de las cuales es posible denunciar el incumplimiento del artículo 30 CSE-R y de instar al Estado a adoptar medidas inmediatas (cabe ver realmente cuál será la reacción estatal en términos de efectividad e inmediatez). Se completa, en consecuencia, un ámbito de exigibilidad jurídica que abarca también las comunicaciones individuales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

De cualquier forma —y quizá ese sea el principal problema— el cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales indicadas depende de la conformación estatal de su política económica y fiscal, y, en términos generales, de la marcha del desempeño económico y de las tendencias del mercado. A este respecto, no hay más que recordar el debate en España sobre la subida del salario mínimo interprofesional, con la voluntad de adecuarlo a lo solicitado por el CEDS y situarlo, por tanto, por encima del umbral de la pobreza.

En apariencia, parece lógico pensar que para aquellos países que no disfrutaban de una larguísima tradición de construcción del Estado del bienestar —y, a lo mejor, incluso para estos—, el reto de responder a sus obligaciones jurídicas internacionales respecto a la pobreza y la exclusión social implica tener dificultades para moverse en la ortodoxia neoliberal que ha venido siendo parte del paradigma dominante de la gobernanza global. Los logros en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social precisan de una voluntad redistributiva y de una recaudación fiscal suficientes, capaces de sobrepasar el peso de una aproximación socioeconómica que coloca los vaivenes del mercado en la centralidad de la lógica decisoria.

Es pertinente señalar cómo, en los últimos años, instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (con ocasión de los retos derivados de la pandemia COVID-19) han intentado suavizar el peso de la ortodoxia, alimentando la idea de que el gasto público para minimizar la pobreza y la exclusión social puede ser no solo preciso, sino también necesario social y políticamente para un crecimiento sano y equilibrado.^[10] Como no se sabe cuánto va a durar esta tendencia (¿la invasión de Ucrania puede alentar el mantenimiento de semejante dirección?), si será un mero oasis temporal o una proyección consolidada, los Estados deberían aprovechar esta ocasión para intentar disponer de suficientes recursos financieros para cumplir con sus compromisos jurídicos internacionales. Otras normas jurídicas internacionales, pero sobre todo el artículo 30 CSE-R, parecen conminar a ello.

[Este artículo se enmarca en el proyecto *Condicionantes regulatorios internacionales y comunitarios en un marco de gobernanza multinivel para la formulación de estrategias contra la pobreza en España* (PID2020-117627GB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades]

1. Rodrigo, Ángel, *El desafío del desarrollo sostenible. Los Principios de Derecho Internacional relativos al desarrollo sostenible*, Marcial Pons, Madrid/Barcelona/Buenos Aires/Sao Paulo, 2015, p. 12. [?](#)
2. European Committee of Social Rights, Decision of Admissibility and Immediate Measures, *Defence for Children International (DCI), European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras and International Movement ATD Fourth World v. Spain*

- , Complaint No. 206/2022, de 19 de octubre de 2022. [?](#)
3. Ibid., párrafo 10. [?](#)
 4. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observación General n.º 12 (20º período de sesiones, 1999). El derecho a una alimentación adecuada (art. 11)*, Doc. ONU E/C.12/1999/5, p. 7, párrafo 23. [?](#)
 5. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *La promesa de no dejar a nadie atrás: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, Doc. ONU E/C.12/2019/1, p. 1, párrafo 1. [?](#)
 6. European Commission, *The European Pillar of Social Rights Action Plan*, p. 9, disponible en: <https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/downloads/KE0921008ENN.pdf>. [?](#)
 7. European Committee of Social Rights, *Digest of the case law of the European Committee of Social Rights, December 2018*, Council of Europe, Strasbourg, 2019, pp. 221-224 (*Appendix*, pp. 295-300). [?](#)
 8. European Court of Human Rights, *M.S.S. v. Belgium and Greece* [GC], nº. 30696/09, ECHR 2011. [?](#)
 9. European Court of Human Rights, *Aleksandra Larioshina v. Russia* (dec.), nº 56869/00, 23 April 2002; *Dmitriyevna Budina v. Russia* (dec.), nº 45603/05, 18 June 2009. [?](#)
 10. Fondo Monetario Internacional, *Forjar un contrato social más fuerte: El enfoque del FMI respecto al gasto social*, por Christine Lagarde, Directora Gerente, Ginebra, 13 de junio de 2019: <https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/06/14/sp061419-md-social-spending>. [?](#)

Miguel Guillén Burguillos

Los «votos perdidos» de la izquierda alternativa en nuestro sistema electoral

Hay quien habla de la posibilidad de que el PSOE y el proyecto que teóricamente liderará Yolanda Díaz (¿Sumar?) en las próximas elecciones generales compartan candidaturas en determinadas circunscripciones provinciales, seguramente pensando en aquellas en que la izquierda alternativa lo tiene prácticamente imposible para alcanzar representación y sus votos se acaban “perdiendo”. La hipótesis sería que, si estos votos de Sumar que no tendrán ninguna utilidad se sumasen a los del PSOE, se podría ayudar a que “la izquierda” obtuviese un mayor número de escaños en el Congreso, escaños que a su vez no obtendrían las derechas. Hay incluso quien desde determinados sectores de la izquierda ha llegado a difundir información de dudoso origen según la cual Díaz estaría valorando unirse en coalición al PSOE para apelar al voto útil contra la derecha y la ultraderecha. Incluso se ha llegado a decir, con mucha mala intención, que la dirigente gallega es la “candidata de Felipe González”. Más allá del contaminante “fuego amigo” y el exasperante ruido existente en el seno de la izquierda alternativa, para valorar la conveniencia política (sobre todo para Sumar) de este eventual pacto con el PSOE es interesante repasar la historia de los “votos perdidos” por esta izquierda alternativa desde las elecciones generales de 1977.

Como se sabe, los electores votamos a los candidatos de nuestra provincia, a través de la papeleta que introducimos en la urna de las elecciones al Congreso de los Diputados, con las listas bloqueadas y cerradas que presentan los diferentes partidos o coaliciones. Y aquí, como también es ampliamente conocido, el reparto de escaños que se asigna a cada circunscripción provincial no es proporcional a su población, lo que provoca que el voto de todos los españoles “no valga lo mismo”. Y no, la culpa no es de la tan manoseada Ley D’Hondt. Para que se entienda: en las últimas elecciones al Congreso (noviembre de 2019), cada diputado que enviaba Madrid a la cámara baja (37 en total) “costaba” unos 95.000 votos, mientras que cada diputado de Soria (2) costaba unos 23.000. No es el objetivo de este artículo abordar esta cuestión, pero a nadie se le escapa que existen determinados intereses políticos tras estas exageradas diferencias entre la representación que tienen unas personas en el Congreso respecto a otras en función de la provincia en que están censadas. Para profundizar en la cuestión, creo que son interesantes los artículos que ha publicado [Jorge Urdániz en Ctxt](#), así como sus propuestas concretas para un sistema electoral igualitario y que tuviese en cuenta también el fenómeno de la “España vaciada”, que sin duda nos ayudarían a acercarnos a aquel anhelo radicalmente democrático que hoy en día no se cumple en España, y que reza así: “Una persona, un voto”.

Desde la recuperación de la democracia, la izquierda alternativa ha sufrido de forma especialmente notable el fenómeno de los “votos perdidos”, es decir, aquellos votos que no tienen ninguna traducción en escaños, porque se emiten en provincias donde no se obtiene ningún tipo de representación. En este artículo analizo el espacio político que primero representó el PCE-PSUC, luego Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, y más recientemente Podemos y Unidas Podemos, teniendo en cuenta también aquellas candidaturas que, a pesar de no formar parte de la misma coalición en los últimos años, sí podrían hacerlo en los próximos comicios, bajo

el paraguas de Sumar y el liderazgo de Yolanda Díaz.

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución, en número de votos y escaños, de los resultados electorales en las elecciones al Congreso de lo que podríamos denominar “izquierda alternativa”:

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (<https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/area-de-descargas/>)

En porcentaje de voto, la evolución ha sido la siguiente:

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (<https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/area-de-descargas/>)

Si nos fijamos en la evolución del número de escaños, este es el gráfico obtenido:

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (<https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/area-de-descargas/>)

Pero lo que interesa mostrar en este artículo es qué ha ocurrido con los llamados “votos perdidos” en este espacio político de la izquierda alternativa. Los datos obtenidos son estos:

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (<https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/area-de-descargas/>)

Como se puede observar, en todas las elecciones al Congreso de los Diputados son muchos los miles de votos que el espacio político analizado ha “perdido”. En las cinco primeras elecciones, alrededor de medio millón de votantes del PCE o Izquierda Unida veían como su voto no servía para enviar un diputado al Congreso, y que éste se “perdía”. Entre 1993 y 2011, Izquierda Unida (Iniciativa per Catalunya en las cuatro provincias catalanas, a excepción del año 2000, en que ICV e EUiA iban por separado), el número de “votos perdidos” se situaba entre los 650.000 y los casi 800.000, una auténtica sangría, ya que en no pocas provincias era materialmente imposible que una tercera candidatura (en este caso IU) pudiese conseguir diputados que estaban “reservados” al PSOE y el PP.

La tendencia se rompe en 2015, con la aparición de Podemos y los excelentes resultados que la izquierda alternativa alcanzó en aquellos comicios, en los que Podemos e Izquierda Unida concurrían por separado. Aquí Podemos sí que consiguió alcanzar representación en provincias donde ni el PCE ni IU lo consiguieron nunca, y eso hizo que se consiguiera un resultado excepcional. Aquí, cabe resaltar el digno resultado de la Izquierda Unida de Alberto Garzón, que a pesar de conseguir solamente dos diputados por la provincia de Madrid (caso aparte merecen Cataluña y Galicia, donde Podemos e IU sí se presentaron en candidaturas unitarias), “perdió” muchos miles de votos en todas aquellas provincias donde no se alcanzó ningún escaño, como había pasado tradicionalmente. La “repetición electoral” de 2016, ahora sí, con Podemos e Izquierda Unida bajo una única candidatura, Unidos Podemos, hizo pensar en el “sorpasso” al PSOE, pero como sabemos, éste no se produjo y el espacio político obtuvo un millón de votos menos que pocos meses antes. Al respecto, publiqué en [un artículo en julio de 2017 en el diario Público](#) en el que efectuaba un breve análisis de esta cuestión. Lo que sí debo resaltar aquí es que la “unidad” entre Podemos e Izquierda Unida sí que tuvo un claro efecto sobre los llamados

“votos perdidos”: mientras que en 2015 éstos fueron más de un millón, el llamado “Pacto de los Botellines” lo redujo hasta los 258.456 (solamente un 5% de los votos obtenidos, cuando en los años 2004 y 2008 se alcanzaron porcentajes por encima del 60%, una auténtica barbaridad). En las dos convocatorias de 2019, el porcentaje de voto obtenido por Unidas Podemos bajó notablemente respecto de los resultados de 2015 y 2016, si bien el número de “votos perdidos” se situó entre los 657.067 y los 744.403, cifras nada desdeñables.

Para ir finalizando, es interesante echar un vistazo al siguiente gráfico, en el que aparece la evolución del porcentaje de “voto perdido” respecto del total de votos obtenidos por la izquierda alternativa en las elecciones al Congreso de los Diputados:

Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior (<https://infoelectoral.interior.gob.es/opencms/es/elecciones-celebradas/area-de-descargas/>)

Como se puede observar, los años en que existió una mayor proporción de “voto perdido” son aquellos en que el espacio político de la izquierda alternativa obtuvo unos resultados más modestos, y, por tanto, más dificultades tuvo para obtener representación en forma de escaños en la mayoría de las provincias, más allá de Madrid, Barcelona y otras con cierta tradición de voto. Los buenos resultados de 2015 y 2016, y singularmente la “unidad” en estos últimos comicios, hizo que se “perdieran” menos votos y fueran menos los electores de izquierdas que no estuvieran representados en el Congreso. La solución, si se me permite una breve y concisa reflexión, quizá no consista en sumar esfuerzos con el PSOE, que representa un espacio político ciertamente diferenciado y que puede crear rechazo en no pocos votantes potenciales, sino que pasará por conseguir presentar candidaturas unitarias de la izquierda alternativa en el mayor número de provincias posibles, con vocación mayoritaria y no como complemento o muleta de ninguna otra candidatura. Y, a poder ser, generando el menor ruido posible de cara al elector, que poco o nada interesado está en las tradicionales e incesantes peleas cainitas que se producen en la izquierda. Porque por muy difícil que sea para determinadas personas, el valor de lo colectivo, los intereses de las clases populares, deberían prevalecer sobre los personalismos, los egos y los intereses particulares más mundanos.

Joan M. Girona

El futuro es aterrador

Un titular que parece una exageración. Desgraciadamente no lo es. Ha empezado un curso académico discutiendo sobre currículos y calendario, temas importantes, pero que son *peccata minuta* frente a la situación que estamos viviendo; de la que todavía no somos suficientemente conscientes, no estamos (o no queremos estar) suficientemente convencidos para tomar decisiones y actuar en consecuencia. Nos da miedo aceptar la realidad del peligro.

El 75% de los niños, el 61% de los jóvenes (entre 15-25 años) consideran que el futuro es aterrador, hablando del clima. Se sienten abandonados y traicionados.^[1] Las criaturas están tocadas, se ve en su comportamiento. No podemos minusvalorar lo que están viviendo. Habrá quien pondrá en cuestión estas afirmaciones; todas las encuestas, todos los estudios, tienen su componente subjetivo, la ideología de quien los hace o los financia influye en ellos. Cierto, pero ante el cambio climático ya hay suficientes evidencias para estar convencidos. Sin ir más lejos, los desastres ocurridos en distintas partes del mundo en los últimos meses son síntomas muy claros.^[2] Otra cosa es que **ante la gravedad queramos cerrar los ojos, miremos a otro lado o no podamos aceptarlo por miedo o angustia.**

En los centros de enseñanza deberíamos ser consecuentes con lo que está pasando y que continuará pasando si no se producen cambios significativos; deberíamos pensar y reflexionar sobre qué deberíamos hacer y cómo. **Lo que llamamos el compromiso ético del profesorado debe incluir esta perspectiva básica.** No sólo nos va en ello el futuro, nos va la vida. Si callamos seremos cómplices.

Parte del alumnado, parte de la generación joven, empezó a organizarse en varios países, constituyeron el movimiento Friday for Future; se reunían los viernes para promover acciones en defensa del clima. Continúan en activo, están realizando distintas actuaciones. **Acciones de desobediencia civil** aunque sólo sea para llamar la atención, lanzar líquidos a cuadros de pintura (sin dañar la obra) o a figuras de personas, por ejemplo. Es necesario llamar la atención porque el problema es gravísimo.

Los adultos, sobre todo los que nos dedicamos a la enseñanza, en todas las etapas, no les podemos dejarlos solos o solas. Debemos ayudarles a que utilicen sus conocimientos, a que pasen a la acción para asegurar la sostenibilidad del planeta y de la humanidad. Cuando hablamos de “transformación educativa” debemos ser conscientes de que lo que está en juego; y que es urgente cómo desarrollamos en los centros escolares una educación “transformadora del mundo”, que anime a que los jóvenes sean actores de sus propias vidas.^[3]

Paulo Freire escribía que no debe esconderse la realidad a los niños; debemos ayudarles a ser conscientes de lo que ocurre y, siguiendo la metodología del Aprendizaje Servicio, llevar a la práctica actuaciones que favorezcan a la comunidad. Cuando yo era joven decíamos *piensa globalmente y actúa localmente*. Hoy deberíamos actuar a la vez en los dos niveles. Si esperamos demasiado llegará el colapso y sufriremos (o sufrirán) mucho. Y, como siempre, quien está viviendo peor actualmente será también quien sufrirá más el caos económico, social, sanitario... Nuestra labor, la de la generación adulta, no es sencilla pero siempre ayuda recordar

la frase de **Galeano**: *las utopías sirven para avanzar*. Para avanzar en el camino correcto y evitar errores anteriores.

Si estamos convencidos y queremos actuar, es bueno no culpabilizarnos a nosotros mismos: no somos los principales responsables. Quieren hacernos creer que el problema sólo es nuestro: **el problema es del sistema**. No debemos aceptar el juego del poder que quiere hacernos sentir culpables individualmente de lo que está pasando. Se nos pide reciclar, correcto. Pero, ¿por qué no empiezan a reciclar las grandes empresas? Quien más contamina es quien más debe cambiar: ¿quién produce más CO₂?, ¿quién fabrica objetos poco útiles y con fecha de caducidad?, ¿quién amontona toneladas de residuos?

Debemos educar y educarnos para defender el medio ambiente y asegurar el futuro de las nuevas generaciones, para que no vivan el infierno que se prevé si todo sigue igual. **Una educación que debe incluir exigencias a los responsables políticos**, a aquellos y aquellas que hemos votado. Exigirles que planten cara a los que han provocado y siguen provocando el desastre que nos tragará, que no se dejen comprar por los poderosos y hagan cumplir leyes y normativas que eviten llegar al punto de no retorno, como explica **Antonio Turiel** en sus escritos y en sus intervenciones. No se cansa de repetirlo.

El modo de producción capitalista no se acabará por las contradicciones que genera. Se está adaptando a los cambios y la contestación que se origina es débil frente al desafío que representa. Criticamos, nos quejamos, hacemos manifestaciones, escribimos, colgamos en las redes, celebramos el día internacional del cambio climático... pero no conseguimos que se produzcan cambios reales, que se invierta el proceso que conduce a toda la humanidad al precipicio, que haya un cambio de sistema económico por otro más justo, equitativo y respetuoso con el planeta. Es cierto, como explicó Marx, que hay lucha de clases sociales, pero la está ganando la clase capitalista.

La realidad es un conjunto inarmónico; está interrelacionada. En un artículo anterior^[4] hablábamos de cómo la situación socioeconómica determina en gran parte los resultados académicos. Y esto nos hacía pedir actuaciones eficaces contra la pobreza, conseguir la **pobreza cero** como objetivo. Pero constatando el deterioro del planeta Tierra y conociendo a quien lo provoca, deberíamos luchar por otro objetivo que podríamos llamar **riqueza cero**. El agua necesaria para abastecer un campo de golf de dieciocho hoyos durante un año equivale al consumo doméstico anual de una población de unos 10.000 habitantes.^[5] Los destrozos y contaminaciones son provocados por quienes tienen el poder económico, por quienes tienen cantidades de dinero para malgastar, que son por tanto quienes más responsabilidad acumulan en la destrucción que nos afecta.

Por todo ello es necesario disminuir las enormes riquezas que no ayudan a nadie ni a la naturaleza. *Crece por crecer es la filosofía de un tumor*, ha escrito el propio Turiel. **Hay que decrecer, disminuir el gasto energético**, buscar y probar maneras diferentes de vivir, gastando menos, valorando las relaciones con las demás personas, con el entorno natural, con los seres vivos y con todo el planeta Tierra. Seguramente **ser** es más importante que **tener**. Trabajar lo mínimo necesario para vivir nos ayudaría. El sistema, por ahora, nos impele a vivir para trabajar, a tener más y más para que los de arriba ganen mucho, como está ocurriendo en esta crisis. Un sistema que provoca y provocará enormes desigualdades, la causa de la mayoría de los

problemas que nos afectan. El camino es difícil, pero no imposible. Si no lo intentamos seguro que no lo conseguiremos.

Una buena educación desde los centros escolares y desde otras instancias educativas nos llevará al buen camino. La sociedad actual valora a las personas competitivas (no confundir con competentes), que ganan dinero y consumen mucho. Podríamos contribuir a revertir esta valoración y educar al alumnado con conciencia ecológica, capacidad crítica y con ganas de cambiar. **Un cambio que implica a toda la humanidad, a todas las personas que compartimos el único planeta que tenemos. Nos salvaremos colaborando, no compitiendo.**

[Joan M. Girona es maestro y psicopedagogo]

1. <https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220923/caroline-hickman-psicoterapeuta-clima-entrevista-ecoansiedad-75801825> ?
2. https://www.ara.cat/internacional/crisi-climatica-matant-mes-morts-mes-fam-mes-infeccions-culpa-l-escalfament-global_1_4529418.html ?
3. https://es.ara.cat/opinion/educar-emergencia-climatica-anna-jolonch_129_4084953.html ?
4. <https://diarieducacio.cat/la-crisi-que-patim-com-ensenyar-i-aprendre/> ?
5. <https://directa.cat/camps-de-golf-en-temps-de-sequera/> ?

Albert Recio Andreu

De líderes, procesos y confluencias

I

En la mayoría de los procesos sociales, los líderes son necesarios. Pero demasiadas veces son también un problema. La relevancia de personas que empujen, coordinen, den visibilidad, promuevan ideas, es innegable. Aunque el liderazgo incluye una variedad de características que difícilmente se encuentran en una sola persona. Más que un liderazgo individual, lo que se requiere es un colectivo de gente diversa, con capacidades complementarias, que trabajen para un proyecto. Pero la larga tradición de sociedades jerárquicas, en las que el poder se concentra en una figura única, sean reyes, sumos sacerdotes, capitanes generales o CEOs empresariales, ha calado en la sociedad. Y seguimos pensando las organizaciones con un vértice personal. El modelo del partido comunista clásico con un secretario general único es una muestra de la pervivencia de esta forma de pensar que resulta realmente perniciosa. Un personaje al que se le suponía dotado de grandes capacidades en la producción intelectual, la organización y la acción política. Y aunque la figura y el modelo están en claro retroceso, está lejos de desaparecer. Basta con ver las imágenes del Congreso del Partido Comunista Chino o figuras como Elon Musk para tomar conciencia de su pervivencia.

En el mundo occidental la crisis de los partidos con gran disciplina bajo liderazgo único ha venido a contraponerse con la brutal personalización y creación de ídolos que emana de todo el sistema mediático. En la mayor parte de actividades con proyección pública proliferan este tipo de personajes aupados por una machacona propaganda. Incluso en sectores más alejados del público, como el de la creación científica, el sistema de rankings, los procesos competitivos y los premios tienden a promover un cierto culto al genio. La izquierda ni ha sabido sacarse del todo el viejo modelo jerárquico ni está inmunizada ante los peligros de la cultura de masas moderna. Quizás por ello la nueva izquierda ha basado su potencial en explotar el éxito de personas carismáticas. El salto electoral de la izquierda en la última década se fundamentó en parte en figuras como Pablo Iglesias, Ada Colau, Manuela Carmena y demás. Personas que habían alcanzado una notoria popularidad y que sirvieron para encarnar una fase de radicalización social. Que este tipo de liderazgos funcionan electoralmente es indudable. Que no dejan de ser problemáticos también. Por varias razones:

Con independencia de la madurez personal y política de cada una de estas personalidades, el modelo tiene importantes deficiencias. En primer lugar, el modelo de liderazgo personalizado puede generar distorsiones organizativas de diverso tipo. Desde la concentración de funciones en las personas con mayor proximidad o confianza con el líder, hasta los resquemores que genera entre los menos afines, incluyendo la adaptación de toda la estructura en función del liderazgo. En segundo lugar, deja gran parte del proyecto político abierto a las críticas personalizadas sobre el liderazgo. Y sabemos por experiencia que, si en algo son especialistas los medios reaccionarios, es en generar bulos, maledicencias y presiones de todo tipo para destrozar a quien no les gusta. En tercer lugar, toda la actividad organizativa puede quedar expuesta a las peleas de egos, cuando surgen diferencias y aparecen figuras alternativas. En cuarto lugar, el modelo tiende a propiciar que parte de las bases sociales se comporte más como un club de fans

acríticos que como actores responsables y críticos que trabajan para un proyecto. Y quinto, aunque todos estos problemas no aparezcan, siempre queda la cuestión del relevo cuando la persona que lidera agota su ciclo vital. Muchos de estos problemas son visibles cuando se analiza lo ocurrido en el reciente ciclo político. Contar con buenos líderes y lideresas ha favorecido el ascenso electoral de la izquierda, pero su excesiva dependencia de los mismos hace peligrar su continuidad. Ya ocurrió en Madrid y puede ser aún más grave si no se resuelve la cuestión entre Sumar y Podemos.

No existe una receta fácil que resuelva estos dilemas. La extrema focalización en los liderazgos viene en gran parte impuesta por el entorno exterior y es difícil de eludir. La única posibilidad de amortiguarla es tomando conciencia de sus problemas y construyendo modelos organizativos que los minimicen. Lo óptimo es sin duda una organización con un liderazgo compartido, formado por personas con diferentes capacidades, con buenas reglas de juego y que reconozca que las disidencias puntuales son inevitables. Podría pensarse incluso en la creación de algún tipo de organismo diseñado para generar procesos de mediación cuando surgen discrepancias fuertes entre los líderes. Pienso en un ente elegido con un amplio consenso, formado por personas que no intervienen en la dirección y que sólo actúan cuando hay conflictos (unas comisiones de conflictos que actúen más como mediadoras que como jueces que dan la razón a uno u a otro). Y sin duda un diseño conjunto de las organizaciones orientado a generar una militancia responsable, tolerante y participativa. En el último ciclo político se ha perdido una oportunidad para construir un modelo de organización de este tipo. Y por esto es ahora más urgente pensar cómo se puede reconducir la situación. Empezando por evitar este duelo de pistoleros que alguien atiza entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz y que, si no se reconduce, puede llevar a otro desastre electoral y político.

II

Estamos ante el enésimo intento de construir un proyecto político de la izquierda alternativa. Una necesidad que es en parte el producto de la velocidad y la obsolescencia que afectan a todos los procesos políticos, especialmente los que se plantean cambios sociales profundos. De hecho, incluso los dos grandes partidos (PSOE y PP) consolidados en un marco institucional que promueve un bipartidismo estático (con la excepción de Catalunya y Euskadi, donde fue imposible obviar el papel del nacionalismo local) han experimentado deterioros y convulsiones. La izquierda transformadora ya ha experimentado varias veces un ciclo que obliga a la renovación. Izquierda Unida se formó cuando era visible la crisis del PCE (y la desaparición de todas las organizaciones a su izquierda), Podemos se expandió cuando el ciclo de IU parecía agotado y tuvo su mayor empuje con las confluencias, las mareas. Ahora no volvemos a estar en la casilla de salida, pero es obvio que falta un nuevo empuje. Y sin duda lo que menos se necesita es que exista mucho ruido a su alrededor y lo que más, que sea percibido como una suma de esfuerzos para reforzar lo hecho.

Hay en la mayoría de los procesos de la izquierda una hipótesis de partida que considero errónea. Se trata del convencimiento de que existe una enorme masa social favorable a un proyecto más radical que sólo requiere de un buen proyecto organizativo para darle voz. Sin duda muchas de las propuestas de la izquierda apuntan a aspiraciones sociales de amplio recorrido. Pero pensar que son mayoritarias en los términos en los que se plantean supone ignorar tanto todo el proceso histórico anterior como los datos que reflejan las encuestas, los estudios

sociológicos y la propia experiencia electoral reciente. Las propuestas de la izquierda sólo llegan a un sector minoritario, aunque no minúsculo si se lo compara con la experiencia de otros países, de la sociedad. Y en lo primero que debe pensar un proyecto es consolidar esta base social. Más o menos como los equipos deportivos que saben que el campeonato está lejos de sus posibilidades y consiguen un buen resultado a partir de optimizar sus capacidades. Cuarenta años de franquismo y otros tantos de hegemonía neoliberal han modelado nuestra sociedad y hacen difícil pensar en una “revuelta” social a corto plazo. Aunque muchos de los problemas son acuciantes y requieren respuesta a corto plazo, no hay suficiente fuerza social para todos los cambios necesarios. Por esto, en el plano político, más que esperar giros rápidos (en parte el ciclo Podemos se diluyó cuando fue evidente que, aun llegando a entrar en áreas de poder, las posibilidades de transformaciones profundas eran imposibles) lo que conviene es contar con una base social que permita la persistencia de las transformaciones. Porque si algo puede mostrar esta izquierda es que su presencia en el Gobierno y en la gestión municipal ha mejorado derechos sociales y ha impulsado transformaciones urbanas. Y que si pierde estos espacios hay bastantes posibilidades de que todo esto se pierda. Mejor empezar por realismo que creando unas expectativas excesivas que nunca se cumplen.

III

En el debate actual es también recurrente la crítica de que un proceso debería empezar por una confluencia desde abajo, de movimientos sociales de gente activa. Sin duda, es un planteamiento respetable que tiene como objetivo implicar a mucha gente, hacerla partícipe y generar un proceso inclusivo. Pero estimo que su punto de partida es más un buen deseo que una alternativa realista.

No sólo porque la realidad social venga dominada por un bajo nivel de participación social en la esfera colectiva. También porque el mismo espacio de los movimientos sociales, de las entidades, colectivos y organizaciones sociales está tanto o más fraccionado que la izquierda política. Proliferan las organizaciones de un solo objetivo, a menudo más interesadas en competir entre sí que en generar una dinámica común. Y donde a menudo se reproducen los mismos problemas de liderazgo que en la esfera de la política institucional. Cada organización tiende a pensar los objetivos en función de su propio proyecto, lo que suele ir en detrimento de su implantación territorial y de la densidad social de sus proyectos. Algo que puede constatarse fácilmente en campos como los de la lucha por el derecho a la vivienda, la sanidad, la lucha contra la pobreza... Conseguir tejer propuestas comunes y que estas se consoliden exige una enorme tenacidad, voluntad colectiva y paciencia, que no suelen proliferar en el mundo de los movimientos. En cierta medida parece, más bien, que se reproducen los vicios de la esfera institucional que muchas veces se critica.

Hay, además, un elemento añadido a esta dificultad. Muchos de los proyectos de crear una gran coalición transformadora se basan en ligar organizaciones políticas con organizaciones sociales. En cierta medida el viejo modelo de la izquierda, donde el partido tenía un sindicato afín y una red propia de entidades sociales (Casas del Pueblo, ateneos...). Hoy hay una enorme reticencia de los movimientos sociales a encuadrarse en un proyecto político. Y en este caso mucho menos por los vicios de liderazgo que por propia necesidad. Un movimiento, o una entidad, implicados en una marca electoral, quedan condicionados en su actividad cotidiana. Siempre serán vistos como un instrumento de una fuerza partidista. Lo descubrieron hace tiempo los sindicatos y las

asociaciones vecinales, y lo sabe cualquiera que actúe en esta esfera semipública, a la vez social e institucional, en la que intervienen la mayoría de las iniciativas ciudadanas. Un proyecto transformador debe tener una relación fluida con los movimientos, fomentar el activismo social de sus miembros, escuchar sus propuestas. Pero requiere hacerlo reconociendo espacios de autonomía y diferenciación para prevenir los conflictos entre ambas esferas, porque los ritmos y los condicionantes cambian.

IV

El objetivo de esta nota es, a pesar de todo, propositivo, tratando de despejar los barrizales en los que nos solemos empantanar. Ante una crisis social y ecológica de enorme profundidad, ante la amenaza evidente de una derecha reaccionaria que trata de imponer unas políticas autoritarias y generadores de injusticias y desigualdades, es más necesario que nunca el impulso de un proyecto ecosocialista que minimice desastres e impulse transformaciones. Y creo que la experiencia reciente ha tenido muchas cosas positivas, a pesar de sus limitaciones. Por ello justamente considero que hemos de ser realistas en la construcción de políticas y evitar los males autoinfligidos.

Me parece obvio que lo más perentorio debería ser evitar el choque de liderazgos y, en ausencia del tipo de instituciones mediadoras que he intentado esbozar, que un pequeño grupo de gente con un cierto prestigio político y cierta pluralidad hiciera este esfuerzo de mediación. En segundo lugar, creo que no hay tiempo para realizar un amplio proyecto de confluencia, escucha y debate. Me consta que de momento el proyecto Sumar está desarrollando un proceso de elaboración de ideas con mucha gente participando. Se corre el riesgo de que al final salga un programa más o menos convencional. Habría cuando menos de generar debates públicos, abiertos, en los que se plantearan y testaran ideas. En los que se pusieran de manifiesto puntos de acuerdo y también divergencias, con las que será inevitable transitar. En fin, donde se activara a la militancia potencial. Esto afecta también a los movimientos sociales, a su necesidad de repensarse, de romper las dinámicas centradas en la propia organización para tratar de generar procesos y formas organizativas que multipliquen la eficacia de tanto esfuerzo activista.

Joan Benach

Ideas para orientar una agenda política en la próxima década

El propósito de este breve texto es ambicioso y modesto al mismo tiempo. Sobre lo primero, plantea algunas ideas sobre el **porqué** de la situación actual, pero sobre todo sobre **el qué y el cómo** hacer para tratar de salir de una vía infernal, a la cual las tendencias sistémicas (ecológicas, políticas, económicas, sanitarias y culturales) abocan al país (y a la humanidad), y con ello tratar de evitar la barbarie ecogenocida planetaria a la que muchos procesos, indicadores y síntomas nos indican estamos caminando aceleradamente. Sobre lo segundo, decir que este escrito trata modestamente de indicar **algunas posibles claves** para pensar en afrontar los mayúsculos retos que tenemos por delante y ayudar a salir de la “desorientación existencial” en la que en mi opinión se hallan muchas —si no todas— izquierdas. Eso quiere decir que, dada la complejidad del tema a tratar y las limitaciones de espacio, las ideas se presentan en forma de **esquema simple, sin ningún desarrollo**, lo cual exigiría disponer de mucho más tiempo de reflexión, así como realizar un imprescindible debate colectivo democrático de tipo transdisciplinar, eco-sistémico e histórico-político.

Sobre las tendencias actuales

El mundo se ve hoy trastornado por **una crisis sistémica con múltiples riesgos entrelazados**, donde coexisten la intolerable desigualdad social, la amenazadora crisis climática y ecológica, el cruento impacto de guerras y el peligro nuclear, incesantes agresiones a la democracia y el ascenso del neofascismo, una batalla geopolítica entre EE. UU. y China por el dominio mundial, un sinfín de problemas globales de salud pública entre los que se encuentran diversas pandemias y los trastornos mentales, y la profunda precariedad laboral y social bajo la que trabaja y sobrevive la mayor parte de la humanidad. **La oligarquización del poder económico y político, la debilidad de las izquierdas y los sindicatos, junto a una “mutación” neoliberal antropológica**, han creado una encrucijada nefasta, pero todo indica que con **las inercias económicas, ecológicas, políticas y culturales actuales la prospectiva pueda ser mucho peor**. La mirada mediática de una guerra “promovida” como la de Ucrania, la “disciplinada” visión de los mensajes difundidos por los grandes medios de comunicación, la capitulación en toda regla realizada por las elites europeas, de facto ya un protectorado de la OTAN y los Estados Unidos (un “nuevo Puerto Rico”, ha señalado Boaventura de Sousa Santos), el avance de una internacional neofascista con amplios recursos y estrategias, y una crisis ecológica y climática con consecuencias para la humanidad casi irreparables, son muy malos presagios. Los países europeos se ven atrapados por **un enorme endeudamiento y una elevada inflación** que, más allá de la guerra, está causada por una crisis energética estructural. En la UE neoliberal, todo indica que unas elites nada o poco democráticas (BCE, Comisión, gobierno alemán...) han elegido el camino a seguir: subir los tipos de interés, derrumbar la deuda pública, negar una negociación de rentas, producir “rescates”, y desencadenar una recesión económica y social. De momento, en España **vemos aumentar los excedentes empresariales** (más de 200.000 millones entre 2016-2021) y **devaluar las rentas salariales** de las clases populares y medias con una gran devaluación salarial (casi el 13% respecto a 2008), muy en relación con los ataques

patronales a la negociación colectiva (y cambios en la estructura ocupacional) y la debilidad sindical. En cualquier caso, **una comprensión más completa de la realidad y de las tendencias actuales** requiere **disponer de una mirada integral e integrada (sistémico-histórica)** y, sobre todo, de una **reflexión, análisis y debates que permitan traducir ese conocimiento en acción estratégica.**

Tres valoraciones y dos advertencias

La primera valoración es que, mientras que en las últimas décadas el neoliberalismo ha avanzado en reducir la democracia económica, mercantilizar la vida, y limitar los derechos sociales y económicos, **en su fase actual, el capitalismo neoliberal necesita o “requiere” suprimir o “disolver” la democracia realmente existente**, ya sea aumentando su dominio y represión (leyes, policía, explotación laboral, deudas, etc.), o bien “narcotizando” las mentes (*fake news*, entretenimiento, distracción, adicciones, etc.). **Quieren acabar con la democracia, o quizás, aún peor, crear “una democracia neoliberal” dirigida por neofascistas antidemócratas** (Trump o Bolsonaro son dos buenos ejemplos) para dirigir la economía, el poder judicial, el entramado mediático, las redes (Musk es un ejemplo), etc. Por su parte, las mentes de las elites, fuerzas reaccionarias y capas más privilegiadas del país (y del planeta), están **contaminadas de ideología capitalista neoliberal heteropatriarcal, tecnolatría, y de narcisismo y sociopatía.** Eso quiere decir que, con o sin plena consciencia de ello, tratarán por todos los medios de avanzar en una **agenda de darwinismo social neofascista** que, bajo un **decrecimiento material desigual e injusto, vigile, seleccione o extermine con indiferencia a los “subhumanos”** (por usar la expresión de Frantz Fanon), seres superfluos y prescindibles. Eso quiere decir que el sistema de dominio y opresión actual podría mutar en un poscapitalismo neofeudal/neoesclavista de tipo neocolonial y neofascista que, cambiando de rostro (quizás incluso legitimada bajo una supuesta “democracia”) mantendría el dominio, subordinación, explotación y discriminación actuales. Si esa hipótesis es cierta, hay que **tomar más en serio que nunca al adversario** y aprender a desarrollar todos los ámbitos y medios necesarios para **poder defenderse y oponerse a un programa de exterminio selectivo.** Y para ello, **no queda otra opción** que, como enseña la historia, **“crear miedo” en el adversario.**

La segunda valoración es que gran parte de la población se encuentra en una situación de **anestesia generalizada**, donde predomina el miedo sobre la esperanza, la alienación sobre la conciencia, la aceptación sobre la crítica, la precariedad sobre la organización. Bien es verdad que es importante **valorar y apreciar un sinnúmero de valientes y necesarias iniciativas ciudadanas**, con acciones para educar y construir un mundo diferente y alternativo, pero éstas a menudo tienen un carácter defensivo, reactivo y minoritario. La degradación político-cultural actual tiene muchas causas. Una de ellas es la **“derrota de la subjetividad”**, donde las izquierdas no han sabido mirar ni afrontar adecuadamente las grandes tendencias globales. Otra es la **masiva precariedad laboral y social** que sufre una población “empastillada” y “empantallada”, que trata de sobrellevar como puede su sufrimiento material y psíquico. Una tercera es la **despolitización generada por los medios de comunicación y redes sociales de masas** que, con informaciones falseadas y sesgadas, promueven una cultura **competitiva, egocéntrica y anómica.** Esa situación incluye factores como el adanismo histórico, la huida hacia un hedonismo perpetuo, aceptar el “robo de la atención” de pantallas algoritmizadas, el consumo masivo de pasatiempos y “vías de escape” psicofarmacológicas, el relativismo de la ignorancia y la aceptación de la falsedad, la profusión de un narcisismo ególatra cada vez más

maligno, la inconsciente sumisión anómica “voluntaria”, la pasividad desesperanzada, o la negación de que somos naturaleza y de la mortal condición humana, por sólo apuntar algunos ejemplos.

La tercera valoración es que hoy en su conjunto las fuerzas de izquierdas, aún y disponiendo de propuestas éticas y modelos diagnósticos insuficientes, pero más o menos adecuados, son muy frágiles e **incapaces de construir las bases sociopolíticas necesarias para disponer de un proyecto alternativo serio** que pueda hacer frente a una realidad compleja, incierta y muy difícil de cambiar. Además, las fuerzas políticas están **fragmentadas, insuficientemente concienciadas y poco o mal preparadas y organizadas** para hacer frente a la acción colectiva necesaria para hacer frente a los retos existenciales que afronta la humanidad.

En relación con la modestia del texto, dos **advertencias**. La primera es que de ser ciertas las tendencias y las valoraciones anteriores se necesita construir un **proyecto de reorganización coherente que sea enormemente generoso y sólido**, a la vez que **persistente y muy bien diseñado**, pero flexible y adaptable en todo lo que sea necesario. Y la segunda es que este texto describe de forma muy superficial el **qué hacer** (políticas específicas, líneas programáticas), algo siempre imprescindible, pero, sobre todo, pone el acento en las bases necesarias para el **cómo hacerlo**, un apartado que con demasiada frecuencia es relegado en muchos análisis políticos. En ese sentido, se comentan de forma muy sucinta y humilde algunas de las posibles **bases estratégicas esenciales** que, en mi opinión habría que desarrollar, las cuales, dadas las grandes incertidumbres existentes, requerirán de mucha experimentación (ensayo y error) y capacidad de adaptación ante la prospectiva de escenarios cambiantes.

Algunas políticas específicas

Habitualmente, las izquierdas se concentran en realizar **propuestas, necesarias y urgentes, pero que conviene valorar, desarrollar e implementar de la forma más adecuada**. Aunque muchos temas están interrelacionados, **sin ánimo de exhaustividad, tan sólo pongo algunos ejemplos**. Sobre el trabajo: reducir la jornada laboral (más tiempo para vivir y tener tiempo para el desarrollo y ayuda mutua de tipo personal y colectivo), más democracia económica, desprecarizar trabajos alienantes, tóxicos y precarizados, repartir el trabajo y la riqueza, lograr algún tipo de renta básica universal. Sobre la crisis ecosocial y climática: promover energías renovables más democráticas y distribuidas con acuerdos globales y locales; abandonar el desarrollismo, el turismo masivo y los vuelos de corta y media distancia, potenciando el uso del tren; desmercantilizar la producción industrial, el consumo y la vida; crear servicios de movilidad en lugar de apoyos al vehículo privado; transformar las ciudades potenciando al máximo el transporte público, la bicicleta, los servicios de movilidad compartidos y la peatonalización; abandonar los combustibles fósiles de forma rápida, acelerar el ritmo de conversión a energías renovables democráticas; fomentar la alimentación de escaso impacto ecológico; racionalizar el uso del agua. Sobre los servicios sociales: desmercantilizar servicios desarrollando sistemas públicos, universales, gratuitos y de calidad (salud pública, educación, cuidados, comedores, bibliotecas, etc.); crear un parque de viviendas público de calidad, con eficiencia energética en los hogares; limitar la producción de alimentos cárnicos y procesados, desarrollando la educación para adoptar dietas basadas en alimentos vegetales, de temporada y proximidad, etc. Aunque la propuesta y desarrollo de políticas específicas como las señaladas es imprescindible, **un programa de largo alcance requiere poner el acento en factores más profundos, como son las líneas programáticas y las bases estratégicas,**

que son las que pueden permitir poner en marcha esas y otras políticas para salir del atolladero al que ha conducido la civilización capitalista.

Ocho líneas programáticas

Para llevar a cabo políticas como las señaladas arriba, se hace necesario construir un proyecto con líneas programáticas adecuadas. Sin tampoco un ánimo de exhaustividad, se apuntan algunas importantes líneas a tener en cuenta. Primero, **reorientar la política exterior**, y tener en cuenta que cada vez es más necesario recuperar la soberanía nacional constreñida por el euro, y la camisa de fuerza que impone una Europa neoliberal plegada a los intereses de Estados Unidos. Segundo, **crear una banca pública** que dirija la transición de una economía financiarizada y especulativa a una economía productiva, solidaria y sostenible de verdad. Tercero, **cambiar el modelo productivo**, para lograr una transición real que logre trabajos socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles. Cuarto, realizar una **planificación ecológica de la economía** que oriente la inversión pública a aquellos sectores que actualmente la demandan para construir un modelo de desarrollo diferente, que tenga componentes del Green New Deal pero con una mirada poscolonial y poscrecientista en lo material, muy en especial en los países desarrollados. Quinto, **nacionalizar los sectores estratégicos de la economía**, (telecomunicaciones, transporte, energía, agua, medios de comunicación, etc.), y controlar/regular otros sectores vitales fundamentales (alimentación, medios de comunicación, etc.) que deben estar al servicio de las necesidades sociales y sustraerlos de la dinámica oligopólica mercantil actual. Sexto, realizar una **reforma fiscal profunda** que reforme en profundidad el sistema tributario actual para hacerlo mucho más progresivo, combatiendo el fraude fiscal y gravando los beneficios de las corporaciones. Séptimo, desarrollar la **democracia económica en las empresas**. Actualmente, uno de los lugares donde la democracia se encuentra más ausente de la vida son las empresas. Generar una mayor participación democrática de los trabajadores, aumentar la fuerza en el desarrollo de la negociación colectiva o la creación de cooperativas son tres ejemplos en esa dirección. Octavo, **ampliar y mejorar las prestaciones sociales y de protección de la población, en materia de** productos básicos, vivienda, energía, salud, educación, cuidados, ayuda a las familias, etc.

Cuatro bases estratégicas para avanzar en la realización de las políticas

Para realizar las políticas e implementar líneas programáticas, se requiere diseñar y concretar las bases estratégicas que han de permitir llevar a cabo unas políticas que son grandes retos para las izquierdas. Apuntamos a continuación **cuatro bases estratégicas especialmente relevantes**.

1. Estar con la gente que sufre

Compartir la vida y ayudar a que quienes sufren tengan lo necesario y suficiente para vivir con dignidad, sencillez y fraternidad. Para ello hace falta **aprovechar todos los recursos públicos disponibles, reparar los vínculos comunitarios, creando redes solidarias de cooperación, apoyo y ayuda público-comunitarias** (alimentos, trabajo, vivienda, energía, cuidados, educación, cultura, comunicación, deporte) que disuelva un comunitarismo tradicional de corte autoritario, **aleje el miedo y la precariedad de la realidad y las mentes de tantas personas para, en su lugar, crear esperanza y solidaridad fraterna**. Eso quiere decir también crear (decía Manuel Sacristán) pequeños espacios locales de micropolítica, de vida alternativa, que permitan una autonomía personal-comunitaria para satisfacer las necesidades más básicas

(alimento, vestido, vivienda, etc.) y generar nuevas formas de vivir, de producir, consumir, de relacionarnos (de “sentipensar” decía Eduardo Galeano citando a Fals Borda), de compartir en una vida que valga la pena de ser vivida. Todo ello requiere tener humildad y (re)aprender a sentir y mirar la realidad de otro modo. Cabe no olvidar que mucha gente vota a los fascistas sin serlo, pero han perdido la esperanza vital, a menudo traicionada por grupos autoproclamados de izquierdas.

2. Proponer un imaginario psicocultural alternativo

Necesitamos una visión alternativa que cree un imaginario nuevo de lo que significa tener una vida, individual y colectiva, digna, esperanzada, y lo más feliz posible (incluye la “vida buena”, “el buen vivir”, el “dar sentido a la vida”). Necesitamos **crear nuevos relatos, nuevos imaginarios alternativos** que muestren que es posible “vivir mejor con menos”, y con ello **(re)aprender a dar un sentido nuevo a la vida, y también a la enfermedad y la muerte**. Para ello, es imprescindible un plan estratégico político-cultural de formación que ayude a **crear una nueva subjetividad colectiva, una “utopía realista” que ilusione y haga sentir que el mundo no tiene por qué acabar, que penetre de forma profunda en los valores, relaciones, afectos y cuidados de las personas** (Rudolf Bahro hablaba de crear “monjes laicos”, Manuel Sacristán apuntaba que necesitábamos realizar una “conversión” casi religiosa), así como también en **las ideologías y el análisis político**. Para ello, hará falta un diseño político estratégico apropiado que incluya a nuevos medios de comunicación, a la formación experiencial (Paulo Freire ayuda en eso) que se debe practicar a nivel barrial y comunitario. Una táctica apropiada podría ser **la formación de formadores (y de cuadros políticos) mediante una red de ateneos barriales**, lo cual podría evitar la superficialidad de información habitual en las redes sociales (pero también por ejemplo en las universidades) y generar procesos culturales de tipo exponencial de gran importancia política.

3. Comprender la realidad de forma integral y práctica

Un tercer punto esencial es que, para comprender, experimentar, y tener estrategias y tácticas que puedan ser más efectivas, es necesario crear con urgencia “mapas” nuevos de una realidad compleja y en constante cambio. Para ello, hay que **crear y desarrollar grupos de análisis y experiencias (think tanks) potentes que hagan propuestas estratégicas y tácticas**, tal y como hacen las derechas, los institutos conservadores o las corporaciones para entender mejor lo que pasa y planificar las políticas que quieren implementar. Ello requiere alianzas fuertes con técnicos y científicos con capacidad y conciencia. La realidad es muy compleja y hoy tenemos un sistema de “contaminación” de la opinión pública con abundante información sesgada, noticias falsas, medias verdades e incluso estudios científicos de mala calidad que distorsionan nuestra manera de comprender muchos problemas. Si existe el apoyo político necesario, esos grupos podrían amplificar enormemente su potencia y efectividad política, mediante **una visión crítica que abarque muchos planos de la realidad**: desde el uso de indicadores que conforman o deforman la visión colectiva de muchos procesos (la precariedad laboral o el desempleo son dos ejemplos), a la descripción de la realidad (la violencia de género), o el análisis causal de tantos fenómenos (la salud y la educación son dos ejemplos). En algunos casos, **el conocimiento generado podrá ser integral e integrado (de tipo sistémico-histórico-político) mientras que en otros serán necesarios análisis “rápidos y pragmáticos” (quick & dirty dicen los epidemiólogos)** que, aunque no tan sofisticados como los primeros, serán muy útiles para

comprender y resolver problemas cercanos, más inmediatos, donde opera la incertidumbre y el cambio. Todo ese conocimiento puede ayudar a aunar lo radical y lo reformista, lo defensivo y lo ofensivo, lo cultural y lo práctico, lo institucional y lo comunitario. La necesidad de conservar aquello que nos hace mejores y de cambiar aquello que nos envilece o perjudica.

4. Construir y desarrollar poder popular

Es un punto crucial. Para hacer políticas hace falta tener poder político, pero estar en el gobierno o tener una alcaldía da cierto grado de poder, pero no “el poder”. Sólo **construyendo poder popular democrático** (político, social y comunitario), **capaz de generar el compromiso activo de las clases populares con un proyecto organizado, solidario, generoso y empático, “antiegocéntrico” y “antiingenuo”** (evitar personalismos, conocer mejor al adversario, protegerse y evitar infiltrados), **donde el empoderamiento de las mujeres deberá jugar un papel esencial**, será posible afrontar la actual crisis civilizatoria. Deberán ser partidos-movimiento democráticos, bien estructurados, ágiles, resistentes, performativos (capaces de pasar de la teoría a la acción), capaces de adaptarse a los cambios y reaccionar ante lo inmediato, pero, al mismo tiempo, con una mirada a largo plazo. Harán falta movimientos a la vez locales y globales, con **sensibilidades e identidades diferentes pero descentralizados, con un nivel apropiado de coordinación transversal y una sinergia efectiva entre la sociedad civil y el poder político**. Construir una verdadera alternativa requiere **tener paciencia, convicciones, firmeza sin sectarismos, y crear unidad estratégica de acción** que genere movilización sostenida. Sólo de ese modo parece posible tener alternativas creíbles que permitan sembrar esperanza, organizar la solidaridad, transformar el lenguaje cotidiano, realizar movilizaciones sociales y ganar victorias con orgullo y alegría. Habrá que (re)aprender a ser valientes y, por encima de todo, a crear alianzas estratégicas (“frentes amplios”), con **claridad ideológica y organizativa, que permitan unir lo público, lo comunitario y lo local en una acción colectiva sostenida (pública y en la calle), al tiempo que se preservan las identidades de cada movimiento social y partido político**. Deberá hacerse un enorme esfuerzo, colectivo y generoso, para construir una constelación sociopolítica (acciones políticas, organizaciones sociales, espacios de reflexión, encuentros, etc.) con un plan sólido capaz de bloquear el ascenso del neofascismo, ganar legitimidad social y crear un proyecto alternativo. Santiago Alba Rico, por ejemplo, ha apuntado la atrevida necesidad de crear una alianza “entre el capitalismo pragmático, el marxismo ilustrado, el feminismo humanista, el ecologismo realista y el papa Francisco”. Esas alianzas sociopolíticas deberán articular acuerdos tácticos capaces de generar “acciones híbridas”, institucionales y comunitarias, con acciones “ad hoc” en forma de “guerra de guerrillas”, en forma de ensayo y error. Esas acciones deberán tener **como objetivos**, entre otros, disputar la hegemonía y **crear identidad político-cultural, defender derechos, crear “miedo en las elites”, defenderse de los adversarios, ganar victorias y ampliar la democracia** en todos sus ámbitos.

Antonio Antón

Sumar en la encrucijada

Junto con una carta abierta a Yolanda Díaz, explico las características y retos de Sumar con tres aspectos fundamentales: la distinción entre movimiento ciudadano y plataforma político-electoral, el cambio de primacía dirigente en el espacio del cambio, y el principio de realidad y la pugna partidista.

A la atención de Yolanda Díaz

Has asumido una gran responsabilidad política: liderar la renovación y ampliación del espacio del cambio de progreso. Tu estatus institucional actual está definido por una excelente trayectoria, reconocida por gran parte de la sociedad como ministra de Trabajo y Economía social, vicepresidenta segunda del Gobierno de coalición y portavoz gubernamental del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común.

La función que nos interesa destacar ahora es la de precandidata a la presidencia del Gobierno para las próximas elecciones generales de fin del año 2023, estando pendiente de tu decisión definitiva, tras el proceso de 'escucha' y la elaboración programática que, previsiblemente, culmine a principios de año, de la mano de Sumar. Hay un gran consenso en todas las formaciones políticas del grupo confederal sobre tu idoneidad para encabezar ese proceso electoral. A la propuesta inicial de Pablo Iglesias, anterior líder de ese espacio, se han sumado el resto de organizaciones del grupo confederal y, además, ha sido bien recibida por otras fuerzas afines significativas como Más País y Compromís.

La tarea es compleja y difícil, pero también muy estimulante y, sobre todo, de grandes implicaciones políticas y sociales para las fuerzas progresistas, el bienestar de la sociedad y el futuro de nuestro país. Está en juego la consolidación del proceso reformador del siguiente Ejecutivo de coalición progresista, con garantías de un avance sustantivo social y democrático, o bien la posible involución reaccionaria con que amenazan las derechas. Y para ello es imprescindible aumentar el peso comparativo de las fuerzas del cambio, de su representatividad popular y su capacidad transformadora.

Desborda, por tanto, tu simple responsabilidad individual, por muy relevante que sea. Es un reto colectivo que debe contar con todas las energías progresistas disponibles, con las mejores aportaciones democráticas y de izquierdas, con una actitud al servicio de las mejoras vitales para la gente. La participación ciudadana es fundamental, y la conformación de una nueva y unitaria representación político-institucional, con la activación y ampliación de sus bases sociales, es decisiva. El horizonte está claro y es ilusionante: un proyecto progresista de país para una década.

Por mi parte, en especial, en el último año he seguido con interés los hechos que configuran la presente coyuntura y las principales tendencias en torno a la formación del llamado frente amplio y sus retos, en particular en dos libros: "[Perspectivas del cambio progresista](#)" y "[Dinámicas transformadoras. Renovación de la izquierda y acción feminista, sociolaboral y ecopacifista](#)".

Mi intención con estas notas, ante los evidentes desencuentros producidos con referentes de Podemos, es contribuir a aclarar la situación para una articulación unitaria y sólida del espacio del

cambio y evitar su fractura, factor clave para avanzar en la mejora social de la mayoría popular y el proceso democratizador del país.

Movimiento ciudadano y plataforma político-electoral

Tras más de uno año de preparación se ha constituido Sumar, según tus declaraciones, como asociación instrumental para desarrollar dos dinámicas paralelas y complementarias: 1) articular un movimiento ciudadano participativo durante este semestre como base constitutiva y legitimadora del proyecto; 2) configurar una plataforma político-electoral desde la que encarar la campaña para las elecciones generales. Las dos dinámicas están vinculadas y se enlazan a primeros del año próximo, con la constitución formal y programática de la plataforma política tras las conclusiones del proceso de 'escucha' y la formalización de las condiciones para tu aceptación de la candidatura.

Se están realizando asambleas territoriales con tu participación y la de personas representativas de la sociedad civil, con asistencia de varios miles de personas, y también es un tiempo de elaboración programática a través de treinta y cinco grupos, con varios centenares de participantes, la mayoría expertos en las distintas materias. Es una experiencia positiva de interacción de abajo a arriba, recogiendo opiniones, y de arriba hacia abajo marcando los ejes de tu propuesta.

Me preocupa la clarificación del sentido de este proceso y las controversias suscitadas. *Desde el principio has dejado clara una característica fundamental: Sumar no va de partidos políticos, de siglas y puestos. Cabría, pues, distinguir entre Sumar-movimiento ciudadano y Sumar-plataforma político-electoral (pendiente de confirmar la sigla).*

Por un lado, la formación de estructuras partidarias, incluidos los liderazgos y los mecanismos organizativos, con los procedimientos democráticos correspondientes, como mediación entre determinada base social y las estructuras de poder y la gestión política e institucional[1]. Por otro lado, la orientación política y programática, así como la estrategia y las alianzas adecuadas para su implementación[2].

Desde el principio has dejado clara una característica fundamental: Sumar no va de partidos políticos, de siglas y puestos. Cabría, pues, distinguir entre Sumar-movimiento ciudadano y Sumar-plataforma político-electoral (pendiente de confirmar la sigla)[3].

La finalidad del proceso participativo ciudadano tiene una positiva finalidad articuladora y democratizadora del nuevo proyecto y, al mismo tiempo, una función política inmediata: legitimar tu candidatura como portavoz del conjunto y fortalecer tu capacidad para condicionar el carácter y los ritmos de la plataforma político-electoral a construir.

En este caso, el proceso de escucha y este movimiento ciudadano tienen un doble sentido político claro: afianzar un proyecto político-electoral transformador de progreso y apoyar tu liderazgo político-institucional en el marco inmediato de una precampaña electoral ante las próximas elecciones generales, ya que se descarta la participación directa en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. No obstante, se pone el acento en el carácter no político del movimiento ciudadano para justificar su desvinculación de los partidos políticos realmente existentes que son los de todo el conglomerado del espacio del cambio, en particular el

más relevante, Podemos. Así, se entra en cierta incongruencia con la realidad y el sentido común inmediato: el proceso de escucha culmina con el aval a la candidata a la presidencia del Gobierno por parte de Sumar-plataforma político electoral, como expresión de un renovado espacio del cambio.

Lo que propones, y parece que es una condición innegociable, se puede formular así: los partidos, su militancia y sus bases sociales, pueden 'estar', pero —sus dirigentes, sus estructuras y sus siglas— 'no ser' elementos constitutivos de la nueva formación política. El consenso, entonces, en torno a tu candidatura no necesariamente conlleva el acuerdo con el marco organizativo definido en esa característica, lo que debiera ser debatido. No existe un proceso constituyente pactado, como en otras latitudes, con las formaciones políticas llamadas a formar parte de este posible frente amplio, en el que se negociase una dinámica de disolución o renuncia a un papel público e institucional, al mismo tiempo que un proceso electivo, con las correspondientes primarias o listas compartidas para las distintas estructuras orgánicas e institucionales. O sea, se excluye la colaboración de la representación legítima de otras formaciones políticas en un proceso que pretende recoger y sumar sus bases sociales y electorales, pero dejar al margen —y sustituir— a sus direcciones por el equipo promotor de la nueva plataforma política.

En ese diseño estatal hay una incoherencia práctica y temporal ante el reto de las elecciones municipales y autonómicas. Se admite, necesariamente, la continuidad del grupo confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común para la gestión política en este último año de legislatura, así como la persistencia de los distintos partidos y coaliciones en diferentes territorios y en alianzas estatales (con la recomposición del pacto entre Podemos e Izquierda Unida), y se refuerza la permanencia de las estructuras partidarias de todos ellos.

Sumar, en ese periodo, se quedaría como una superestructura estatal a negociar en los dos ámbitos: los partidos estatales y las configuraciones territoriales. Ahora bien, ni unos (Podemos, Izquierda Unida, Más País...) ni otros (En Común Podem, Compromís, Galicia en común, pero también Contigo Navarra, Más Madrid o la posible alianza canaria...) parece que tienen intención de disolverse ni delegar en una superestructura estatal la decisión sobre su representación institucional a su parlamento autonómico pero tampoco al estatal, así como su gestión política en su territorio.

En cada caso, con matices diversos, se plantea una negociación, desde la autonomía de cada cual, de la colaboración y el apoyo mutuo entre ese ámbito territorial y el estatal. Es otro nivel de articulación que el de apoyar y compartir una candidata común a la presidencia del Gobierno y al revés, el de recibir el apoyo del liderazgo estatal para las formaciones o coaliciones locales y autonómicas del conjunto del espacio del cambio, sin favoritismos ni relegación particulares.

SUMAR, por tanto, se convierte en un grupo político con la prioridad del apoyo, junto con todo el conglomerado, a una candidata que se supone que se presentará por la circunscripción de Madrid y al conjunto de partidos políticos que deben afrontar esta fase electoral y de avance político e institucional.

Hay dos hipótesis alimentadas en algunos ámbitos. Una es la descomposición o hundimiento de Podemos (con la correspondiente ayuda de las campañas de acoso mediático, judicial y de las cloacas) con el trasvase de su base social y electoral a la nueva sigla de Sumar (o Más País... o

las izquierdas nacionalistas). La otra es la capacidad de atracción y trasvase de parte de su estructura intermedia o territorial hacia Sumar, con aislamiento de su dirigencia estatal. Son dudosas esas expectativas y las prácticas que conllevan. En la experiencia histórica han producido agudas tensiones entre las izquierdas y raramente han tenido efectos positivos. Lo que sí se ha generado han sido procesos profundos de desafección política en grupos de izquierda por estrategias erróneas y grandes pérdidas de credibilidad social.

En todo caso, justificar el monopolio representativo de Sumar, exigiendo la dilución política de Podemos y los demás grupos políticos, dada la supuesta existencia de un clima general de desconfianza en los partidos y, en particular, por su falta de representatividad actual o futura y su carácter de partidos políticos, no parece muy realista ni, desde luego, muy unitario.

No se trata de un debate nominalista, ni distinguir entre partido político (malo) y plataforma político-electoral (buena); hay que valorar el sentido de la propuesta de 'no ser' partido político sino plataforma ciudadana/electoral como fórmula para desbordar y marginar a los —dirigentes de— partidos políticos existentes en el contexto actual.

Tampoco tiene recorrido la distinción entre partido unificado y coalición electoral. Algunas coaliciones como la andaluza han sido un desastre, tal como todo el mundo sabe, y otras como Navarra Contigo, ofrecen buenas perspectivas^[4]. La misma En Comú Podem, en un contexto externo difícil y con gran diversidad interna y una historia compleja, es una agrupación política con relevante estabilidad, representatividad e influencia pública.

El problema no es el modelo de organización política, por mucho que haya diversos tipos y, en general, haya que reforzar los dos criterios básicos: su democratización frente a las tendencias jerárquicas de sus aparatos, y su calidad ética, al servicio del bien común. Algunas de las deficiencias principales provienen de la propia política institucional, de la vinculación con los poderes institucionales y fácticos. Para su contrapeso requieren, aparte del arraigo social y la vinculación con las capas populares, una fuerte cultura democrática y profundos valores éticos de ejemplaridad representativa, con las regulaciones precisas. También los niveles de activación cívica en la sociedad y el estímulo de su calidad democrática favorecen las garantías y el control de la honestidad de las personas y los grupos especializados en la política institucional.

Existe un acuerdo en la participación política-electoral-institucional y el fortalecimiento del espacio del cambio. Y hay una candidata aceptada por todos, en espera de su decisión definitiva. La solución pasa necesariamente por la suma, ampliación y coordinación unitaria del conjunto del conglomerado, en una estructura política. La disputa viene sobre el marco organizativo y las competencias que la candidata y portavoz ante el Gobierno pretende asumir con su nuevo liderazgo, pero sin la negociación y el acuerdo del conjunto de formaciones políticas, especialmente de Podemos, que ostentaba hasta ahora la prevalencia representativa y dirigente. O sea, se está ventilando el cambio de primacía dirigente de todo el conglomerado sin explicitar el problema, hasta que ha explotado estos días.

Diferencias políticas y la primacía dirigente

En el conflicto entre Yolanda Díaz y su equipo con la dirección de Podemos se añaden dos factores específicos. Uno, las diferencias políticas. Dos, la expectativa del cambio de primacía en la gestión política y del poder político-institucional del espacio del cambio renovado.

Con respecto a lo primero, no hace falta repasar las pequeñas discrepancias, más allá de los ruidos comunicativos instrumentalizados en los medios y redes sociales. Desde mi punto de vista son menores y no impiden un amplio acuerdo político y programático, así como de estrategias y alianzas, arbitrando la regulación de la pluralidad. Hay un consenso amplio sobre el programa de reformas acordado, la gestión rigurosa en los distintos Ministerios y responsabilidades institucionales, los acuerdos con los socios de investidura y la participación en el Gobierno de coalición progresista junto con el Partido Socialista, aun admitiendo una posición subordinada, aspecto solo cuestionado por la minoría escindida del sector anticapitalista, en particular de Adelante Andalucía, que demuestra poco interés en la nueva confluencia.

No obstante, hay matices, a veces significativos, que especialmente para las derechas y el Partido Socialista presentan a Podemos como más exigente e incómodo en sus planteamientos reivindicativos, cosa cierta, pero que lo utilizan para amplificarlo, demonizarlo y ofrecer preferencias mediáticas hacia el proyecto de Sumar (y hacia Más País/Compromís), siempre de forma instrumental, es decir, en la medida que perjudica un espacio unitario compacto y debilita a Podemos, cuestión muy sensible para ellos[5].

En definitiva, el gran espacio del cambio de progreso conformado en el primer lustro de protesta social y cívica de la década pasada y del que nació Podemos y sus confluencias (y la renovación de Izquierda Unida) se puede —y se debe— articular en torno a un proyecto de izquierda transformadora. Es más necesario ante la persistencia de las crisis socioeconómicas, las desigualdades sociales, territoriales, medioambientales y de género, y las deficiencias democráticas. Es necesario un reformismo fuerte con políticas públicas protectoras, reguladoras y distribuidoras, basadas en la igualdad y las libertades individuales y colectivas.

Así, aunque haya distintas sensibilidades más moderadas o transversales o más transformadoras y confrontativas, no creo que sea motivo de ruptura política. Las dinámicas reformadoras de fondo dependen de la activación cívica, aspecto fundamental que a veces queda en la periferia de las estrategias políticas. En todo caso, sí es imprescindible regular los conflictos políticos y orgánicos, respetar la pluralidad, fortalecer la cultura unitaria y los procedimientos democráticos, decisorios y de debate, y desechar todo tipo de sectarismos, prepotencias y descalificaciones[6].

Principio de realidad y pugna partidista

Lo que me interesa destacar aquí es que, dado que el argumento actual es que no ha habido tiempo para la articulación territorial de Sumar y su tarea es conseguir buenos resultados en las elecciones generales, para su desarrollo habría que enlazar otra fase posterior a ellas. La realidad organizativa es diversa y plural, con diversos equilibrios representativos por territorios y a nivel estatal. Y queda pendiente para toda la siguiente legislatura la misión de conformar todo el conglomerado político en sus distintos niveles en un proceso confederativo, con un liderazgo coral y transitoriamente como coaliciones, más o menos compactas, a la espera de reunir condiciones suficientes para un auténtico proceso constituyente, unitario y compartido. Si se aspira a desarrollar un proyecto de país para una década, es preciso avanzar en el contenido,

condiciones y marco temporal de los tres aspectos encadenados: programa, estrategia y sujeto político y social. O sea, política pura de la buena para implementar. El liderazgo colectivo se debe curtir en ello.

Todavía vivimos del impulso cívico y sociopolítico transformador iniciado hace más de una década. Su reafirmación y desarrollo condicionará la próxima. No se ha cerrado el ciclo del cambio de progreso. La representación política debe dar la talla en su capacidad articuladora, gestora y orientadora.

Ahora se da por supuesto el gran valor del control del grupo parlamentario y el equipo gubernamental confederal, no solo para la gestión política sino para lo que estamos contemplando de tener una palanca más operativa que desborda el plan inicial de una simple plataforma electoral estatal y que debe definirse sobre esa articulación global y territorial. Todo ello siempre que las izquierdas ganen las elecciones, le interese o acepte el PSOE un Gobierno de coalición y no pase el espacio del cambio a la oposición parlamentaria o una situación muy subalterna. Es otra hipótesis, como la de ir divididos, que augura una crisis del conjunto del espacio del cambio y de las izquierdas en la que, de momento, no entramos[7].

No es simple especulación, sino constatar los hechos, analizar las tendencias y abrir horizontes. Si contemplamos un programa de reformas para el país a diez años, con todas sus eventualidades, es prudente valorar este proceso de formación de la fuerza política del espacio del cambio que es el instrumento que lo pretende ejecutar. Como decía, programa, estrategia y sujeto están entrelazados y condicionados por las nuevas realidades sociales, estructurales y de poder. Mejor que no plantear el problema o proponer falsas soluciones, se trata de abordarlo con realismo e interés colectivo.

Hay que analizar e intercambiar valoraciones sobre los intereses, expectativas y aspiraciones de cada fuerza política, siempre respetando el principio de realidad y la apuesta por la unidad en la pluralidad. Muchas veces es difícil de objetivar, pero es el punto de partida imprescindible para acordar los equilibrios representativos que pueden compensarse con otras variables. Una de las mejores maneras, aparte de valorar el arraigo social y la potencialidad organizativa demostrados, es medir y comparar la representatividad electoral en las distintas elecciones[8] y, con reservas, las encuestas demoscópicas[9]. Igualmente, hay que considerar con el máximo realismo el impacto electoral del prestigio de los liderazgos, la credibilidad de las formaciones políticas y las potencialidades del proyecto unitario. Lo que parece evidente, al menos para las elecciones generales por su sistema electoral, es que la unidad es posible, positiva y deseable[10].

En definitiva, no estamos hablando de puestos institucionales, listas electorales o equipos gubernamentales y de las condiciones políticas para ampliarlos. Todavía no toca y se abre una etapa intermedia durante el primer semestre del año, hasta después de la experiencia y los resultados de las elecciones municipales y autonómicas en que se concretará el abordaje directo de esa tarea.

Ahora, el debate enconado se sitúa en cuál es el marco político-organizativo que va a tener prevalencia en su decisión, para colocarse mejor en esa negociación y aunque se supone que con una ratificación democrática masiva y las justificaciones políticas correspondientes. Y se dibujan dos posibilidades. O es Yolanda Díaz con su equipo de Sumar que se arroga la exclusividad de la conducción del proceso. O es a través de una negociación multilateral y abierta con todos los grupos del espacio del cambio y, en particular, con Podemos, hasta ahora la fuerza más representativa y, por supuesto, con el protagonismo de la candidata consensuada.

La primera opción, que yo sepa, no forma parte de la consulta y el proceso de 'escucha' de la problemática expuesta por la gente, sino de la exposición discursiva de la propuesta de Yolanda Díaz en las asambleas y los medios, o sea, en la parte de arriba-abajo no de abajo-arriba. Así, tras la 'escucha' ha manifestado su disponibilidad para aceptar ser la candidata y continuar con la siguiente fase, en febrero, de constituir una agrupación política-Sumar, reconvirtiendo el movimiento ciudadano-Sumar y su proyecto programático. Queda formalizada una sigla, aspirante a ser la principal representación orgánica y pública, diferenciada de las estructuras de los partidos de todo el conglomerado. Y, aparte de definir la orientación y ejecutar la gestión política, pretende el monopolio sobre la primacía para configurar las listas electorales al Congreso y el Senado, los grupos parlamentarios respectivos y la composición de las responsabilidades gubernamentales en el futuro Ejecutivo de coalición.

Por tanto, se constituye una plataforma o grupo político (se rehúye de la palabra partido), al margen o superador de las formaciones existentes, que estructure, además de su propia vertebración orgánica estatal y territorial, la gestión político-institucional: la orientación política, el programa electoral, la estrategia y las alianzas, la composición de las listas y el grupo parlamentario, la representación institucional y gubernamental. Los distintos grupos políticos pueden elegir su propio modelo negociador para sacar ventaja para sus intereses respectivos y así lo han manifestado explícitamente algunos dirigentes afines a la propuesta. La dirección de Podemos ya ha avanzado su propuesta de negociar una coalición electoral admitiendo la pluralidad del conjunto y a Sumar como otra agrupación política sustantiva. No es una oferta descabellada.

En conclusión, las distancias son grandes. Como he pretendido explicar, no es solo un debate de ideas más o menos realistas sino de intereses (legítimos) de reconocimiento representativo y de estatus y capacidad de influencia política en una gran encrucijada. Los riesgos de ruptura y división son significativos. Sus consecuencias serían mucho mayores que las de las experiencias traumáticas anteriores. En esta ocasión, sus efectos podrían contribuir a impedir la continuidad de otra etapa de progreso y abrir las puertas a la involución derechista, sin que tampoco se beneficie el Partido Socialista (o las izquierdas nacionalistas).

Igualmente, demostraría la impotencia política y la incapacidad democrática y unitaria de la nueva representación político-institucional de las fuerzas del cambio, tan duramente construida. La frustración de la gente de izquierdas y la desafección popular podría ser profunda y duradera. No se puede llegar a ese abismo. Hay que atajar cuanto antes ese recorrido. La responsabilidad sería compartida por todos los principales actores. Sería lo de menos, comparado con el desgaste y el sufrimiento colectivo de la mayoría social y de la gente más activa de este histórico proceso de cambio.

Me he dirigido a ti, dando por supuesto tu mayor responsabilidad en la articulación de una solución pactada. Como todos los acuerdos, y tú lo sabes mejor que nadie, supone hacer concesiones mutuas y defender los aspectos básicos comunes. Tu liderazgo se verá fortalecido por ello.

1. Existe un problema de desconfianza ciudadana en los partidos políticos (y medios de comunicación), con disminución de su prestigio y legitimación popular y hay deficiencias de prácticas y cultura democráticas, más allá de algunas innovaciones y mejoras en las fuerzas del cambio, como la realización de elecciones primarias para la selección de responsables políticos e institucionales o el seguimiento de un código ético más estricto. Se necesita una persistente participación democrática y arraigo social y un talante unitario y constructivo sin dejar de lado el debate sereno ante la pluralidad de posiciones y la regulación de los conflictos y desacuerdos. Pero, la formación partidaria es inevitable, sobre todo desde el campo popular y de las izquierdas, cuya intervención debe basarse, no en el poder económico, mediático-cultural y de la burocracia estatal, sino en la vinculación democrática con la sociedad y los movimientos sociales progresistas, desde la que se constituye su fuerza representativa e institucional, así como su capacidad cultural e influencia transformadora. Especialmente, si se quiere influir en las políticas públicas y participar en los procesos electorales y el poder institucional. La pugna (y la colaboración) partidista por la prevalencia de cada orientación política es legítima en un sistema pluralista y democrático, aunque se debe valorar por su doble sentido: los intereses y valores que defiende, y los procedimientos básicos de tolerancia, respeto, reconocimiento mutuo y defensa de lo común. ?
2. Elaborar un programa alternativo para una legislatura o para diez años es complejo. Se debe atender a una realidad cambiante y, sobre todo, contar con el análisis de las fuerzas propias sociopolíticas, representativas e institucionales, junto con el peso de las fuerzas aliadas, y la comparación con las de los adversarios políticos y fácticos. Esa relación de fuerzas y su desarrollo es la que hay que enlazar con los objetivos programáticos para una estrategia transformadora. Es lo más difícil y sometido a las dos tendencias de apariencia contrapuesta, pero que tienden al continuismo, al no cumplimiento del contrato social y programático con el electorado y, por tanto, a su desconfianza: por un lado, el posibilismo adaptativo a las dificultades transformadoras o frente a los intereses contrarios del poder establecido; por otro lado, el idealismo discursivo de confiar solo en la simple propaganda, comunicación o retórica, infravalorando la experiencia de la gente respecto de su avance material y sociopolítico y esquivando el cambio real y sustantivo. ?
3. Es evidente que como movimiento ciudadano es diferente a los distintos movimientos sociales, incluido el movimiento sindical, el feminista o el vecinal y ecologista, y es distinto a la dimensión y el papel sociopolítico de procesos de protesta social más amplios como el

representado por el movimiento 15-M o las mareas ciudadanas, por no hablar de los conflictos laborales y las huelgas generales. ?

4. En el caso navarro es significativo los grados de unidad e ilusión alcanzados por la nueva coalición, y conviene señalar el contexto. Expresa el reconocimiento colectivo del desastre de las elecciones municipales y forales de 2019, tras el éxito del año 2015, derivado de la dura división existente entre Podemos e Izquierda Unida, ahora corregida con la renovación dirigente de ambas y, al mismo tiempo, por la presencia unitaria de una fuerza de la izquierda navarra como Batzarre, con fuerte arraigo social, y un grupo de independientes de prestigio que han favorecido un clima de colaboración. ?
5. Sin embargo, hay que hacer referencia al gran desacuerdo estratégico en el año 2016 que dio pie a la ruptura de *Podemos* con grandes desgarros internos que todavía colean: la polarización entre el apoyo al pacto de PSOE/Ciudadanos con un gobierno continuista en lo económico, político y territorial, en el caso del *errejonismo*, o la oposición al mismo, en el caso del *pablismo*, con exigencia de un programa de cambio con un gobierno de coalición de izquierdas, ya posible y rechazado por el Partido Socialista. Se puede hacer también referencia a las otras dos grandes escisiones en la izquierda transformadora. El primero, la crisis del PCE-PSUC a primeros de los años ochenta, aparte del sector *prosoviético*, por los grupos *carrillista* y *renovador*, más moderados que terminaron en el PSOE. El segundo, la escisión dentro de Izquierda Unida de la corriente de 'Nueva Izquierda', también más moderada, de Nicolás Sartorius y López Garrido, que también terminó en el Partido Socialista. Expresa la dificultad de una izquierda moderada, diferente a la socialdemocracia, en la que convive con la orientación socioliberal dominante, pero que ante cierto giro discursivo y político hacia la izquierda, como en el caso del 'sanchismo', deja menos margen para una izquierda moderada autónoma. ?
6. Las izquierdas no cuentan con el disciplinamiento externo de los diversos poderes fácticos que lo ejercen con las derechas por su ligazón directa. Las izquierdas alternativas dependen, sobre todo, de la confianza ciudadana recibida y del pequeño estatus institucional conseguido y todo ello derivado de su gestión transformadora, su vinculación social y su credibilidad como representantes populares. La democracia, el compromiso cívico y los valores éticos y solidarios son más fundamentales para ellas. ?
7. No obstante, conviene tener en cuenta las dos experiencias traumáticas de fuerte división electoral, pero que han constituido datos de la realidad condicionantes de las siguientes etapas de la configuración del espacio del cambio. La primera, tras la emergencia de Podemos y la competencia con Izquierda Unida en las elecciones europeas de 2014, la fuerte división competitiva en las elecciones generales de diciembre de 2015 que terminó con los resultados de 69 escaños para los primeros y 2 para los segundos. Esa cruda realidad, aunque en términos de votos la desproporción era menor, permitió constatar la representatividad institucional entonces de cada fuerza política, así como la renovación de la dirección de IU y su acuerdo de coalición con Podemos (y las distintas confluencias) para las elecciones generales de junio de 2016. La segunda experiencia tras la separación del grupo de Errejón de Podemos y la constitución de Más País, fue las elecciones generales de noviembre de 2019, con 35 escaños para todo el espacio confederal de Unidas Podemos y las confluencias catalana y gallega, y 3 para la alianza Más País/Equo/Compromís, aunque también esa relación de más de diez a uno se reduce a la mitad en términos de votos. Estaba lejos de las expectativas de estos últimos (cifradas entre diez y quince escaños) y de los deseos del Partido Socialista para que con esa supuesta mayor división del voto del cambio posibilitar su Gobierno en solitario, cosa que la misma

noche electoral tuvo que rectificar. [?](#)

8. Por ejemplo, los resultados en las últimas elecciones generales de 2019 para el Parlamento, ya avanzados, son los siguientes (sin contar la posterior baja de dos escaños canarios): Grupo confederal de Unidas Podemos, 35 escaños (Podemos, 20; Izquierda Unida, 5 —que pasa de sus tres iniciales por la baja y sustitución de dos de Podemos—; En Comú Podem, 7; Galicia en Común, 2; Alianza Verde, 1); Más País, 2 (Más Madrid, 1 y Equo, 1), y Compromís, 1. [?](#)
9. Según el último estudio del CIS, la estimación de voto para Unidas Podemos es el 12,7% y para Más País/Compromís, el 1,1%. Aunque no entra en adjudicación de escaños, según distintas encuestas, la media sería algo inferior a los treinta y cinco actuales de los primeros y el mantenimiento de los tres de los segundos. Y con el tema que nos ocupa sobre las expectativas electorales de Sumar, considerando el último estudio de los microdatos del CIS, sin *cocina*, en preguntas abiertas y contando su oferta incipiente, tenemos la siguiente distribución de los votos declarados a Unidas Podemos: a Podemos, 41,1%; a Unidas Podemos, 34,7%, a Sumar, 16,8%; a Izquierda Unida, 6,3%. [?](#)
10. Con los mismos votos actuales del espacio del cambio, sumados, se acercarían a los resultados en las elecciones generales de abril de 2019: 42 escaños conseguidos por Unidas Podemos/En Comú Podem/Galicia en Común más 1 de Compromís. A ello habría que añadir, si todo va bien, la expectativa de ampliación por su oferta unitaria y renovada. [?](#)

El Lobo Feroz

Ladran, luego cabalgamos

Algunos rasgos de la izquierda política (real o supuesta):

Uno muy básico, que está en su ADN, es la tendencia a la escisión. La *escisionitis*. La primera internacional se escindió entre socialistas y anarquistas; la segunda, entre reformistas y extremistas, entre mayoritarios y minoritarios; la tercera, entre stalinistas y trotskistas, y la cuarta no ha parado de dividirse y subdividirse.

¿Qué pasa? En realidad que no se soportan las discrepancias. En vez de dialogar, y dejar que el tiempo ponga en claro lo que está oscuro, la discrepancia se resuelve en escisión. De ahí la *escisionitis*, que de la tradición ha pasado a cualquier cosa que se mueva en la izquierda ('mover' es, claro, un eufemismo).

La primera consecuencia de la *escisionitis* es que cada grupo o grupúsculo molecular genera su propia pequeña reserva de tribunos, que probablemente andarán a la greña en seguida. No hay peor cuña que la de la misma madera. Como la política se lleva al lado institucional de la sociedad —los lados no institucionales están por lo común prácticamente abandonados—, los tribunillos experimentan una urgente necesidad.

Que no es otra que la necesidad de hablar, para dar fe de su existencia. Los tribunos no saben dejar pasar la oportunidad de callar. Y así, por lo común, largan contra todo, principalmente contra los más próximos —así se diferencian de ellos—. Convierten en trifulca cualquier minucia. Y no hablemos de lo que pasa cuando a alguno, escocido, se le calienta la boca: berrea entonces lo que será amplificado por los *mass media*, que cada día necesitan algo para tener al público entretenido.

Se crea así una red de microtribunos incluso en el plano local, que intentan mantener su silla. Colitas de ratón.

Lo peor que les puede pasar a esos tribunos es que a alguno de ellos se le ocurra —mira por dónde— tratar de unir en vez de dividir. Juntar en vez de separar. Eso pone en crisis el ecosistema tribunicio entero, de modo que lo de calentarse la boca sin más motivo que desear que nada cambie y no le echen a uno de la sillita va a ser la regla. La batalla está planteada: unir por un lado y que todo siga igual por otro.

Es difícil que, metidos en su burbuja, los tribunos se vean a sí mismos tal como los vemos nosotros. Lo malo, sin embargo, es que pueden dar al traste a la difícilísima operación de unir, de no restar.

El Rombo

Kakademia, III

IX

Aquel joven seseante
de modales suaves,
humildes,
latino-polaco
o ucranio,
que nunca se sabe,
el mundo fue muy confuso
el siglo pasado,
buscó para sí
un funcionariado de por vida
con la desgracia
de que dos mulas del tribunal
correspondiente para eso
también habían leído
nada menos que en
Le Monde Diplomatique
el plagiado artículo
que ahora presentaba como suyo
notas al pie incluidas.
Mas quien la sigue
la consigue,
según es sabiduría popular;

años después
alguna burrocracia le cuantificó
de señor eminente
y le dieron una plaza-bicoca
catalana
de la que
no le apea
ni Dios Padre.

X

También
había plagiado, y quien
le protegiera
ya nada
quería con él.

Después del fiasco
otro señor
le recogió para que
le llevara
la cartera.

Muriose, y luego otro
le recogió también
para lo mismo.

Tantas llevó
que al final le ungieron
catedrático

y finalmente,
decano
en aquella flamante,
reputada,
universidad nueva,
y ahora juzga
el trabajo ajeno.

XI

Aquel señor mayor,
de misa
y lentísimo hablar,
historiador,
iba a ser el decano.
La chingamos, pensé.
Pero resultó ser
republicano
de toda la vida.
Era un pesado en clase.
La suya era la última
de la larga mañana
y él seguía y seguía
con su tabarra histórica
ya pasada la hora;
los alumnos escapaban
uno a uno

pegando portazos
a cual más fuerte
mientras yo le aguardaba
fuera del aula
para almorzar
menú del día
en el restaurante de la Estación
optando
entre Tres Erres y Berichó.
Nos hizo felices a todos;
nos protegió
en aquellos negros años
militares.
Joaquín, mi mejor y llorado
amigo
en el campus lejano.

XII

Aquí tiene mi ficha, profesor,
dijo el muchacho
medio pelirrojo y despistado.
Gracias, contestele,
pero no pido fichas.
Sin embargo,
le había fichado
al instante:

inocencia,
bondad,
inteligencia.

Venía por mi Seminario
sobre *Das Kapital*,
no precisamente
dogmático.

Andando el tiempo
se convirtió en objetor,
en pacifista,
en marido
en profesor
ecologista,
en padrazo,
andarín,

desde tiempo inmemorial
en amigo
y confesor.

Me enseñó
el pacifismo
y la bondad.

Yo admiraba
su olfato fino
y buena brújula
para el análisis político

y muchas cosas más

que por él supe.

Los aprendizajes

en la uni de verdad

son recíprocos.

Sergio Ferrari

La tumba mediterránea

En solo siete años, desde 2014 hasta fines de 2021, se calcula que 29.000 inmigrantes indocumentados murieron en su intento de entrar en el acorazado europeo. Cifras que podrían ser mucho más altas, ya que centenares (incluso miles) de todas las edades perecen en embarcaciones improvisadas sin que nadie los contabilice. Y muchos otros tampoco aparecen en los cálculos oficiales debido a que sus muertes se relacionan con deportaciones obligadas, en general forzadas y, muy a menudo, violentas.

La Organización Internacional para las Migraciones, [OIM](#), logró documentar 5.684 muertes en las rutas migratorias hacia Europa y dentro del continente en el último año.

Documentar la barbarie con dignidad

Julia Black, una de las autoras de un informe elaborado por el [Proyecto Migrantes Desaparecidos](#) de dicha organización, publicado la última semana de octubre, señala que «esta continuidad de muertes constituye otro sombrío recordatorio de que se necesitan, desesperadamente, más vías legales y seguras para la migración».

Según dicho informe, en ese mismo período se registraron 2.836 muertes y desapariciones en la ruta del Mediterráneo Central, un aumento significativo en comparación con los 2.262 casos entre 2019 y 2020. Son particularmente alarmantes las 1.532 muertes en la ruta desde África Occidental hacia las islas Canarias (España): el número más alto desde 2014, cuando la OIM inició el registro.

Los investigadores que elaboraron el informe señalan que, muy probablemente, los datos sobre estas rutas mediterráneas son incompletos debido a las complicaciones para verificar los denominados «naufragios invisibles», es decir, de embarcaciones que se pierden en el mar sin que nadie se entere y, en consecuencia, sin ninguna búsqueda ni rescate.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos documenta casos de personas —incluso refugiados y solicitantes de asilo—, que han fallecido en zonas de frontera o en su trayecto hacia un destino fuera de sus respectivos países de origen. Este proyecto se puso en marcha para dar respuesta a conteos discrepantes sobre el número de fallecidos (o desaparecidos) en las más variadas rutas migratorias de todo el mundo, y particularmente, después del naufragio ocurrido en octubre de 2013, cuando 368 personas perecieron cerca de la isla italiana de Lampedusa.

El Proyecto es, actualmente, autoridad indiscutida en su género, ya que cuenta con la única base de datos de libre acceso sobre personas fallecidas a nivel internacional en trayectos migratorios. Además, publica reportes, resúmenes e infografías que analizan en cada región geográfica los riesgos en las rutas de migración irregular, cuestiones vinculadas a la identificación de migrantes desaparecidos, información sobre los mecanismos de asistencia para las familias de los migrantes desaparecidos y la metodología para la recopilación de datos. Se propone convertirse en un punto de referencia y consulta en aquellos casos en que se busca a migrantes de los que no se tiene ninguna información actualizada.

Desde 2014, casi 50.000 personas han muerto durante viajes migratorios inseguros. Como señala su sitio web, “los datos recopilados por el Proyecto son testimonio de uno de los fracasos políticos más estrepitosos de los tiempos actuales. La OIM reclama que inmediatamente se provean rutas para la migración seguras, humanas y legales”. Los responsables del Proyecto sostienen que, de contarse con mejores datos, sería posible formular políticas que pongan fin a esta tragedia.

Más allá del Mediterráneo

Además de la ya dramática ruta del Mediterráneo, otras regiones del continente europeo también vieron crecer el número de inmigrantes fallecidos durante 2021 en relación a años anteriores.

Tal como ocurre con la frontera terrestre entre Turquía y Grecia (126 muertes documentadas) y la de los Balcanes Occidentales (69); el cruce del Canal de la Mancha (53) y la frontera entre Bielorrusia y la Unión Europea (UE) (23). A ello se añade la muerte de ucranianos que huyen de la guerra en su país (17).

Pero eso no es todo, pues diversos testimonios de supervivientes transmitidos a la Organización Internacional para las Migraciones indican que al menos 252 personas han muerto durante supuestas expulsiones forzadas por las autoridades europeas. Tanto en el Mediterráneo Central (97 muertes desde 2021) como en el Oriental (70); en la frontera terrestre entre Turquía y Grecia (58); en el Mediterráneo Occidental (23) y en la frontera entre Bielorrusia y Polonia (4). La OIM reconoce que estos casos son casi imposibles de verificar en su totalidad debido a la falta de transparencia, la imposibilidad de acceder a la información y la naturaleza altamente politizada de tales eventos.

Algo no menos alarmante, según el Proyecto, es el hecho de que “el índice de identificación de las personas fallecidas en las rutas migratorias hacia Europa y dentro de ella es más bajo que en otras regiones del mundo”. Más de 17.000 personas fallecidas en esas rutas entre 2014 y 2021 figuran en los registros sin ninguna información sobre su país de origen, lo cual explica la desesperación de innumerables familias que buscan, sin resultado, a parientes desaparecidos en esos trayectos migratorios hacia Europa.

La magnitud de este problema, así como su impacto en las familias y las comunidades que lidian con pérdidas significa que no hay solución de fondo a esta problemática sin una activa participación de los Estados, reflexiona Julia Black.

Drama mundial

Pero esta tragedia no se limita a las rutas migratorias hacia Europa. En efecto, según el [Portal de Datos sobre Inmigración](#), durante 2014 y hasta junio de este año se han registrado más de 4.000 muertes anuales en rutas migratorias en todo el mundo.

Al igual que el estudio de la OIM, el Portal subraya que todos estos números representan solamente una estimación mínima y precisa que desde 1996 hasta la fecha, se han registrado más de 75.000 muertes de migrantes a nivel mundial.

En busca del chivo emisario

El debate global se intensifica: aun cuando en su gran mayoría actores de la sociedad civil apoyan la recomendación de la OIM de asegurar urgentemente las rutas migratorias –y otros las critican por tibias y condescendientes– las fuerzas políticas de derecha y ultraderecha no se cansan de diabolizar a los inmigrantes indocumentados.

Ejemplo de esta demonización es la reacción en Francia ante el brutal asesinato de Lola, una adolescente de 12 años, a mediados de octubre. Las autoridades le atribuyeron el crimen a una joven de origen argelino de 24 años con problemas mentales y una visa vencida. En agosto le habían notificado que debía abandonar el país.

Montándose en este caso, la Agrupación Nacional (ex Frente Nacional de Le Pen) promovió debates parlamentarios con el único fin de desacreditar a los inmigrantes ilegales, responsabilizándoles de todos los males que atraviesa el país.

“Francia se quedó helada de dolor y horror ante la noticia del calvario de la pequeña Lola. Una vez más, la sospechosa de este acto de barbarie no debería haber estado en Francia. ¿Qué esperan para actuar para que se detenga de una vez esta inmigración ilegal descontrolada?”, se preguntaba el 18 de octubre Marine Le Pen, principal dirigente de esa agrupación, en un tuit dirigido al gobierno.

Las fuerzas xenofóbicas europeas, cada vez más consolidadas y con más espacios de poder en muchos países, hacen del discurso anti migratorio uno de sus ejes rectores de la lucha política y de su retórica ideológica.

Con un trasfondo tan preocupante como la agudización de la crisis económica interna, este discurso reaccionario identifica al “otro-diferente” como el chivo expiatorio. Aún más: logra convocar electoralmente a sectores sociales populares, los cuales, debido a la gran crisis, coinciden en identificar a ese “otro” como competidor potencial de sus puestos de trabajo y sus subsidios sociales.

El Mediterráneo, inmensa tumba continental de la migración ilegal hacia Europa, cuenta con sus propios funebreros. Son muchos, cada vez más, y destilan xenofobia.

[Fuente: [Rebelión](#)]

Volodymyr Ishchenko

El keynesianismo militar ruso

A finales de septiembre, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció una movilización “parcial” en Rusia al forzar la anexión de cuatro regiones ocupadas del sureste de Ucrania tras la celebración de falsos referéndums. Como muchos han señalado, el borrador rompió un contrato social informal entre Putin y la población rusa en el que el presidente ruso ofrecía un nivel de vida y una estabilidad no elevados, pero al menos tolerables, a cambio de la pasividad política.

Ahora muchos esperan que el servicio militar obligatorio lo cambie todo. Pronto los cadáveres de los soldados mal entrenados, enviados como carne de cañón al campo de batalla para detener la contraofensiva ucraniana, empezarán a ser devueltos a las familias, lo cual provocará la indignación pública. De acuerdo con este razonamiento, esto, junto con el impacto económico de las sanciones, podría dar lugar a protestas populares que harían necesaria una mayor represión.

El Kremlin no podría durar mucho tiempo con la mera coacción. Para conseguir una victoria militar, Putin podría verse tentado a utilizar un arma nuclear táctica o alguna otra opción de escalada salvaje que probablemente le privaría de sus poco fiables aliados en el mundo. De este modo, bien enterraría al mundo entero con él o bien sería destituido por una élite rusa que teme por sus propias vidas.

El problema con este planteamiento es que más represión no es la única opción para Putin y su régimen no se basa exclusivamente en esta. Para entender el otro rumbo que podría tomar es importante observar la dimensión económica y política de los últimos acontecimientos.

Al declarar la movilización “parcial”, Putin hizo hincapié en que los soldados rusos reclutados recibirían el mismo salario que los soldados contratados que han sido la columna vertebral de las tropas rusas en Ucrania hasta ahora. Esto significa que deberían cobrar al menos 3.000 dólares al mes dependiendo del rango militar, bonificaciones, seguro y un generoso paquete de ayudas sociales. Esto supera entre cinco y seis veces el salario medio en Rusia. El reclutamiento de 300.000 individuos, por no hablar de más de un millón de soldados —como algunos medios de comunicación han afirmado que puede ser el objetivo real— requeriría la redistribución de miles de millones de dólares del presupuesto estatal ruso.

Durante las primeras semanas desde el inicio de la movilización se recibieron noticias sobre el caos en las modalidades de pago. Sin embargo, en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia celebrada el 19 de octubre, Putin ordenó que se resolvieran todos los problemas relacionados con los salarios de los militares, lo que demuestra que la elevada remuneración de los soldados movilizados y el apoyo a sus familias es una parte importante de su estrategia.

A esto hay que añadir el flujo de dinero dirigido a la reconstrucción de la arruinada Mariúpol y otras ciudades ucranianas sumamente destruidas en las regiones recién anexionadas del sureste de Ucrania. Actualmente se está contratando a trabajadores de toda Rusia para el proceso de reconstrucción y se les ofrece el doble de lo que ganarían en su país. Un trabajador de la construcción no cualificado recibe más de 1.000 dólares al mes.

Recientemente, el viceprimer ministro ruso, Marat Khusnullin, declaró que más de 30.000 trabajadores rusos están empleados en la reconstrucción de los territorios ucranianos ocupados, y que el Gobierno planea aumentar el número a 50.000-60.000.

En los próximos tres años se espera que el presupuesto ruso destine al menos 6.000 millones de dólares a la reconstrucción de los territorios ucranianos recién anexionados. Queda por ver qué parte no se perderá en manos del capitalismo ruso basado en el tráfico de influencias.

También hay muchos fondos que fluyen hacia el conjunto de la industria militar. Como la demanda de armas y municiones ha aumentado significativamente, el número de trabajadores, así como los salarios, han crecido. El crecimiento del conjunto de la industria militar compensa, al menos en parte, el descenso de la producción en las industrias que dependen de componentes occidentales y que sufren las sanciones. En otros sectores, los empleados que han sido reclutados por el ejército han dejado unos puestos de trabajo que han sido ocupados por nuevos trabajadores, lo que disminuye el desempleo.

En total, el gasto estatal para la “defensa nacional” ya ha aumentado un 43% desde el año pasado y ha alcanzado los 74.000 millones de dólares. Se ha descartado un recorte previsto para 2023 y, en cambio, Moscú planea gastar unos 80.000 millones de dólares. También se espera que el próximo año los gastos de “seguridad nacional y aplicación de la ley” aumenten un 46% hasta alcanzar los 70.000 millones de dólares.

Si observamos todos estos cambios, vemos que en Rusia está tomando forma algo parecido al keynesianismo militar. Millones de rusos movilizados para luchar en Ucrania, empleados en la reconstrucción o en la industria militar, o que participan en la represión de los disturbios en los territorios ocupados y en casa, o que son miembros de su familia, se han convertido en beneficiarios directos de la guerra.

Esto supone, entre otras cosas, la aparición de un ciclo de retroalimentación positiva que antes no existía. La élite gobernante rusa inició la guerra movida por sus propios intereses y únicamente consiguió el apoyo ritual y pasivo de la población rusa.

Sin embargo, esta redistribución de la riqueza estatal a través del esfuerzo militar está creando una nueva base para un apoyo más activo y consciente dentro de un sector importante de la sociedad rusa, que ahora tiene un interés material en el conflicto.

El hecho de que una invasión y ocupación a gran escala de una gran parte del territorio ucraniano requeriría algunos cambios fundamentales en el orden sociopolítico ruso era predecible incluso antes del 24 de febrero. Poco después del inicio de la invasión, escribí lo siguiente: “El Estado ruso tendría que comprar la lealtad de los rusos y de las naciones subyugadas mediante políticas económicas menos conservadoras desde el punto de vista fiscal y más keynesianas. [...] En lugar de la retórica vacía de la ‘desnazificación’, que ha sido claramente insuficiente para despertar entusiasmo por la guerra dentro de la sociedad rusa, esto requeriría un proyecto imperialista y conservador más coherente que conectara los intereses de las élites rusas con los intereses de las clases y naciones subalternas”.

La estrategia del Kremlin de combinar la coerción con el soborno de una parte importante de la

población ha contribuido a que las protestas contra la guerra sean relativamente pequeñas, ya que la mayoría de los rusos han aceptado obedientemente la movilización. El número desproporcionado de personas reclutadas procedentes de las zonas más pobres de Rusia podría tener que ver no sólo con el temor del Kremlin a las protestas de los residentes de las grandes ciudades con mentalidad más opositora, sino también con su cálculo de que los incentivos monetarios que ofrece tendrían más valor para los residentes de las regiones periféricas más desfavorecidas.

La cuestión crucial, por supuesto, es durante cuánto tiempo será sostenible el keynesianismo militar en Rusia. Los ciclos de retroalimentación positiva imperialistas clásicos se basaban en una producción industrial tecnológicamente avanzada. Los territorios y colonias conquistados proporcionaban nuevos mercados y suministraban las materias primas y la mano de obra barata para ampliar aún más la producción.

Los beneficios se repartían entonces con la “aristocracia laboral” en casa, que se beneficiaba de la expansión y el sometimiento imperialistas. El bloque formado por las clases dominantes imperialistas y segmentos de las clases trabajadoras se convirtió en la base de los regímenes hegemónicos e impidió las revoluciones sociales en las metrópolis occidentales.

Es muy cuestionable que Ucrania pueda aportar algo de lo anterior a la economía rusa. Además, muchos esperan que el impacto a largo plazo de las sanciones paralice la economía rusa y conduzca a su primitivización.

Eso deja el flujo de petrodólares como principal fuente de financiación para comprar lealtad. Eso, sin embargo, depende de una reorientación exitosa y de un crecimiento suficiente de las economías de China e India para sostener la demanda de recursos energéticos rusos. No menos importante sería reformar las instituciones estatales rusas para gestionar los ingresos de forma más eficiente en lugar de perderlos a causa de la incompetencia y la corrupción.

Pero si el régimen ruso es capaz de transformarse y fortalecerse en lugar de derrumbarse en respuesta al desafío existencial, significa que Rusia podría estar preparada para una guerra más larga y devastadora.

El keynesianismo militar ruso contrasta enormemente con la decisión del Gobierno ucraniano de atenerse a los dogmas neoliberales de privatización, bajada de impuestos y desregulación laboral extrema, a pesar de los imperativos objetivos de una economía de guerra. Algunos economistas occidentales de alto nivel han llegado a recomendar a Ucrania políticas que constituyen lo que el historiador británico Adam Tooze ha denominado “guerra sin Estado”.

En una larga guerra de desgaste, tales políticas dejan a Ucrania aún más dependiente, no solo de las armas occidentales sino también del flujo constante de dinero occidental para sostener la economía ucraniana. Dependier fundamentalmente del apoyo de Occidente puede no ser una apuesta segura, sobre todo si tu adversario está pensando en el largo plazo.

[Fuente: [Ctxt](#). Volodymyr Ishchenko es investigador asociado del Institute of East European Studies, de la Universidad Libre de Berlín. Este artículo se publicó originalmente en [Aljazeera](#). Traducción de Paloma Farré]

Rafael Poch de Feliu

El éxito chino determina la tensión militar

Desde hace algún tiempo y con una periodicidad aproximada de una vez por mes, fuerzas aeronavales de Estados Unidos entran, demostrativa y provocativamente, en el estrecho de Taiwán, mientras que las fuerzas chinas responden con diversos movimientos militares que van desde incursiones aéreas hasta lanzamiento de misiles. La conclusión es clara: no solo estamos en una “guerra fría” en Asia Oriental, sino que el peligro de un conflicto militar abierto es muy serio. Si bien nadie lo desea, muchos “expertos” (frecuentemente vinculados al complejo militar-industrial) lo consideran “inevitable”, y todos se acercan físicamente a dicho conflicto por el mero hecho de poner a sus fuerzas armadas permanentemente en contacto.

Como el último documento oficial de la doctrina militar de Estados Unidos, recién publicado, relaciona directamente en un mismo paquete lo que ocurre entre Ucrania y Rusia con el pulso con China, y estima que esta es la dimensión principal de todo ello, es obligado preguntarse cómo hemos llegado a esto. ¿Qué ha pasado?

Para responder hay que observar el marco general de varias décadas de “éxito chino”.

El éxito

La integración de China en la globalización, entendida en este caso como el seudónimo del dominio mundial de Estados Unidos, contenía implícitamente como consecuencia la conversión de China en vasallo de Occidente.

El propósito era presionar a China para que aplicara las reformas estructurales definidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, abriera totalmente sus mercados a las empresas occidentales y que la integración de las élites chinas en su globalización acabara dando lugar a una forma de gobierno subalterno más aceptable para Occidente que la del Partido Comunista Chino.

Para comprar un solo avión Boeing a Estados Unidos, China debía producir cien millones de pares de pantalones.

No estaba previsto que jugando en el terreno diseñado por otros, China torciera aquel propósito. El “milagro chino” fue usar una receta occidental diseñada para su sometimiento para fortalecerse de forma autónoma e independiente. Lo hizo poniendo condiciones y restricciones a la entrada del capital extranjero en China y, sobre todo, manteniendo un control bien firme de las riendas del proceso. Lo consiguió porque, gracias al bajo precio y alta eficacia de la mano de obra en China, los capitalistas y empresarios extranjeros hicieron enormes beneficios en la “fábrica del mundo” y eso apaciguó y moderó a sus gobiernos.

China aprovechó esa integración en la globalización para desarrollarse, aprender y adquirir tecnología.

Los resultados están a la vista y son extraordinarios en todos los órdenes; en términos de

incremento en la esperanza media de vida, eliminación de pobreza, PIB (recordemos que en 1980 el peso de China en el PIB global era de 2,3% y hoy es de 18,5%), instrucción, ciencia y tecnología, fortaleza militar, grandes empresas, sin olvidar, naturalmente, el gran progreso en dañinas emisiones ambientales. Todo eso entrará en los manuales de historia y economía del futuro.

Ante este resultado, un conocido comentarista americano (Fareed Zakaria, de la CNN) expresó así su desconcierto: “La estrategia produjo complicaciones y complejidades que desembocaron en una China más poderosa que no respondía a las expectativas occidentales”, es decir, a la expectativa de que, en el proceso, China se convertiría en subalterna.

Todo esto ocurrió en los treinta años anteriores, pero la crónica de los últimos años añadió aún más ansiedad a la situación. La crisis financiera global de 2008, genuino detritus de la economía de casino con centro en Estados Unidos, ofreció la primera gran evidencia de debilidad occidental y de los peligros que contiene la no regularización del sector financiero, así como el hecho general de que el capital mande sobre los gobiernos y no al revés. China gobernó la crisis mucho mejor, como había pasado ocho años antes con el estallido de la burbuja puntocom.

Antes, las desastrosas consecuencias de las guerras que se han encadenado desde los atentados del 11-S de 2001, con más de tres millones de muertos, unos cuarenta millones de desplazados y varias sociedades y Estados destruidos, hicieron patente una gigantesca irresponsabilidad por parte de la primera potencia mundial. La retirada de Estados Unidos del acuerdo sobre cambio climático y la mala gestión de la crisis de la pandemia en Occidente (en comparación, no solo con China, sino con el conjunto de Asia oriental) incrementaron esa evidencia de desbarajuste. Así que, ante este panorama, la respuesta de Estados Unidos ha sido la presión militar y las sanciones.

La respuesta

Desde la normalización de relaciones chino-soviéticas en mayo de 1989, China disfrutó de treinta años de tranquilidad exterior que le permitieron concentrarse en su desarrollo.

Autoeliminada la URSS como gran adversario, en los noventa, la mirada de los estrategas de Washington se empezó a dirigir a China, pero el 11-S neoyorquino colocó en el centro al terrorismo yihadista (otro resultado de la mala política anterior que se volvía contra sus autores) y ofreció a China una prórroga de diez años: diez años más de relativa tranquilidad.

En 2012, Obama anuncia el *Pivot to Asia*: trasladar al Pacífico el grueso de la fuerza militar aeronaval de Estados Unidos, para estrechar el cerco militar alrededor de China.

Los chinos reaccionaron poniéndose el cinturón de seguridad: fortaleciendo la autoridad del partido en todos los órdenes y el liderazgo personal en su dirección colectiva.

Pero, sobre todo, en 2013 China anunció la Nueva Ruta de la Seda (Belt & Road Initiative), una ambiciosa estrategia global para salir del cerco y exportar sobrecapacidad. Es decir, una estrategia a la vez geopolítica y económica.

La Nueva Ruta de la Seda es un esfuerzo de varias décadas de duración con una financiación

astronómica (de 4 a 8 billones de dólares), encaminado a establecer una red geoeconómica internacional de apoyo que integre económica y comercialmente al 70% de la humanidad a través de Eurasia. Sin necesidad de recordar las tesis de Halford Mackinder que ahora se desempolvan, eso erosiona, necesariamente, el poder mundial de Estados Unidos en el hemisferio. También complica sobremanera cualquier propósito de cerco a una potencia que, sin ser “amiga”, ni “aliada”, ni “líder de bloque”, es socia positiva de casi todas las naciones.

El objetivo implícito de la Nueva Ruta de la Seda, en palabras de Henry Kissinger, es nada menos que “trasladar el centro de gravedad del mundo desde el Atlántico al Pacífico”. A su lado el histórico Plan Marshall queda como algo pequeño...

Guerra fría

Con Donald Trump el cambio de clima fue brusco, en especial cuando en su discurso de julio de 2020 el secretario de Estado, Michael Pompeo, apeló abiertamente al cambio de régimen en China, señalando directamente al Partido Comunista Chino como el “principal enemigo de Estados Unidos”.

Pese a la inusitada división del establishment americano, la política de sanciones comerciales y presión militar contra China tiene un amplio consenso en las dos facciones del régimen de Estados Unidos.

Esto ya es una guerra fría abierta, con fuertes campañas de propaganda y demonización del adversario. Con Biden asistimos a una escalada de la tensión con Taiwán, principal productor mundial de semiconductores, en el centro del escenario.

Desde 1978 el reconocimiento del principio de “una sola China”, es decir, que Taiwán forma parte de ella, así como la Taiwan Relations Act (TRA) de 1979, fueron el fundamento de la relación bilateral en ese ámbito.

El contenido de la TRA era ambiguo: aunque la isla pertenecía a China, se contemplaba el suministro de “armas defensivas” a Taiwán y se decía que cualquier intento de que Pekín resolviese por la fuerza la secesión sería motivo de “grave preocupación”. Es decir: no se decía “ayudaremos militarmente a Taiwán si hay conflicto”.

Ahora sí se dice. Lo ha dicho Biden cuatro o cinco veces. Además, toda la acción de EE. UU. dibuja un provocador replanteamiento que John Ross expone así en *Tricontinental* (publicado en castellano por [El Viejo Topo](#)):

- a) Por primera vez desde el comienzo de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, Biden invitó a un representante de Taipéi a la toma de posesión del presidente de EE. UU.
- b) La presidenta del Congreso, Nancy Pelosi —la tercera funcionaria estadounidense de mayor rango en el orden de sucesión presidencial— visitó Taipéi el 2 de agosto de 2022.
- c) Estados Unidos ha pedido la participación de Taipéi en Naciones Unidas.

- d) Estados Unidos ha intensificado la venta de armas y equipo militar a la isla.
- e) Han aumentado las delegaciones estadounidenses que visitan Taipéi.
- f) Las Fuerzas Especiales de EE. UU. han entrenado tropas terrestres y de la marina de Taiwán.
- g) Estados Unidos ha incrementado su despliegue militar en el mar de China Meridional y ha enviado regularmente buques de guerra a través del estrecho de Taiwán.

Al igual que en Ucrania con su integración de facto en la OTAN y su conversión en un ariete militar contra Rusia desde 2014, este fin de la ambigüedad con Taiwán supone que Washington cruza una línea roja histórica de China. Y como en Ucrania, en el entorno geográfico más inmediato del adversario. Además, Estados Unidos está presionando a otros países del entorno chino: Australia, India, Japón, Corea del Sur, (también Inglaterra y la propia UE) a sumarse a las sanciones y coaliciones militares, de la misma forma en que ha hecho en Europa con Ucrania.

Igual que en Ucrania, en la crisis de Taiwán no hay interés en negociaciones para resolver las tensiones con un paso atrás, ni para prevenir choques militares accidentales, ni para reducir riesgos en general.

La estrategia de seguridad americana afirma que la guerra de Ucrania, y la debilidad de Rusia que aprecia en ella, confirman que China representa “la principal amenaza, como único competidor dotado del suficiente poder económico, militar y político necesario para replantear el orden internacional”. Para ello llama a revitalizar la red de alianzas que reste capacidad de maniobra a China. Eso es lo que se está haciendo.

La guerra de Ucrania que, desde luego, China no quería, está dirigida a impedir militarmente la integración euroasiática, que es un eje fundamental de la gran estrategia china de la Nueva Ruta de la Seda. El atentado contra los gasoductos del Báltico son la mejor ilustración de esa acción por romper nexos vitales y debe ser leído en ese contexto. Desde ese punto de vista, Ucrania forma parte y es prolegómeno de la guerra fría actual contra China en Asia Oriental.

De momento, y aunque ese vector pueda presentar problemas en el futuro, se ha logrado convertir a la Unión Europea en vasallo, e integrarla en esa guerra fría contra su principal socio comercial (China), lo que perjudica gravemente a su propia economía.

La conciencia de todo ello explica la posición de China en esta guerra, su postura de que “la seguridad europea debe ser decidida por los europeos” (Xi Jinping a Olaf Scholz en mayo), y su oposición a las sanciones contra Rusia, meridianamente expuesta en abril por la comentarista de la televisión china, Liu Xin: “Nos dicen, ayúdame a luchar contra tu socio ruso para que luego pueda concentrarme mejor contra ti”.

“La era de la posguerra fría ha concluido definitivamente y está en marcha una competición entre las principales potencias para dar forma a lo que vendrá a continuación”, escribe el presidente Biden en la introducción al documento Estrategia de seguridad nacional de 2022, recién publicado. “China es el único competidor con intención de redefinir el orden internacional que dispone de las capacidades para hacerlo”, dice.

La elocuente Ursula von der Leyen, la “presidenta americana de Europa”, según la revista estadounidense *Politico*, reconoce la unidad de todo el paquete y la beligerancia europea en él cuando afirma que “la guerra de Ucrania no es solo una guerra europea, es una guerra por el futuro del mundo por lo que el ámbito de Europa solo puede ser el mundo entero”.

[Fuente: [Ctxt](#)]

Nacho Casado

Noviembre 2022: el cinismo toca techo

Un año más, las partes acuden a su [cita](#) con la mochila repleta de buenas intenciones, promesas grandilocuentes y proyectos salvíficos. Este será un encuentro histórico, qué duda cabe —al menos tanto como los 26 anteriores. [COP27: Trabajar en beneficio de las personas y el planeta](#): un eslogan imbatible. Aun esperando una ambición climática tan tibia como en ediciones pretéritas, cabe destacar, de esta conferencia, un par de características singulares.

En primer lugar, su ubicación. Sharm el-Sheij, en la costa del mar Rojo, es una ciudad balneario egipcia que, sin duda, ofrecerá a los delegados internacionales abundantes espacios de asueto entre sus playas de arena protegidas y sus animados paseos costeros. Si ampliamos el foco, Egipto destaca, según [Amnistía Internacional](#), por su “terrible historial de represión de las organizaciones de la sociedad civil y de castigo al activismo de derechos humanos y al periodismo independiente”. Su ministro de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, [anunciaba](#) recientemente que se destinarán “unas instalaciones adyacentes al centro de conferencias” para que los activistas expresen sus opiniones y manifiesten sus protestas. No hace falta mucha perspicacia para ver en esas declaraciones un tosco intento de lavar la imagen de autoritarismo y censura que constituye la norma en este país mediterráneo. ¿Activistas, protestas, libre opinión y sociedad civil? Por supuesto, estamos en el siglo XXI. Pero bien acotados y dentro del redil. Y cuidado con decir alguna verdad que incomode al régimen. ¿Cuál sería el resultado? El caso de Alaa Abd El-Fattah es ilustrativo: el pasado 12 de septiembre, [The Guardian](#) informaba de sus palabras de alerta a su familia; tras seis meses de huelga de hambre, podría morir en prisión. Activista político y figura destacada en las manifestaciones de la Primavera Árabe, ha cumplido condena de cinco años por participar en una protesta pacífica en 2013 y está de nuevo encerrado bajo la acusación de difundir noticias falsas. Alaa Abd El-Fattah forma parte de la larguísima lista de manifestantes, figuras políticas, periodistas y abogadas de derechos humanos detenidos y sometidos al trato brutal de las autoridades egipcias bajo el mandato de Abdel Fatah al Sisi. La comunidad internacional no parece interesada en las numerosas violaciones de derechos humanos de este régimen, ni siquiera cuando la víctima es de “los nuestros”: [en 2016](#) el cuerpo del académico italiano Giulio Regeni aparecía mutilado a las afueras de El Cairo. Como socio estable para la élite euroamericana, la vigilancia de los derechos humanos pasa en Egipto a un segundo plano.

La otra característica singular tiene que ver con el patrocinio: Coca-Cola destaca como el gran gigante corporativo detrás de este evento. La cumbre sobre el cambio climático de Naciones Unidas es patrocinada por —según el informe [Break Free From Plastic](#)— el mayor productor de plástico (junto a PepsiCo) del mundo —[Tearfund](#) estima que la compañía produce 108.000 millones de botellas de plástico cada año— y uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero —la propia producción del plástico tiene una importantísima huella de carbono, a lo que se suma el resto de su actividad industrial y logística—. La presencia de las grandes empresas en las cumbres climáticas ha sido una constante, con el *lobby* del gas y el petróleo jugando un papel protagonista —en la pasada cita en Glasgow, este sector hubiera sido la [mayor delegación](#) si fuera un país—. No obstante, la presencia de Coca-Cola como actor principal en la COP27 constituye una sonora bofetada en la conciencia de todo aquel que sienta

un mínimo de apego por la salud de su entorno —y por su propia integridad—.

Así las cosas, este noviembre que nos recibe con [más de 1,1 °C](#) de aumento de temperatura media global con respecto a los niveles preindustriales —y situaciones como el estrés hídrico, temperaturas anómalas, derretimiento de hielos permanentes, cosechas malas y escasas, y todo tipo de fenómenos meteorológicos extremos— y con ese [objetivo](#) de 1,5 °C que ya nadie da por alcanzable, nos regalará una cumbre plagada de *marketing* verde y brindis al sol, en un mayúsculo ejercicio de imprudencia, soberbia e indiferencia a la realidad de la emergencia climática, medioambiental y energética (emergencia incluso [formulada](#), en una muestra de cinismo insoportable, por las mismas élites que dicen representarnos).

Este mes acogerá, también, el más bochornoso de los eventos deportivos que se recuerdan. Interrumpiendo las competiciones nacionales (algo que solo había ocurrido durante las guerras mundiales y la pandemia de la covid), el mundial de fútbol masculino de Catar comenzará su andadura con el beneplácito de organismos internacionales, gobiernos y medios de comunicación, sin importar los abusos laborales a trabajadores migrantes, las restricciones a la libertad de expresión y la discriminación que sufren [mujeres](#) y miembros de colectivos [LGTBI](#). Desde Nepal, India, Bangladesh, Filipinas, Pakistán y Sri Lanka (entre otros) han llegado trabajadores a Catar para construir los estadios que lucirán radiantes en las pantallas de todo el mundo. Este ambicioso programa de construcción —en un proceso marcado desde sus inicios en 2011 por la [acusación](#) de sobornar oficiales de la FIFA para obtener los derechos de acoger el mundial— ha supuesto la contratación de al menos [30.000](#) trabajadores extranjeros. [Qatar, la Copa Mundial de la vergüenza](#): así titula Amnistía Internacional la investigación que documenta el trabajo forzoso, los pasaportes confiscados y las condiciones de precariedad de trabajadores que cobran, de media, 220 dólares al mes. El año pasado *The Guardian* confirmaba, a partir de contactos con diferentes embajadas, la muerte de [6.750 trabajadores](#) migrantes en Catar desde 2010 —probablemente la cifra real sea mucho mayor. La vergüenza en cuanto a la vulneración de los derechos humanos tiene su correlato en el derroche de energía y recursos naturales. El primer mundial —autodenominado— “neutro en carbono” ha necesitado construir siete nuevos estadios. Carbon Market Watch concluye, en su [informe](#), que el evento tendrá una gran huella de carbono, y que la neutralidad de carbono no es creíble. Reconoce, además, el controvertido carácter del concepto “neutralidad de carbono”, la vaguedad de las supuestas “compensaciones” y la incertidumbre respecto a la posibilidad y el modo en que todo ello pudiera aplicarse a eventos específicos como este. En lo que toca al uso del agua, se utilizarán al menos [10.000 litros](#) diarios para cada uno de sus estadios —agua desalinizada a través de procesos con un altísimo coste energético, cuyos residuos con elevados niveles de sales y tóxicos suponen una agresión letal para el ecosistema marino—.

Mientras, nuestro gobierno nos entretiene con la fantasía del [hidrógeno verde](#), una tecnología aún por desarrollar y con múltiples obstáculos para su implementación (ni el hidrógeno es una fuente de energía, sino solo un vector que necesita de un proceso energético anterior, ni es “verde”, ya que la inmensa mayoría del hidrógeno actual es generado a partir de gas o derivados del petróleo).

Bla, bla, bla... Huidas hacia delante, con una confianza ciega e inquebrantable en la tecnología y la “innovación”, que pretenden seguir garantizando fastuosos espectáculos, movilidad acelerada y un sinfín de ofertas, productos y servicios. Pero es hora de despertar y abandonar el plácido

sueño del “lo quiero todo y lo quiero ya”. Los picos de producción de recursos energéticos (la caída de al menos un [15%](#) en la producción de diésel es el ejemplo más contundente) y minerales ya están aquí. Algunos ya han comenzado a despertar, aunque muchos otros ni siquiera han tenido nunca la ocasión de saborear ese sueño efímero: más de [700 millones](#) de personas sufren hambre, y el 55% de la población mundial, según el [informe](#) de la riqueza global de Credit Suisse, apenas acumula el 1,3% de la riqueza (con menos de 10.000 dólares per cápita).

La menguante disponibilidad mineral y energética tendría que situarnos de inmediato frente al enorme reto de gestionar con criterio justo lo que es cada vez más exiguo. En todo caso, la avalancha de desastres que acecha tras el desorden climático —siendo las alteraciones en las [corrientes oceánicas](#) y el [jet stream](#) potencialmente desestabilizadoras del clima global— y la menor resiliencia de la biosfera —pérdidas enormes y crecientes de [biodiversidad](#)— debieran ser más que suficientes para abandonar por completo un sistema irracional y macabro, el capitalista, cuyo único timón es el crecimiento a cualquier precio.

Por increíble que parezca, no es esa la hoja de ruta de nuestras sociedades. [Dieciséis activistas](#) de Rebelión Científica han sido detenidos en Alemania. La represión es la recompensa para quienes consideran que la vida es más importante que el mercado. Europa es capaz de enarbolar la bandera de la acción climática al tiempo que encarcela a profesionales de la ciencia que se atreven a hablar claro, a decir, mediante la desobediencia civil no violenta, que no podemos permitirnos desviar la atención ni un minuto más de la catástrofe en ciernes, que necesitamos actuar con la contundencia y la premura que la emergencia medioambiental demanda.

Desde Iruña reclamamos la inmediata puesta en libertad sin cargos de estas personas, y reivindicamos sus acciones como imprescindibles para espolear las conciencias de representantes políticos y del pueblo soberano. En noviembre saldremos a la calle en un esfuerzo colectivo para afrontar esta emergencia con la seriedad, la madurez y la justicia que merece. La Cumbre Alternativa por el Clima hará de Iruña un espacio libre, creativo y de honesta acción climática, un espacio de lucha y acción colectiva. En comunidad, de abajo a arriba, con solidaridad, entusiasmo y alegría: no podemos concebir otro modo de garantizar vidas dignas y ricas para todos y todas.

[Fuente: [Ctxt](#). Nacho Casado es miembro de Extinction Rebellion Iruña]

Juan Íñigo Ibáñez

Millonarios contra la humanidad

Entrevista a Douglas Rushkoff

En algún momento de 2017, cinco millonarios provenientes del escalón superior del mundo de las inversiones tecnológicas contrataron al teórico de los medios y pionero de la cibercultura Douglas Rushkoff (Nueva York, 1961) para que diera una de sus habituales charlas sobre *blockchain*, metaverso o el futuro general de la tecnología.

Nombrado en 2013 como «uno de los diez intelectuales más influyentes del mundo» por el MIT, Douglas Rushkoff es un escritor, documentalista y activista que desde principios de los 90 ha venido estudiando la autonomía humana en la era digital. Autor de más de veinte libros (entre ellos [Present Shock](#), [Throwing Rocks at the Google Bus](#), [Program or Be Programmed](#), [Life Inc](#) y [Media Virus](#)), también es profesor de Economía Digital y Teoría de los Medios en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en Queens, y conductor del podcast semanal «Team Human».

Al percatarse que la limusina que lo trasladaba se adentraba durante horas por el desierto hacia la nada, Rushkoff intuyó que la presentación que había preparado, probablemente, no le serviría de nada: «¿Qué tipo de ricos manejarían tan lejos del aeropuerto para asistir a una conferencia?» pensó. Tenía razón: tras llegar a un resort en algún lugar indeterminado del desierto, los cinco hombres comenzaron a bombardearlo con preguntas repetitivas en torno a un mismo tema: ¿cuál sería la mejor manera de aislarse del peligro inminente de una extinción masiva?

Las fantasías aislacionistas que estos millonarios le transmitieron fueron su encuentro de primera mano con «la mentalidad», un conjunto de ideas tan bizarras como reales que una tecnoélite ha venido desarrollando desde hace décadas con el fin de escapar de un supuesto colapso global (subidas del nivel del mar, migraciones masivas, pandemias, pánico nativista o agotamiento de los recursos), retirándose a sus islas privadas o a sus búnkeres de lujo.

Se trataría —como Rushkoff luego escribió en un viralizado ensayo para *Medium*—, de un estado de ánimo subyacente en Silicon Valley, cuyo reflejo son las pretensiones de Elon Musk [por colonizar Marte](#), los intentos de Peter Thiel por [revertir el proceso de envejecimiento](#) o los denodados esfuerzos del director de ingeniería de Google, Ray Kurzweil, por «cargar su mente en una supercomputadora» (al mejor estilo *Years and Years*).

Una filosofía para ganadores lo suficientemente cautivante —por lo aterradora— como para que Rushkoff escribiera «Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires», un ensayo en el que se sumerge en el ecosistema mental de una minoría de magnates con aspiraciones de «élite cognitiva» que ha reducido el progreso tecnológico a un videojuego de suma cero en el que solo unos pocos logran encontrar la escotilla de salida, mientras la mayoría se queda lidiando con las externalidades —generalmente catastróficas— de su riqueza. «Para ellos, el futuro de la tecnología se trata realmente de una sola cosa: escapar».

Juan Íñigo Ibáñez, periodista independiente y colaborador de *Revista Jacobin*, conversó con Rushkoff sobre estos y otros temas.

* * *

¿Por qué estos millonarios invitarían a un teórico marxista de los medios para que los oriente sobre cómo y dónde instalar sus búnkeres ante una posible catástrofe global?

Me preguntaba muchas de estas cosas mientras todo sucedía. Son lo suficientemente inteligentes como para saber que no soy la persona adecuada a la que preguntarle sobre la infiltración de moho en los paneles de agricultura vertical o los requisitos de voltaje de las vallas eléctricas. Durante los primeros minutos, realmente pensé que me estaban «engañando», que habría una cámara oculta y que era una broma elaborada para ver cómo reaccionaba o si les pedía un lugar en uno de sus búnkeres.

Normalmente, los inversores tecnológicos ricos me invitan a hablar con ellos como una forma de autocastigo. A veces me siento como si cumpliera la función de una dominatriz intelectual, reprendiéndolos por la forma en que extraen dinero de los mercados y externalizan el dolor, la pobreza y la contaminación a todos los demás para acumular enormes cantidades de riqueza que nunca utilizarán.

¿Qué hizo que esa vez fuera diferente?

Esta vez fue más bien como si trataran de demostrarme por qué era necesario todo este acaparamiento. Según ellos, el mundo se estaba acabando. Así que tomé como misión convencerlos de que su táctica era errónea, pues no podían ganar suficiente dinero como para aislarse del daño que estaban haciendo al obtenerlo de esa forma. Con el tiempo, se volvería en su contra. Incluso los Navy Seals que contratarían como guardias de sus refugios terminarían por tomar el control de sus islas fortificadas.

Pero si estos tipos tienen tanto dinero, ¿por qué están tan asustados?

Es precisamente porque tienen tanto dinero que están asustados. ¿Sabes lo que hicieron para conseguirlo?

¿Cómo definirías «La mentalidad» en pocas palabras?

En simple: es la creencia de que con suficiente dinero y tecnología se puede escapar del daño creado por todo ese dinero y esa tecnología. En la era industrial, dicho escape se lograba simplemente superando el daño y colonizando nuevos territorios, esclavizando a la gente y tomando sus recursos. Ahora...

¿Qué lo hace diferente ahora?

Hoy, en la era digital, intentan escapar operando a un nivel por encima del resto de nosotros. Como Peter Thiel, queriendo ir (como dice el título de su libro) «de cero a uno» y dirigiendo sus negocios hacia «un orden de magnitud» por encima de la competencia. O Mark Zuckerberg, deseando volverse «meta», o instrumentos financieros como los derivados, o Bezos y Musk

volando al espacio. Como les sugirió Stewart Brand, «somos como dioses y más vale que seamos buenos en eso».

¿Qué rol juega la tecnología dentro de todo ese esquema?

Ven la tecnología como una vía para crear un útero seguro y predecible a su alrededor. Pueden construir una burbuja y recibir lo que necesiten. Con el tiempo, ven a los demás como el enemigo. En la mente de un multimillonario tecnosolucionista, los seres humanos son el problema y la tecnología es la solución. Así que, a medida que la situación humana empeora (cambio climático, autoritarismo, etc.), construyen más muros entre nosotros y ellos. Muros físicos, muros tecnológicos y muros financieros. Como resultado, se desconectan de la comunidad y del apoyo social y emocional que se necesita en tiempos difíciles. Su enfoque antisocial de la supervivencia no funciona, ni a corto ni a largo plazo.

Aunque «la mentalidad» se basa en un materialismo científicista acérrimo, sugieres que las fantasías transhumanistas de esta tecnoélite tiene mucho de culto gnóstico o de «religión *nerd*»...

Tienen una pretensión de ateísmo acérrimo, pero su modelo del mundo es sacado directamente de la mitología cristiana. Pero en lugar de que Jesús resucite, son los técnicos quienes «trascienden» la crisálida de la materia para convertirse en conciencia pura. Estos hombres hablan de «emergencia» y «complejidad», pero realmente no entienden esos conceptos. Asumen que, debido a que las palabras provienen de la comunidad científica, deben describir cosas reales. Pero cualquier científico real te explicará que estos conceptos siguen siendo solo metáforas de cosas que, en realidad, no entendemos.

La teoría de sistemas es una gran manera de describir la realidad; pero la realidad no es, en sí misma, un sistema. Estas personas confunden el mapa con el territorio. Pero ello se debe a que no quieren vivir en el mundo real, con mujeres y personas de color y elementos aterradores de la naturaleza. Quieren vivir en el mapa. Y a eso es lo que llamamos religión.

Leí que una de las primeras cosas que enseñan en Singularity University es que los grandes problemas de la humanidad son también «grandes oportunidades de negocios»...

Sí, bueno, Naomi Klein llama a eso «capitalismo del desastre». El problema con «la mentalidad» de los hermanos multimillonarios tecnológicos —la misma que tiene la gente Singularity University— es que todas las soluciones deben funcionar a escala global. Son industriales, en realidad. Piensan en los modelos establecidos por los grandes monopolios autorizados, como la East India Trading Company. Así que quieren proyectos gigantes, universales, de talla única o «disparos a la luna» que cuesten mucho dinero y les permitan, al mismo tiempo, ganar mucho dinero.

¿Por ejemplo?

Proyectos como el «Gran Reinicio» del Foro Económico Mundial tipifican este enfoque de respuesta a las catástrofes. Son oportunidades de negocio y grandes razones para hacer más capitalismo en lugar de retroceder. El decrecimiento no es una opción. La única forma de avanzar es salvar el mundo mediante el crecimiento de nuevos mercados. La transición a la energía verde

debe ser lo más cara y extractiva posible.

¿Qué piensas de iniciativas de recuperación ecológica como el Green New Deal?

No mucho. Me alegro de que la gente quiera pasarse a las energías renovables y que haya empresas que ofrezcan alternativas a las grandes petroleras. No podemos seguir quemando el planeta a este ritmo. Pero la energía es complicada y nos engañamos si pensamos que podemos seguir gastando energía al mismo ritmo. No podemos pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables de la noche a la mañana. La cantidad de energía necesaria para construir todas las baterías y paneles solares nos mataría. La gente tiene que usar las cosas que tiene y reemplazarlas lentamente. Pero si sustituimos lentamente, nos mata.

Por eso las energías renovables son en realidad solo una gran parte de un compromiso mayor con la cordura energética. La otra parte implica iniciativas como el decrecimiento. Puede que simplemente tengamos que aceptar que avanzar hacia un uso sostenible de energía no alimentará los objetivos de crecimiento exponencial del Banco Mundial. Estos nuevos acuerdos intentan sostener los objetivos de crecimiento exponencial del capitalismo y, al mismo tiempo, sostener los ecosistemas del planeta.

¿Entonces?

Hay que sacrificar las necesidades del mercado. No son reales. Solo son artefactos de un modelo económico inventado por los primeros reyes del Renacimiento para impedir el ascenso de la clase media. La ecología sostenible requiere una economía sostenible.

También señalas que la ansiedad de estos millonarios por dejarnos a todos atrás los convierte, de hecho, en los verdaderos «perdedores» de la economía digital...

Bueno, los ultrarricos compiten utilizando la lógica de una partida de póquer. Cada uno quiere ser el último hombre en pie y obtener todas las fichas sobre la mesa. Dominio total. En términos económicos, esto significa alcanzar un número Gini de uno. Para perseguir ese dominio total —o lo que los hermanos tecnológicos llaman «autosoberanía»—, deben colonizar y controlarlo todo, ¡incluso a sí mismos! Y son conscientes de que las personas y los lugares que están destruyendo no están contentos con ello. Temen a las repercusiones, por lo que siguen moviéndose, construyendo muros y adentrándose en fantasías de aislamiento para escapar de las externalidades.

¿Qué vínculos observas entre las fantasías transhumanistas de Elon Musk o Peter Thiel y las teorías conspirativas de movimientos como QAnon?

En pocas palabras, la gente de QAnon y otros extremistas de extrema derecha son quizás los únicos que se toman en serio a estos tecnólogos. Escuchan los pronunciamientos de los hermanos tecnológicos detrás del Gran Reinicio y otros planes maestros para resolver los problemas del mundo —con la genómica o las cadenas de bloques—, y se asustan. Si estos planes fueran posibles, todos deberíamos estar asustados. Pero en lugar de tranquilizar a esas personas, los multimillonarios como Musk y Thiel estimulan sus fantasías. Estos tipos son aceleracionistas en el sentido de que quieren provocar el colapso de la civilización actual para poder construir una nueva. Como en un juego de Sim City. Es muy cínico.

Muchos de estos multimillonarios han comenzado a viajar a Sudamérica para tener experiencias con psicodélicos como la ayahuasca. ¿Cuál es la idea de darle un barniz espiritual a sus estrategias comerciales?

Bueno, un hermano tecnológico bajo ácidos sigue siendo solo un hermano tecnológico. El *set and setting* (la frase es de Timothy Leary) con el que abordan el viaje psicodélico es uno de comando y control. Así que van al festival Burning Man o a Sudamérica y toman ayahuasca o alguna otra sustancia química y pueden tener un momento de claridad, en el que oyen al espíritu de la tierra susurrándoles que está en problemas.

Pero a medida que salen del viaje, en lugar de entregarse a la naturaleza y a la vida, deciden que ellos son los elegidos. Y se les ocurren un montón de softwares nuevos para resolver los problemas de la tierra: soluciones gigantescas, excesivamente simplificadas, infantiles, al estilo Lego, para «problemas» que, realmente, no quieren ser resueltos. No *resuelves* la vida. Te *rindes* a la vida.

¿Están estos tipos mirando a Sudamérica para construir sus refugios? ¿Qué rol crees que jugará la región a medida que el «evento» que ellos esperan se acerque?

Amigo, estos tipos no están pensando en América Latina. Para ellos, la región solo representa refugiados climáticos y por eso apoyaron el muro de Trump que bloquea a Estados Unidos de México. Su único interés activo en América Latina sería la especulación inmobiliaria en el extremo sur de Chile y Argentina, y sus esperanzas de utilizar el bajo continente como puerta de entrada a la Antártida postpermafrost.

Este tipo de élites solía fijarse en América Latina por su mano de obra y sus recursos naturales, pero los modelos climáticos actuales elaborados por los bancos y las empresas de inversión para los ricos muestran que la mayor parte del continente se está volviendo inhabitable debido al cambio climático. Así que hoy en día pueden tomar y utilizar lo que hay, bajo el supuesto de que no habrá mañana.

Algunos gobiernos han comenzado a implementar programas educativos que apuntan a lograr la denominada «transformación digital». ¿Qué implicancias tiene, a tu juicio, adoptar ese tipo de agenda?

Aquí, en Estados Unidos, las escuelas y universidades públicas fueron cooptadas hace ya mucho tiempo por las grandes compañías. Los directores de escuelas y universidades preguntan a los jefes de las empresas qué habilidades necesitan que aprendan sus alumnos. La escuela solía ser

un espacio donde las personas se enriquecían; ahora, en cambio, es una vía para que las empresas externalicen los costos de capacitación de los trabajadores. No es un respiro de la máquina; es la máquina.

La transformación digital es la misma agenda traducida al dominio del código. Tiene el triple propósito de vender tecnología a las escuelas, vincular las experiencias de niños y niñas a la hora de aprender y hacer a la tecnología vendida por esas empresas y capacitarlos para un espacio de empleo que también estará obligado a incorporar determinadas plataformas. Si usas GoogleDocs en la escuela primaria, tus futuros empleadores también querrán usarlo. Adoptar cualquier tipo de agenda «a ciegas» es peligroso. Pero adoptar esta, en particular, significa que le quitamos importancia a las humanidades y a las artes liberales, perdiendo la capacidad de pensar críticamente sobre nuestro entorno.

¿Qué podemos hacer frente ante esta injerencia casi total de la técnica y la tecnología en nuestras vidas?

Creo que tenemos que dejar de suscribirnos a sus plataformas y a sus formas de vida. Es muy sencillo. Sal de Facebook y de tu teléfono. Deja de comprar mierda en Amazon. Deja de comprar mierda por completo. Ayuda a tus vecinos para que no necesiten comprar tanto, especialmente a los más pobres. Diablos, incluso podrías conocer a tus vecinos.

Europa está por delante de Estados Unidos en la regulación de las grandes tecnológicas. Tiene que mantener esa ventaja. Sus economías no están tan ligadas al éxito de Google o Facebook, así que son libres de frenarlas. Y luego aplican las mismas políticas para todos. Pero también podríamos ver cómo retirarnos del aula automatizada, enseñando a través de la tecnología y dejando que estas empresas se regulen a sí mismas. Como personas, se trata simplemente de prestar más atención a cómo nos hacen sentir realmente estas tecnologías, tanto a corto como a largo plazo.

A comienzo de los noventa fuiste unos de los primeros en celebrar las potencialidades colaborativas de internet. ¿Crees que en un escenario poscapitalista podamos construir un internet que funcione con independencia de las operaciones del capitalismo global?

Bueno, el mismo internet que hoy conocemos y amamos podría funcionar independientemente de las operaciones del capitalismo global. Creo que algunos de los experimentos descentralizados que hoy se están llevando a cabo son un medio para alcanzar ese fin. Ahora mismo, la mayoría de ellos siguen viendo al gobierno como el enemigo, y sostienen algunos objetivos bastante engañosos como la «autosoberanía» o alcanzar el Punto Omega. Creo que es mejor optimizar para la comunidad y resistir el impulso de escalarlo todo. El hecho de que sea una red global no significa que queramos hacerlo todo globalmente.

¿Qué tan latente quedó entre nosotros la «ecuación del aislamiento» luego de la pandemia? ¿Crees que la ética de «la mentalidad» también se haya filtrado hacia la clase media progresista?

La pandemia fue una excusa para que muchos de nosotros adoptáramos una mentalidad de multimillonario. Aquí, en Estados Unidos, la gente dejó de sentirse culpable por sus cuentas de Amazon Prime, sus entregas de DoorDash y sus cuentas de Netflix. Se justificaba que

siguiéramos el mismo tipo de aislamiento y la misma mentalidad «de ir por la libre» de los hermanos tecnológicos.

Algunos de mis vecinos más adinerados incluso contrataron tutores privados y crearon pequeñas escuelas en sus grandes patios traseros. Empezaron a hacer lo que, sospecho, siempre quisieron hacer: desconectarse de la realidad cívica circundante y utilizar su dinero para obtener lo mejor. Muchos incluso compraron auriculares Oculus para entretenerse con la realidad virtual. Pero un entorno que colapsa no respeta el «límite del guardián» de un auricular VR. No puedes externalizar esas cosas para siempre. Todos, con suerte, aprendimos lo que estos millonarios aún no han reconocido: no puedes hacerlo solo.

[Fuente: [jacobinlat](#)]

Agustín Moreno

Concertada a la fuerza: la «libertad» de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso va a regalar dos grandes centros educativos privados financiados con fondos públicos en los barrios de Valdebebas y del Ensanche de Vallecas. El 10 de noviembre, el BOCM ha publicado la convocatoria de los concursos públicos para la construcción de dichos centros privados concertados en dos barrios de Madrid. Precisamente allí [donde las familias venían reclamando institutos públicos](#).

Estamos ante otro episodio de una privatización que no cesa. Miren este dato: el 40% del alumnado de Madrid capital está escolarizado en la educación pública. Para ponerlo en contexto: en España la educación pública escolariza el 67% y en los grandes países europeos cerca del 90% del alumnado. Esta situación es fruto de la política de desmantelamiento de la educación pública que viene aplicando el Partido Popular de Madrid desde hace décadas.

En este nuevo abuso la situación es aún más escandalosa. Por la forma en que se produce, por el objetivo que persigue, por el coste y porque es una adjudicación con trampa.

La demanda de las familias de estos barrios es muy clara: exigían la construcción de un instituto público en cada uno de ellos para atender a la población escolar que lo necesitaba. En el caso de Valdebebas, porque no hay ningún instituto para una población de 25.000 personas y donde cada día salen 5.000 alumnos a estudiar fuera del barrio; un centro privado es una golosina desde el punto de vista del negocio. En el Ensanche de Vallecas hay cuatro centros educativos concertados que tiene secundaria y solo un instituto público (IES María Rodrigo) que está sobresaturado.

Para reclamar su derecho a centros públicos, familias y profesorado se han movilizado, han recogido firmas, se han reunido con la administración educativa, han salido a la calle cientos de personas en varias ocasiones en los dos barrios. Merece mucho la pena ver las comparecencias en la Asamblea de Madrid de las AMPAS [de Valdebebas](#) y de las AMPAS [del Ensanche de Vallecas](#) invitadas por Unidas Podemos. Pero esta es la libertad de elección de Ayuso: si los padres quieren educación pública, habrá concertada a la fuerza. Demostrando una vez más que [su libertad de elección no es otra cosa que el disfraz de la mentira](#).

La pregunta es: ¿por qué privatiza la educación de manera salvaje la derecha? Claramente lo hace por intereses ideológicos, políticos y económicos. Considera que la educación concertada ¿la mayor parte en manos de entidades religiosas? contribuye a un adoctrinamiento en valores conservadores que ayudan a mantener el statu quo con una ciudadanía educada desde la segregación y el clasismo. El PP de Madrid tiene muy claro que la hegemonía política se sustenta en este tipo de estrategias: un consejero de Educación de Madrid decía que por cada centro educativo concertado en un barrio aumentaba un 3% el voto al PP.

También sirve para regar los negocios de empresas amigas que convierten la educación en un mercado para lucrarse con ella. Y ojo con este tema. Es tanto el dinero que está en juego que es difícil no pensar las contraprestaciones cruzadas, por no hablar directamente de corrupción. La Operación Púnica demostró que se cobraban comisiones de un millón de euros con los

conciertos educativos.

Es una operación ruinosa para los intereses públicos por el alto coste que tiene. Por un lado, se regalan parcelas que valen 11,9 millones de euros. Por otro, se les promete un concierto a 40 años (prorrogable hasta 75 años), es decir, prácticamente perpetuo. Ello viene a suponer una financiación comprometida del orden de entre 400 y 700 millones de euros a precios de hoy. Una barbaridad en sí misma y, más aún, cuando se están negando los recursos que necesita la educación pública.

Para presentar los pliegos hay solo un mes: del 10 de noviembre al 12 de diciembre. Estamos convencidos de varias cosas. Los colegios ya están dados. También los conciertos, pues nadie se mete en una inversión de unos diez millones de euros en la construcción de un centro si no tienen asegurado el negocio. Esta decisión se tomará al más alto nivel, en el entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tan seguros estamos de que es un concurso con trampa que tenemos dos opciones: depositar ante notario un sobre lacrado con los más que posibles adjudicatarios, o hacer una porra con los sospechosos habituales: el Opus Dei en alguna de sus encarnaciones (ojito a Alfonso Aguiló), el gran fondo de inversión Hospitales de Madrid o el Instituto de Empresa, donde trabaja la exconsejera de Educación Lucía Figar. Al tiempo.

Tal y como se está planteando el tema, es manifiestamente un acto ilegal. Y no solo porque va en contra de la filosofía de la LOMLOE, que pretende evitar estas situaciones, pero que la actitud pusilánime del Gobierno central no amarró suficientemente. La ley prohíbe que los ayuntamientos cedan suelo para colegios privados y la artimaña consiste en que el ayuntamiento de Madrid se lo ceda a la Comunidad para que ésta pueda burlar la ley y regalárselo a sus amigos. Tampoco se cumplen las condiciones exigidas para los conciertos. Pero, sobre todo, no es legal vincular el suelo y los conciertos en un mismo acto.

Con este atropello a la educación pública, Ayuso retorna a las prácticas de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Al periodo más negro de la corrupción política de la que fueron protagonistas. Ese es el fondo del asunto, aunque la neolengua intente vendernos lo contrario de la realidad. La libertad no tiene nada que ver con las cañas y tapas, con gobernar al servicio de los intereses privados o con el adoctrinamiento en las bondades de la desigualdad. Las libertades son las que garantizan los servicios públicos y los derechos de ciudadanía que consagra la Constitución y el estado de bienestar: educación, sanidad, pensiones, dependencia, servicios sociales, vivienda. Además del perjuicio que se produce a derechos fundamentales y a la cohesión social, la desigualdad y segregación que genera la red concertada hace que sea menos eficiente y más mediocre el modelo educativo madrileño.

Como Unidas Podemos hemos registrado varias preguntas para el Pleno de la Asamblea de Madrid. Es más que probable que esta injusticia acabe en los tribunales. Pero la lección que deberíamos aprender de una vez por todas es la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas para que las urnas no den la razón a prácticas mafiosas. Por último, los sindicatos, las AMPA, las organizaciones estudiantiles y toda la comunidad educativa deben empezar a unirse y a movilizarse frente a la injusticia. La movilización por la Sanidad Pública es el espejo.

[Fuente: [Público](#)]

Antonio Antón

La lucha de clases antifranquista

Reseña del libro de Xavier Domènech

Me siento más cómodo con el término 'materialismo histórico'. Y también con la opinión de que las ideas y los valores están situados en un contexto material, y las necesidades materiales están situadas en un contexto de normas y expectativas; y de que uno da vueltas a este multilateral objeto social de investigación. Desde una perspectiva, es un modo de producción, desde otra un modo de vida.

E. P. Thompson, *Agenda para una historia radical*, 1985

Empiezo con la reproducción de la primera cita del excelente libro del historiador y exlíder de En Comú Podem Xavier Domènech, *Lucha de clases, franquismo y democracia. Obreros y empresarios (1939-1979)*, que se acaba de publicar. Es la culminación de dos décadas de investigación histórica sobre este periodo, y no es casualidad que empiece por una referencia del historiador británico, cuyo enfoque sobre la formación de las clases trabajadoras —en cuanto sujeto sociopolítico conformado de forma sociohistórica a través de su experiencia relacional, sus 'costumbres en común'— compartimos ambos y que he tenido ocasión de tratar recientemente.

La historia social

Como dice la presentación del libro, su hilo conductor es la experiencia de resistencia y conflictividad de los trabajadores y trabajadoras frente a la dictadura franquista. Se trata de la formación de un nuevo y amplio sujeto sociopolítico llamado movimiento obrero, por su composición de clase trabajadora y su contenido reivindicativo sociolaboral. No obstante, además de su carácter de clase, en su propia formación, y de forma desigual según las zonas y sectores, le acompañan tres rasgos identificadores: su composición mixta de género, su sensibilidad plurinacional y su carácter político democratizador y antifranquista. En ese proceso construyeron un mundo de valores y desarrollaron formas de vida y solidaridad, que recogieron muchas tradiciones de gente trabajadora y sus organizaciones precedentes de la época de la República, pero que se adaptaron a las nuevas condiciones económicas y políticas para constituir el principal desafío al franquismo, con una experiencia en común particular y una nueva unidad e identificación de clase, por supuesto, en distintos niveles.

El texto critica acertadamente las dos interpretaciones dominantes sobre el factor de cambio hacia la democracia. Por un lado, las dinámicas económicas modernizadoras junto con el desarrollo de clases medias, cuestión que se demostró insuficiente a la altura de los años setenta, con un fuerte crecimiento de la conflictividad social en demandas socioeconómicas (salariales, urbanísticas, de servicios públicos...), de solidaridad colectiva y políticas (democráticas y plurinacionales).

Por otro lado, la iniciativa de las propias fuerzas reformistas del Régimen franquista, con una situación de subordinación de la oposición antifranquista, aspecto que también se vio inviable a mitad del año 1976 con el fracaso de reformismo franquista, en un año largo de fuerte conflicto

social y político para implementar el alcance de su desborde y la reforma pactada, la amnistía y la legalización de los partidos políticos, hasta las elecciones democráticas de junio de 1977. Aunque ganó en escaños la derecha de la UCD, la gran representatividad en votos de la oposición democrática, las izquierdas y los grupos nacionalistas, particularmente catalanes y vascos, transformó las Cortes ordinarias en Constituyentes, hizo irreversible el sistema democrático (salvando las intentonas golpistas y las maniobras ultraderechistas) con la elaboración de la nueva Constitución democrática y la configuración del sistema parlamentario y las libertades civiles y políticas.

Pues bien, el libro critica el mito embellecedor de la Transición política y el supuesto papel decisivo de la Corona, y argumenta detalladamente que el factor principal del cambio democrático fue la activación del movimiento obrero. Se desarrolló en varias fases, primero en las zonas de concentración industrial y urbana y luego en las principales ciudades. Al mismo tiempo, se incorporaron otras capas populares, particularmente en los barrios periféricos de las grandes ciudades, de concentración de población inmigrante española y gran homogeneidad en sus condiciones vitales, especialmente a través de los movimientos vecinales, así como estudiantiles y de la cultura, es decir con la participación de capas medias y profesionales progresistas.

El movimiento obrero también se articuló con la dinámica plurinacional y la oposición política democrática. Con diversos altibajos, se extiende la protesta social, dentro de las empresas y en la calle, y se amplía su capacidad asociativa y representativa, aprovechando las elecciones sindicales a enlaces y jurados de empresa, del sindicalismo vertical, al mismo tiempo que la formación de Comisiones Obreras representativas, en un proceso coordinativo diverso, como principal mecanismo articulador de la conflictividad laboral y sociopolítica.

Por tanto, se fortalece el sentido de pertenencia de clase, con experiencias vitales diferenciadoras del poder económico y político, con intereses y objetivos compartidos, con una amplia cultura democrática y solidaria. Así, va entrando en crisis la hegemonía del franquismo entre la población y, en particular, del sindicalismo vertical en su pretensión de encuadrar a las clases trabajadoras y garantizar el control social y su sometimiento al orden dictatorial. Su legitimidad social se va deteriorando masivamente, motivo que activa el intento de recomposición reformista del franquismo, tras la muerte de Franco, que también fracasa ante el empuje del movimiento obrero y popular y la oposición democrática que culmina su vertebración, en 1976, en la Coordinación Democrática o 'Platajunta', agrupando distintas organizaciones, y cuya expresión más acabada fue la Asamblea de Cataluña.

Por otra parte, está el empresariado, la otra pata del conflicto de clases, que se había cobijado en las estructuras del franquismo como sistema de dominación de clase funcional para el control y la explotación obrera y la acumulación de beneficios en las décadas de la posguerra. Pero, a la altura de los años setenta, va viendo que no es suficiente el Régimen franquista como garantía de control social y su dominio de clase, y debe buscar nuevos equilibrios institucionales que le homologuen a los países europeos. Así, las organizaciones empresariales absorben lo fundamental de la estructura anterior del sindicato vertical, al igual que otras estructuras del Estado que mantienen similar estatus de poder, como las fuerzas armadas y de seguridad o el poder judicial, siendo la (única y pública) TVE y los principales medios el arma mediática principal al servicio del Gobierno franquista y luego de la derecha gubernamental.

En definitiva, se trata de una 'historia desde abajo' que destaca el motor del cambio del franquismo a través de la movilización popular democrática y que, aun así, expresa los límites de la relación de fuerzas para condicionar la llamada 'ruptura democrática', con limitadas transformaciones de la estructura económica y, particularmente, de los aparatos fácticos de poder. El resultado son los nuevos equilibrios institucionales, incluido la Constitución y el posterior Estado de las Autonomías, que dieron paso a esta democracia débil, definida por algunos como el Régimen del 78, pero homologable como sistema parlamentario, con sus libertades democráticas, y reconocida en el ámbito europeo.

Una aportación teórica y política

El libro de Xavier Domènech es una investigación historiográfica excelente sobre el conflicto social y democrático de ese periodo precedente a nuestra etapa democrática, analizando los actores principales del proceso de cambio de Régimen y su interacción. Ya he mencionado el enfoque sociohistórico y relacional *thompsoniano*, que comparto, como el más fructífero para explicar la dinámica sociopolítica, frente a las interpretaciones estructuralistas o economicistas, institucionalistas y culturalistas, todavía dominantes en las ciencias sociales. Como dice el texto, hay que darle un significado a 'toda la experiencia histórica': "Para ello, es central pasar de la dimensión de la relación entre movimientos sociales y cambio político, a la más amplia, aunque también más compleja, de la lucha de clases. Ello permite ampliar la mirada de lo que estaba en juego, en términos de valores, proyectos e intereses, más allá del cambio político desnudo" (p. 43).

El texto también avanza una reflexión teórica, precisamente en la primera parte, titulada "Prolegómenos. Un nuevo principio: la lucha de clases", en particular sobre un tema controvertido y muy interesante en el debate teórico y político que está condicionando 'tanto el análisis histórico como la cosmovisión de una parte de los movimientos sociales y la política': la importancia del problema de las identidades, en este caso la obrera, y su relación con la clase y la conciencia de clase.

En este sentido, vuelve a fundamentarse en el pensamiento relacional y sociohistórico de E. P. Thompson. Las clases, en cuanto sujeto sociopolítico, son un fenómeno social persistente que se forma históricamente a partir de las polarizaciones sociales, los conflictos más o menos fuertes o débiles, cuya experiencia conlleva comportamientos y formas de acción relacionadas con sus condiciones vitales en las relaciones de producción y de consumo y en el estatus institucional y de poder respecto de otras clases sociales. Comparte su fuerte crítica, particularmente en "Miseria de la teoría", a la interpretación estructuralista desarrollada por Althusser, por su abstracción idealista, resaltando el carácter procesual, humanista y de construcción social del sujeto sociopolítico, la gente concreta con su experiencia, así como su papel sustantivo en las relaciones sociales.

En su configuración concreta, ese carácter de clase se combina con otros fenómenos sociales, culturales y políticos y su expresión sociopolítica y cultural puede ser más densa, cohesionada y diferenciada, o más líquida, dispersa y difusa. Así, se conforman movimientos, organizaciones, instituciones y culturas de clase más específicos, en procesos diferenciados de identificación de clase, como el llamado movimiento obrero, o más evanescentes y mixtos con otros tipos de movimientos socioculturales y políticos, conformando dinámicas transformadoras mestizas. Está

siempre en evolución según la experimentación, la complementariedad y el conflicto social, y cuya expresión, poniendo el acento en una temática u otra o bien una forma expresiva o de liderazgo u otra, puede ser variada en el tiempo y las circunstancias.

Por tanto, la clase (trabajadora) es un sujeto social, no una simple identidad, definido en términos de su relación con otras clases a través de un medio temporal o histórico. Su identidad se puede considerar como una aproximación (metáfora, dice Thompson) a su flujo relacional, sin olvidar que la facultad y la práctica social la realizan las personas concretas, muchas veces de forma colectiva, bien en colaboración con otros grupos sociales u otras expresiones particulares, bien en confrontación y conflicto.

La identidad, como reconocimiento individual y público y sentido de pertenencia a un grupo social (o varios), es un fenómeno de la realidad que se combina con los otros dos componentes: el nivel y carácter de su conciencia social y su práctica relacional. Aparte de otras peculiaridades, en el desarrollo histórico y relacional puede conformarse una identificación de clase más nítida y densa o bien una identificación popular o interclasista, de distintos fragmentos de las clases trabajadoras y las clases medias, más o menos diferenciada de las clases dominantes y el poder establecido. Sin olvidar que hay elementos transversales al ser humano como la ciudadanía universal o la ética de los derechos humanos que imprimen su propio carácter común y universalista.

Dos procesos identificadores interaccionan, especialmente, con la identificación de clase en todas las personas y grupos sociales, dando lugar a conformaciones de identidad múltiples y mixtas en su articulación y expresividad, es decir, incluyentes aunque variadas. Me refiero, desde el punto de vista sociopolítico y cultural, a la identidad feminista y la identidad nacional (o étnico-cultural). La cuestión es que la propia sociedad y, particularmente las clases trabajadoras tienen los tres componentes, con mayor o menor proporción en sus mezclas y sus diferenciaciones con otras identificaciones distintas u opuestas. En ese caso, con una identificación o estatus de clase media (o clase dominante), con el machismo como cultura y sistema de privilegios desigualitarios y con otra dimensión nacional o cosmopolita.

Xavier Domènech hace un acertado y riguroso análisis sociohistórico de la formación de la clase obrera española como sujeto social, es decir, como movimiento obrero, en esas décadas pasadas, a través de la interacción de esas tres dinámicas transformadoras y pertenencias colectivas. En una clase trabajadora diversa había en su interior especificidades nacionales (incluido la fuerte inmigración interior) y de género, así como particularidades de clase obrera distintas y en colaboración con sectores de las clases medias, tanto en los barrios populares cuanto en el ámbito cultural y profesional. La polarización, la lucha de clases, se estableció frente al Régimen franquista y las clases dominantes, conformándose esa identificación colectiva democrática y social, popular y de clase trabajadora, con rasgos plurinacionales y del incipiente feminismo.

Por otra parte, E. P. Thompson y Xavier Domènech con él, aparte del distanciamiento con el estructuralismo o el marxismo economicista y determinista, influyente en los años sesenta y setenta y hoy en declive, profundizan en esta nueva fundamentación teórica sociohistórica y relacional, que comparto. Supera también la retórica postestructuralista, muy diversa, que se ha ido ensanchando en los años ochenta y noventa y que goza de predicamento en diferentes

corrientes políticas y movimientos sociales.

Así, explícitamente, critica la posición idealista de que los sujetos son construidos discursivamente y que la experiencia es un evento lingüístico, cuando, de forma realista, hay que destacar su carácter relacional y su proceso evolutivo, inserto en sus condiciones materiales de existencia, así como en el conjunto de tradiciones, normas y valores que permean su subjetividad. Se supera el simple mecanicismo economicista y el culturalismo idealista, por un enfoque más multidimensional e interactivo, con el acento en la experiencia vivida e interpretada del actor o sujeto colectivo. Se reafirma lo social, como dinámica viva y de agencia, vinculada a la realidad real de la gente, frente a su cosificación o su dilución en la abstracción conceptual y la muerte del sujeto.

Finalmente, habría que revalorizar, precisamente, la conexión entre la realidad directa experiencial de la gente y los procesos interpretativos y discursivos, de ella misma y las distintas élites culturales, que permiten terminar de configurar esa experiencia 'vivida e interpretada' con la subjetividad correspondiente que mediará su acción colectiva y su sentido en los contextos concretos. Y esto será más decisivo para interpretar la etapa democrática siguiente y la interacción de los distintos movimientos sociales y dinámicas transformadoras en conflicto con los poderosos.

Particularmente, aunque haya mucha literatura, es preciso sistematizar desde ese enfoque teórico, el análisis de esta década larga, desde la crisis socioeconómica y política, las dinámicas cívicas de protesta social y la configuración del espacio sociopolítico y electoral del cambio, diferenciado de la socialdemocracia, que he denominado nuevo progresismo de izquierda con fuerte carácter social popular, feminista y ecologista y con la particularidad democratizadora, plurinacional y confederal. Se trata de la formación del agente de progreso que constituye el motor de cambio en este nuevo periodo, en pugna por su consolidación frente al poder establecido. Pero eso es ya otro objeto de investigación, con implicaciones políticas y estratégicas para el presente y futuro del país. El libro de Xavier Domènech facilita claves analíticas para abordarlo.

[Fuente: [Nueva Tribuna](#). Antonio Antón es sociólogo y politólogo]

Julia Tabernero, Justa Montero y Eva Muñoz Moreno

Otros mapas de conflictos sindicales: luchas feministas en los márgenes del trabajo

Los conflictos y las luchas que en los últimos años han protagonizado mujeres sometidas a formas extremas de discriminación y explotación laboral sitúan en las condiciones materiales para la vida un eje clave de su acción política. Los procesos que han puesto en pie para confrontar esa explotación forman parte del entramado de luchas que los feminismos han desplegado en este ciclo. Las aportaciones de estas mujeres en lucha desafían los enfoques feministas que no incorporan la interseccionalidad en sus análisis y muestran la existencia de otros sindicalismos posibles: aquellos que organizan a sectores laborales y productivos tradicionalmente excluidos, incorporando sus necesidades y demandas al análisis del mercado de trabajo y del modelo económico.

Lo que desde diferentes sectores del feminismo estamos denominando sindicalismo feminista-feminismo sindicalista (con este doble recorrido) no es una práctica puntual. Es la forma en la que muchas mujeres, en torno a la precariedad de sus vidas, se autoorganizan para garantizar sus condiciones materiales de existencia y las de sus familias. Muchas experiencias y conflictos colectivos protagonizados por mujeres organizadas amplían lo que entendemos por sindicalismo y cómo se practica. Ejemplos de ello son las trabajadoras agrupadas en la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha, las *kellys*, las trabajadoras sexuales, las *riders*, las trabajadoras domésticas o las trabajadoras a domicilio. Como señalan desde la asociación Territorio Doméstico: “Tal y como lo vamos construyendo entre nosotras [...] [este nuevo sindicalismo] aúna formas de organización colectiva del llamado sindicalismo social y del origen político del sindicalismo obrero”.

Por un trabajo con derechos, por vidas dignas más allá del trabajo

Todas las experiencias que podemos englobar bajo el paraguas del feminismo sindicalista tienen claro que la exigencia del reconocimiento pleno de derechos laborales, frente a la explotación a las que nos somete el capital, debe ir claramente ligada a la batalla por disociar la condición de ciudadanía (y las condiciones materiales que la posibilitan) de la tenencia o no de un empleo. A partir de este enfoque, se organizan e impulsan alianzas por la defensa de los servicios públicos, los sistemas de rentas garantizadas, el derecho a una vivienda, el fortalecimiento del tejido comunitario, las luchas contra las violencias o por el derecho al aborto. Si, como defienden los feminismos, hablamos de construir vidas dignas y sin precariedad, estas reivindicaciones están ligadas y son inseparables de la lucha por sus derechos laborales.

Esta forma de plantear los conflictos sindicales más allá de lo laboral y desde una perspectiva interseccional se enmarca en un amplio y sólido enfoque teórico y crítico, generado desde las propias luchas y prácticas. Además, la economía feminista ha profundizado mucho sobre estas cuestiones a través de experiencias de investigación-acción militante como Precarias a la Deriva, La Laboratorio y el trabajo de otras muchas compañeras como Cristina Carrasco, Amaia Pérez Orozco, Silvia Federici, Sigrid Bazán o Luci Cavallero, por nombrar solo algunas.

Los análisis críticos desde el feminismo incorporan la dimensión de la reproducción social a los análisis sobre el neoliberalismo, llaman la atención sobre la necesidad de articular todo lo relativo a las condiciones para una vida digna, no solo el empleo. Conectan la precariedad laboral con cuestiones como la flexibilización de los tiempos y espacios del trabajo; el recorte de los salarios o la ausencia del mismo; la pérdida de derechos y la ausencia de regulación en algunos sectores (de la que se desprende, por ejemplo, la ambigüedad del vínculo entre quienes emplean y quienes son empleadas) o la racialización del trabajo, entendida como la relación de las condiciones laborales con la situación administrativa de la persona trabajadora, como sucede en el caso de las trabajadoras de hogar y de las jornaleras contratadas en Marruecos que trabajan en los campos de Huelva.

El desarrollo del neoliberalismo y el proceso de acumulación de riqueza necesario para ello han convertido en un elemento estructural la precarización del empleo, particularmente de las mujeres, jóvenes y personas migrantes, reduciendo muchos trabajos esenciales para la reproducción de la vida a nichos de trabajos sin derechos. Cuando un trabajo se feminiza y se racializa, se normaliza la degradación de sus condiciones laborales, su reconocimiento social y la devaluación de sus salarios. Este proceso se origina en la división sexual del trabajo y en las lógicas coloniales y extractivistas, tan imbricadas en los mecanismos de explotación capitalista. Se asienta sobre los roles y estereotipos de género que históricamente se asocian a las mujeres, como cuidar, sanar, alimentar, limpiar o ejercer tareas de sostén emocional y relacional. De esta manera, la economía se construye sobre la explotación y, a la vez, sobre la negación de la relevancia económica y social del trabajo de las mujeres y de todas las tareas asociadas a *lo femenino*, utilizando como patrón de *normalidad* económica lo masculino, blanco y eurocéntrico. A estos elementos podemos sumar los procesos de privatización de los servicios públicos y la pérdida de derechos sociales.

Cuando el trabajo no se considera trabajo

En general, el trabajo que no parece trabajo es aquel que llevan a cabo las mujeres, mujeres racializadas y disidencias. Las formas de explotación en tiempos de neoliberalismo nos muestran un *nuevo* mapa de los conflictos abiertos y nos plantean algunas preguntas para las que aún no tenemos respuestas completas. ¿Qué pasa cuando el jefe no es visible o es una aplicación, como en el caso de las *riders*? ¿Cómo organizarse cuando no hay centro de trabajo? ¿O cuando tu puesto de trabajo es un domicilio particular, como les sucede a las trabajadoras del hogar? ¿Cómo defender derechos cuando ni siquiera se nos reconoce como trabajadoras, como reclaman las trabajadoras sexuales y las trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular?

Las trabajadoras del hogar ponen voz a un aspecto común: la falta de reconocimiento social de su trabajo y la ausencia de derechos que eso implica. Las cadenas globales de cuidados, apuntaladas por la ley de extranjería, que lleva a que la mayoría de las trabajadoras del hogar sean mujeres migrantes sin derechos, son un elemento estructural para entender el engranaje del trabajo de hogar y de cuidados. Amaia Pérez Orozco las define como “cadenas de dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida y en las que en los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder”.^[1] Este sector de trabajadoras está sujeto a un régimen especial dentro del régimen general de la

Seguridad Social y vienen protagonizando una lucha tenaz para lograr los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. Junto con las *kellys*, las trabajadoras de residencias o el Servicio de Ayuda a Domicilio pelean por el reconocimiento de la dignidad de su trabajo.

Otro grupo de trabajadoras sin plenos derechos y la correspondiente ausencia de reconocimiento son las trabajadoras sexuales. De hecho, a las mujeres que ejercen la prostitución se les ha privado, en plena pandemia, de la posibilidad de acogerse al Ingreso Mínimo Vital. Más allá de lo que esto supone en la lucha por la supervivencia, es un ejemplo más de la imposibilidad de acceder a derechos de ciudadanía si no hay un reconocimiento de su condición de trabajadoras.

La Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha (2022), ejemplo de lucha y de puesta en práctica de otras formas de sindicalismo feminista, antirracista y ecologista, plantea lo siguiente:

Los tiempos han cambiado y en los sectores más empobrecidos, cada día más precarizados, en los que tenemos compañerxs que ni siquiera son reconocidxs como ciudadanxs, resulta imposible organizarse a través de afiliaciones (cuotas de las propias personas trabajadoras), por lo que reinventar el sindicalismo se hace prioritario. Reinventarlo de arriba abajo o, mejor dicho, desde abajo hacia arriba.

Podemos extraer muchos aprendizajes y claves de estas luchas. Una muy relevante surge de la denuncia que las *riders* hacen del proceso de *uberización* de la fuerza de trabajo en el marco de la economía de plataforma, maquillado a través de un lenguaje neoliberal que encubre la verdadera relación laboral con discursos de libertad, flexibilidad y *sé tu propio jefe*. La inexistencia de centros de trabajo (llamados *centroids* en esta neolengua), que al despido se le llame *desconexión* o la organización de los tiempos de trabajo a través de algoritmos que, al mismo tiempo, no se registran e impiden garantizar el cumplimiento del convenio, son elementos que complejizan la organización de las trabajadoras. Las y los *riders* extienden su lucha más allá de lo sectorial planteando la necesidad de un cambio de modelo económico que garantice derechos a todas las personas.

Juntas y diversas: el enfoque y la práctica feminista para cambiarlo todo

Sabemos que nuestras vidas y problemáticas son diversas. Las violencias se superponen y, por lo tanto, es absolutamente imprescindible una mirada interseccional para generar transformaciones reales y hacer propuestas útiles para la vida de las mujeres y del conjunto de la población. La interseccionalidad de opresiones, como herramienta de análisis que desarrolla el feminismo, permite ampliar y complejizar la realidad concreta de las mujeres, generar transformaciones reales y hacer propuestas útiles para el conjunto de la población. El género, pero también el color de nuestra piel, nuestra situación administrativa, el número de ceros en nuestra nómina (si es que tenemos), nuestra orientación sexual o identidad, si tenemos una vivienda o no, determinan las condiciones del acceso al empleo y a derechos y, por lo tanto, jerarquizan unas vidas sobre otras. Por eso, estamos fuertemente convencidas de que las prácticas feministas y sindicalistas deben adaptarse al contexto, apostar por la construcción de alianzas y entender que los sujetos que protagonizan las luchas no se delimitan en un congreso o un *paper* académico. Se construyen en los procesos que ponemos en pie a través de la práctica, con diálogo y debate. Estando juntas y siendo cada vez más.

Sin las violencias que genera la ley de extranjería, no se puede entender hoy una gran parte de las dinámicas de exclusión y explotación provocadas por sectores económicos que asientan sus

beneficios en las condiciones de semiesclavitud que, fruto de las políticas de fronteras, deben aceptar las personas que migran. Entender cómo el racismo institucional atraviesa la vida y las condiciones de empleo de muchas trabajadoras y cómo distribuye el mercado laboral es fundamental para construir feminismos y sindicalismos que pretendan ser verdaderamente transformadores y emancipadores. Como señala Pastora Filigrana: “Mientras haya bolsa de personas en pobreza sin papeles ninguna lucha sindical va a llegar a buen puerto porque siempre tendrán una mano de obra barata y con miedo y explotable con la que intercambiarnos si protestamos”.

Las denuncias de abusos sexuales en Huelva en 2018, interpuestas por un grupo de jornaleras del campo, marroquíes en su gran mayoría, son otro ejemplo de lucha interseccional. Interpelaron directamente a la Administración y a los sindicatos ante el abandono e invisibilización de su proceso, así como al movimiento feminista que había clamado en las calles contra la justicia patriarcal frente a la sentencia del juicio de *la manada*. Nuevamente recurrimos a la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha para entender cómo actúa la dimensión de clase, de género y de raza en la violencia que se ejerce contra ellas. Ana Pinto, trabajadora del campo y activista de esta asociación, señala: “En Huelva se da toda la explotación posible: racismo (con la explotación de personas migrantes), machismo y destrucción del medio ambiente”. “Todas las vertientes del sistema neoliberal en una comarca”, dice la abogada Pastora Filigrana.

La condición de trabajos esenciales (aquellos sin los cuales es imposible el funcionamiento de la sociedad y la vida de las personas) ha sido un tema recurrente al calor de la crisis generada por la covid-19. Aunque las trabajadoras del sector del hogar y los cuidados llevan años “politizando las ollas, las calles y los delantales”, como señalan nuestras compañeras de Territorio Doméstico (Pimentel *et al.*, 2021), y poniendo encima de la mesa la necesidad de reconocimiento y de derechos laborales, la escasa cobertura social durante la crisis de la pandemia en muchos sectores laborales feminizados demostró los límites de muchas de las llamadas políticas públicas de igualdad. Muchas mujeres, como las trabajadoras domésticas o las trabajadoras sexuales, quedaron fuera de los sistemas de protección que se desplegaron.

Como apuntó Kathi Weeks (2022), así como el marxismo concibió al proletariado industrial como clase revolucionaria capaz de crear un mundo nuevo, los feminismos entienden que, en las formas feminizadas de trabajo (y racializadas, añadimos nosotras), marginadas a la vez que fundamentales para los procesos de valorización capitalista, hay muchas claves para generar experiencias de organización que construyan una colectividad política feminista y anticapitalista, cuyo fin último sea la transformación radical, entre otras, de las instituciones del trabajo y de la familia, como elementos que estructuran el actual orden económico y social.

Si nosotras paramos, se para el mundo. Lo que las huelgas feministas nos enseñaron

Las huelgas feministas internacionales de 2018 y 2019, articuladas en torno a cuatro dimensiones de la actividad y la vida de las mujeres –laboral, estudiantil, cuidados y consumo– son un hito importantísimo para entender el desarrollo de estas *formas de hacer* y de luchar por los derechos a las que nos venimos refiriendo. En el proceso se elaboró un potente argumentario que ha construido la base de todo el histórico ciclo de movilizaciones feministas de los últimos años. Se asentaron marcos políticos y discursivos que venían de lejos y que impulsaron, en el plano estratégico y organizativo, los movimientos feministas.

Los procesos colectivos de las huelgas fueron un catalizador del hartazgo de muchas mujeres y una propuesta renovadora sobre dos conceptos claves del sindicalismo: trabajo y huelga. El feminismo siempre ha denunciado las limitaciones de la idea tradicional de trabajo porque deja fuera muchas actividades centrales para la economía y la vida que realizan mayoritariamente las mujeres. Las huelgas visibilizaron la necesidad de dinamitar la distinción, en cuanto a reconocimiento y derechos, entre lo que se ha considerado la esfera pública, la de la producción, y la privada, de la reproducción. Si se diferencia *trabajo de empleo*, el trabajo deja de ser algo específico del ámbito de la producción y se amplía al ámbito de la reproducción social (que incluye los trabajos de cuidados). Estos procesos de movilizaciones feministas pusieron sobre el tapete la realidad de las condiciones laborales y vitales de muchas mujeres, construyendo un mapa propio de conflictos y luchas. La ampliación del concepto de huelga contribuyó a visibilizar algunas de las cuestiones que se venían señalando desde hacía tiempo, recalcando la centralidad de los cuidados y la dimensión económica y social de los mismos.

Las huelgas feministas, que tuvieron un rico recorrido, un contenido trabajado y que dibujaron el horizonte transformador más potente de los últimos años, también nos señalaron algunas paradojas que han abierto importantes y fructíferos debates. Un ejemplo muy evidente fue la dificultad de muchas mujeres que, sintiéndose interpeladas y habiendo participado del proceso, no pudieron secundar la huelga. Cuando cada vez necesitamos hacer más cosas para cobrar lo mismo, cuando de tu puesto de trabajo depende que una persona mayor o una menor sea atendida, cuando no tienes papeles y trabajas sin contrato, el derecho a la huelga, una histórica conquista que le debemos al movimiento obrero, se convierte en un imposible.

Las huelgas fueron, sin embargo, una experiencia de todas, de las que pararon todo el día o de las que se sumaron desde sus puestos a la manifestación, de las que estaban internas y de las que salían a aplaudir el paso de las compañeras desde sus puestos precarios. Fueron muchas luchas que se articularon bajo una idea potente: si las mujeres paramos, se para el mundo. Con esta idea, las feministas visibilizamos que hay trabajos que no se pueden detener incluso cuando todo lo demás para. Así se ha evidenciado durante la pandemia. La mayoría de estos trabajos y los más precarios los realizan mujeres, especialmente aquellas con menos derechos reconocidos, como son las migrantes y racializadas. Son las últimas de una cadena en la que todas las demás estamos insertas.

El feminismo sindicalista como lugar de resistencia y transformación

Las experiencias del sindicalismo feminista de los últimos años han tenido y tienen un papel inspirador y central en las luchas que los feminismos autónomos y populares han desplegado en este ciclo histórico de movilizaciones feministas. Componen nuevas formas de organización sindical y feminista, cuyas expresiones van mucho más allá de las que hemos podido referenciar

en este artículo. No son solo prácticas puntuales, sino también propuestas de autoorganización, de un sindicalismo de base con tramas de apoyo mutuo.

Estas experiencias de feminismo sindicalista están impregnadas de los lenguajes y los modos de hacer de los feminismos de base y de otros movimientos populares (el asamblearismo, la construcción de consensos, el apoyo mutuo). Se nutren también de herramientas tradicionalmente asociadas al sindicalismo, como las huelgas o las cajas de resistencia. Haciendo honor a la mejor tradición disidente de la que forma parte el feminismo autónomo, las hacen suyas, las modifican, las amplían, las reinventan. Articulan un espacio de lucha y de pensamiento que pone el foco en las costuras del sistema económico y productivo, encarnadas en los cuerpos y las vidas de las mujeres, especialmente de las migrantes y racializadas.

Las resistencias primero, y las reticencias después, de los sindicatos mayoritarios frente a la propuesta de huelga feminista evidenciaron en gran medida su incompreensión del alcance de la propuesta feminista y las dificultades que arrastran para incorporar a diversos sectores laborales feminizados y precarios. Esto se debe, por una parte, al concepto de trabajo en el contexto histórico actual: las relaciones productivas, quién o quiénes componen el sujeto de la clase obrera, cómo se construye este y qué validez se da a ciertos conflictos. Pero, por otra parte, se debe a su incapacidad o falta de voluntad para atender las exigencias que expresan algunos colectivos de trabajadoras y para abrir la participación en estructuras que están fuertemente jerarquizadas. Esto ha hecho que tanto las jornaleras como las trabajadoras de hogar hayan expuesto la urgencia por establecer nuevas formas de participación y diálogo en los procesos de negociación de convenios, ya que por ley son los sindicatos los que se sientan en las mesas de negociación. En ocasiones, la confrontación con algunos sindicatos ha sido manifiesta, como lo ha sido también el apoyo de organizaciones sindicales de base con protagonismo femenino y feminista que llevan esto a la práctica. Como dice Ana Pinto, de la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha:

Hemos tenido que aprender sindicalismo sobre la marcha y crear muchas redes para lograr condiciones de vida y trabajo dignas para la clase jornalera [...]. Luchamos por cambiar las condiciones de trabajo y de vida de todas las temporeras, para conseguir derechos para todas porque es de justicia y para enfrentar la estrategia patronal del *divide y vencerás*.

Como se señala desde el colectivo La Laboratorio, que organizó las jornadas “El feminismo sindicalista que viene” (2022):

Las mujeres, las lesbianas, las trans y todas las que desacatan los ordenamientos patriarcales del género sabemos bien que violencia, extractivismo y explotación no pueden leerse por separado, se anudan siempre de modos complejos, colocándonos una y otra vez al límite, usurpando nuestras energías vitales. Un sindicalismo de nuevo tipo, con claro protagonismo femenino, está emergiendo en estos anudamientos, mezclándolo todo e inventando nuevos modos de plantear el conflicto, pero también nuevas estrategias de autoprotección entre nosotras.

Los feminismos sindicalistas son lugares de resistencia y contestación. Espacios desde los que se van construyendo alternativas a través de sujetos políticos que no siempre han sido reconocidos y nuevas formas de organización sindical. Abren también nuevas preguntas y provocan una rica deliberación sobre las posibilidades y límites de la actual organización y ética del trabajo.

Vivimos un momento de fragmentación y creciente desánimo, pero creemos que el feminismo, en alianza con otras luchas y movimientos, sigue siendo nuestra mejor herramienta para cambiarlo

todo. Como señala Ángela Davis: “El feminismo no es solo una estrategia para superar la opresión basada en el género, sino también contra el racismo, el fascismo, el materialismo o la opresión económica”.^[2]

Referencias

Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha (2022), “Informe Jurídico Brigada de Observación” (accesible en <https://jornalerasenlucha.org/wp-content/uploads/2021/02/InformeJuridicoBrigadaDeObservacion-JornalerasDeHuelvaEnLucha.pdf>).

La Laboratoria (2022), “El feminismo sindicalista que viene” (accesible en https://m.facebook.com/La-Laboratoria-103301798092312/videos/nuria-soto-el-feminismosindicalista-que-viene/411876339918767/?__so__=permalink&__rv__=related_videos&locale=ne_NP).

Pimentel Lara, Rafaela; Cisneros Sánchez, Constanza; Caballero Richard, Amelia; Rojo Delgado, Ana (2021), *Biosindicalismo desde los territorios domésticos. Nuestros reclamos y nuestra manera de hacer* (accesible en Laboratoria.red/publicación/biosindicalismo-desde-los-territorios-domésticos).

Weeks, Kathi (2020), *El problema del trabajo*. Madrid: Traficantes de Sueños.

[Julia Tabernero Sierra es socióloga y forma parte, entre otros espacios, del movimiento de vivienda y del colectivo Feministas en Acción. Justa Montero Corominas pertenece a la Asamblea Feminista, Feministas en Acción y La Laboratoria, forma parte del Consejo Asesor de Viento Sur. Eva Muñoz Moreno es activista feminista y participa en varios colectivos como Feministas en Acción, la Asamblea feminista por un Empleo de Hogar con Derechos y la Comisión 8 de Marzo de Madrid. Fuente: [Viento Sur](#)]

1. <https://trainingcenter.unwomen.org/instraw-library/2009-R-MIG-GLO-GLO-SP.pdf>. ?
2. Davis, Angela (2018), intervención en las jornadas “Mujeres contra la impunidad”, Asociación de Mujeres de Guatemala, 10/2018 (accesible en <https://www.publico.es/sociedad/angela-davis-feminismo-arma-potente-luchar-racismo-fascismo.html>). ?

Laia Serra

Solo sí es sí: violencias sexuales y prisión

“No ha entrado en prisión”: esta fue la respuesta a mi tuit del pasado miércoles en el que celebraba la condena al divulgador de los datos y de la foto de la víctima de la violación grupal de los Sanfermines. Un juicio estratégico, que logró el reconocimiento del escarnio social de la víctima denunciante, el *victim blaming*, como forma de violencia. La obcecación social por la prisión es frustrantemente recurrente y merece una reflexión colectiva.

Situar la cárcel como único resultado digno y dignificante supone realizar un juicio injusto a las víctimas cuando optan por condonar la cárcel del agresor a cambio de no pasar por el trance del juicio, lograr una condena firme y acceder a una indemnización simbólica. Las víctimas tienen una perspectiva mucho más sabia. Ellas saben que la cárcel ni resuelve ni repara y que el éxito no es la cárcel, sino la condena. Las víctimas quieren que se determine la verdad, se las crea y se reconozca el daño sufrido. Si ponemos sus derechos en el centro, la prisión queda relegada a un segundo plano. Habría que preguntarse si esta obcecación por la cárcel obedece a que resulta más fácil delegar en el Estado la respuesta hacia las violencias sexuales que corresponsabilizarnos de ello colectivamente, a pesar de saber que el rechazo social hacia los agresores es más disuasorio que la amenaza penal.

Estos días, las noticias sobre rebajas de penas han creado una alarma que daña a las mujeres, similar al terror sexual surgido a raíz de los pinchazos en las discotecas. Es comprensible el desconcierto generado por el hecho de que la aprobación de una ley sobre derechos de las mujeres suponga estos efectos. Dicho esto, la comprensión jurídica de la situación es la mejor forma de alejarnos de una polémica más política que jurídica.

La ley del *solo sí es sí* ha equiparado los derechos reconocidos a las víctimas de violencias machistas a las de violencias sexuales. También ha modificado otras leyes, entre ellas el Código Penal. Aparte de eliminar el abuso sexual, ha mejorado varios delitos, ha incorporado penas innovadoras y ha impuesto unos umbrales mínimos de cumplimiento de las penas. En términos generales, la ley no modifica las penas máximas, sino que rebaja los mínimos, ampliando la horquilla penológica.

Cuando se reforma el Código Penal, la ley de reforma puede venir acompañada de una suerte de manual de instrucciones llamado *régimen transitorio*, que guía en la implementación del cambio. Pero cuando el Código Penal se reforma como consecuencia de la aprobación de leyes que regulan otras materias, la reforma no suele venir acompañada de ningún régimen transitorio. La incorporación de nuevos delitos no genera demasiado problema, pero la modificación y fusión de delitos, como ha sucedido en este caso, sí. Cuando no existe un régimen transitorio definido, es necesario ir a los criterios del Código Penal, entre los que se encuentra el principio de aplicación retroactiva de las leyes favorables al reo. Como este criterio es tan genérico y al mismo tiempo es tan compleja la determinación de qué Código Penal, analizado globalmente, es más favorable, los tribunales o incluso la fiscalía suelen tener que aprobar criterios unificadores, para evitar el desconcierto.

La revisión de sentencias puede provenir de la iniciativa del propio tribunal o de la petición de las

partes, debe respetar los hechos probados y los razonamientos jurídicos de la sentencia y debe acordarse mediante resolución razonada individualizada, sobre todo —como en los casos noticiados— cuando la revisión va más allá de la mera comparativa mecánica de penas.

Antes de ser aprobada, la ley del *solo sí es sí* fue revisada por el Consejo Fiscal, por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial. Este último organismo advirtió de que rebajar las penas máximas podía provocar la petición de revisión de sentencias, pero no dijo nada sobre los efectos de la rebaja de los umbrales mínimos. Y es que la rebaja del umbral mínimo de la pena no conlleva una revisión automática de las penas. De hecho, la rebaja del umbral mínimo de las penas solo abre la puerta a revisar un sector muy concreto de condenas, que son las condenas en las que la sentencia haya dictaminado que la pena precedente era la mínima. Pena mínima, que a su vez tiene un tramo superior e inferior.

La situación, como todo en Derecho, es interpretable. Y es precisamente esa la crítica que el ministerio de Igualdad está haciendo a la judicatura. Y es que algunos tribunales están poniendo la directa, revisando y rebajando las penas, tan solo porque la reforma ha rebajado su umbral mínimo, aunque resulta muy cuestionable que esté justificado revisar una pena impuesta con el Código Penal precedente cuando esta pena también forma parte de la horquilla de penas del nuevo Código. El transcurso del tiempo permitirá poner las cosas en su sitio y determinar si el otorgamiento de estas revisiones de pena que llenan las portadas de periódicos provenía de una interpretación razonable o de un sesgo patriarcal.

Más allá de la polémica, no podemos perder de vista que la reforma operada por la ley del *solo sí es sí* amplía la horquilla penológica y por tanto facilita graduar al máximo la proporcionalidad de las penas. La rebaja de las penas mínimas puede fomentar que los agresores reparen las violencias sexuales para llegar a juicios de conformidad, en los casos en los que la legalidad lo permita. Esto incrementaría el poder decisorio de las mujeres en sus procesos judiciales. Este margen más amplio de maniobra también permitirá dejar atrás el escenario de polaridad que teníamos hasta ahora: las penas mínimas eran tan altas que se abocaba a los tribunales al dilema de mandar a prisión a agresores primarios o dejar impunes las violencias sexuales. Esa polarización nunca ha jugado a favor de las mujeres. Pensando a largo plazo, quizás la rebaja de penas de esta ley acabe contribuyendo a aumentar la tasa de condenas y a reducir la impunidad en las violencias sexuales.

[Fuente: [Ara](#)]

Trabajadores fantasma

Francia 2020

Comida en la puerta de casa con un solo clic, amigos al alcance en segundos, robots al servicio de las personas: Google, Facebook, Uber... han revolucionado nuestras vidas. Pero este mundo de la tecnología esconde una realidad menos brillante. Para ejecutar sus aplicaciones, estos gigantes de la economía digital emplean un ejército de pequeñas manos invisibles. Los limpiadores de contenido filtran toda la información que circula por la red. Son trabajadores sin derechos.

Para conocer a estos nuevos proletarios ocultos al otro lado de las pantallas, han viajado a la fábrica del futuro, el secreto mejor guardado de la nueva economía.

30 11 2022

Catar: explotación en el emirato

Arte TV 2022

En noviembre de 2022 Catar acoge la Copa del Mundo de fútbol. Para este torneo, el rico emirato no ha escatimado en gastos: seis flamantes estadios, hoteles, un metro y carreteras: un presupuesto total de más de 180.000 millones de euros.

¿Cuál es el destino de los miles de trabajadores inmigrantes sin los cuales nada de esto habría sido posible? A menudo explotados, lo dejaron todo en busca de una vida mejor y para mantener a sus familias. Salarios impagados, pasaportes confiscados y condiciones de trabajo extremas, que han causado la muerte de varios miles de ellos.

30 11 2022

Salir del armario en la Universidad

Edicions Bellaterra Barcelona 2022 230

Antonio Giménez Merino

Este libro colectivo, debido a la audacia de Òscar Guasch, constituye una importante aportación para dar visibilidad a los mecanismos de discriminación que conforman la persistente y multifacética estructura sexista de nuestra sociedad. Como señala uno de sus autores, “no se lucha contra lo que no se ve”.

A partir de su propia vivencia de la homofobia (que no es solamente externa, sino que como todas las discriminaciones presenta una faz interna, introyectada socialmente en quienes la padecen), trece profesores de universidad reflexionan sobre el conjunto más amplio de reglas no escritas, pero efectivas, determinantes del status interno que cada cual ocupa en el nicho académico más allá de sus logros objetivos.

El resultado es que al capital social influyente en el acceso y la promoción dentro de los cuerpos docentes de la universidad (las redes familiares y de vasallaje) vienen a unirse otros factores excluyentes como el clasismo (muy significadamente) y el sexismo. En este sentido, el libro no es tanto un nuevo ejercicio sobre el significado de la identidad como el modo en que ésta se convierte en un factor relevante dentro de los procesos sociales y culturales de jerarquización social. Desenmascararlos supone un paso necesario para la construcción de otras normas sociales menos desiguales y hacer esto desde el lado de la homofobia descubre al mismo tiempo la centralidad que tiene el análisis de las masculinidades para las políticas de igualdad.

28 11 2022

Judith Wright

Australia 1970

Mueres, oh tierra salvaje, como el águila,
peligrosa hasta el último suspiro,
que atacando, clava sus garras. Mueres
maldiciendo a tu captor con mirada enfurecida.

Mueres como la víbora
que silba un odio tan puro de su dolor
que llena los sueños del asesino
de miedo como la mancha invasora del suicida.

Sufres, tierra salvaje, como la acacia excelsa
que agrieta la cortante pala excavadora.
Veo tu suelo lleno de vida decaer con los árboles
hasta una desnudez de pobreza.

Mueres como la hormiga soldado
indiferente mas fiel a tu millón de años.
Aunque te corrompamos con ideas torturantes,
sé obstinada: tú sigue siendo ciega.

Somos vencedores, y envenenadores,
más que el escorpión y la serpiente,
mas del veneno que fabricamos, morimos,
mientras tú, tierra, mueres a nuestras manos.

Alabo pues a la sequía que tantas muescas deja, a tu polvareda,
al arroyo moribundo, al animal furioso,
porque todavía nos desafían.
Nos arruina la cosa misma que matamos.

Versión de Jorge Salavert Pinedo

Fuente: <https://webs.ucm.es/info/especulo/numero35/poecoaus.html>

[Judith Wright (1915-2000) fue una poeta, ambientalista y defensora de los derechos de los aborígenes australianos]